



UNIVERSIDAD DE CHILE
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
ESCUELA DE POSTGRADO

Programa de Magíster en Cs. Sociales con mención en Sociología de la
Modernización

“Nuevas dinámicas de territorialización en los Valles Agromineros de Chile: El caso del Choapa”

**Tesis para optar al Grado de Magister en Ciencias Sociales, mención sociología de la
modernización**

Andrea Furnaro Lobos

Profesor Guía: Manuel Canales

Mayo 2015

Agradecimientos

Tesis patrocinada por el Centre for Social Conflict and Cohesion Studies (COES) y Rimisp-Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural.

Especial agradecimiento al profesor Manuel Canales del departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile y a Thomas Perreault del departamento de Geografía de la Universidad de Syracuse, Estados Unidos.

CONICYT-PCHA/Magíster Nacional Año 2013 – Folio 22130171

Contenido

1. Introducción	3
2. Transformaciones en la actividad agrícola y minera en los valles del Norte Chico	8
2.1. De la agricultura tradicional a lo agrario global	8
2.2. De la pequeña y mediana minería tradicional a la Gran Minería global	12
2.3. Vieja y nueva articulación agrominera	21
3. Temas de análisis	25
3.1. Estudiando territorios agromineros	25
3.2. Efectos territoriales de la producción agrominera actual	40
3.3. Desentrañando el conflicto socioambiental	49
4. Metodología	62
5. El Valle del Choapa: Antecedentes	65
5.2. El lugar del Valle	65
5.3. Principales transformaciones productivas en el Valle	67
5.4. Transformaciones socioeconómicas del Valle del Choapa (1990-2013)	75
5.5. Gran Minería e historia de conflictos en el Valle	81
6. Identidades, Imaginarios y Nuevas Relaciones Sociales en el Valle del Choapa	85
6.2. Extrañeza	85
6.3. Desconfianza	90
6.4. Idealizaciones y pesimismo	97
7. Reflexiones finales	107
Bibliografía	114
Apéndice	124

1. Introducción

Dada la diversidad geográfica de Chile en sus 4270 kilómetros de largo, ha sido habitual generar una fuerte separación entre la realidad productiva que comprende el extremo norte, la zona central y sur del país. Respecto a la producción minera y agrícola estas diferencias implican una zona norte (de la región de Arica y Parinacota a la región de Coquimbo) en la que se concentra el 76% de la producción minera y sólo el 8% de la producción agrícola. En cambio, en la zona centro (entre la región de Valparaíso y la de Biobío) se concentra el 22% de la producción minera y el 71% de la producción agrícola. Finalmente, en la zona sur se concentra sólo el 2% de la producción minera pero el 21% de la producción agrícola (Banco Central, 2013)¹. Por lo tanto, la actividad minera tiende a concentrarse en la zona árida y no agrícola del norte del país, mientras que la agricultura es más propia de la zona centro y sur.

Al estudiar los efectos socioeconómicos que estas actividades y sus dinámicas productivas generan en los territorios de Chile, ha sido habitual observar la minería y la agricultura de manera separada, como actividades que no se encuentran. Sin embargo, esta situación está cambiando. A partir del boom en los precios de los minerales que se experimentó durante la década de los dos mil, potenciado por el auge de las economías asiáticas, se dio un aumento de las inversiones mineras y una expansión de esta actividad en el territorio chileno. Especialmente de la Gran Minería del Cobre², abarcando nuevas zonas que no eran de tradición minera. A esto se le deben sumar las innovaciones en tecnología que han hecho económicamente rentable y técnicamente posible extraer minerales de zonas con yacimientos de baja calidad, por lo que nuevos territorios se han convertido en zonas de interés para grandes inversiones mineras (Cf. Bebbington y Bury, 2012: 57).

La actividad minera se ha expandido en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta y Atacama, del extremo norte de Chile y tradicionalmente minero. Pero también

¹ En base a datos por actividad y región del PIB del 2012

² Según la Empresa Nacional de Minería (ENAMI), la Gran Minería hace referencia a las empresas que producen más de 8.000 toneladas de cobre fino al día. Estas representan, según los datos del Servicio Nacional de Geología y Minas (SERNAGEOMIN) para el 2013, el 93% de la producción de Cobre. La Mediana Minería son aquellas faenas que procesan entre 300 y 8.000 toneladas de mineral al día y representa alrededor del 5% de la producción total de cobre en Chile. La Pequeña Minería hace referencia al sector de productores que en forma individual venden o benefician hasta 300 toneladas de cobre fino al día y representa aproximadamente el 2% de la producción total de este mineral.

han ido apareciendo con creciente frecuencia nuevos proyectos en la zona central y sur. Según datos de COCHILCO (Comisión Chilena del Cobre) las regiones de Valparaíso y Metropolitana, las cuales han tenido tradicionalmente niveles de producción de cobre mucho más bajos que las regiones del norte, entre 2005 y 2013 aumentaron esta producción en un 55% y 83%, respectivamente. Muy por sobre el 10% de aumento a nivel nacional para el mismo periodo y el 3% de aumento en la producción del conjunto de las cuatro regiones del extremo norte.

Por otra parte, al analizar la cartera de proyectos 2014-2023 de la minería del cobre en Chile, las cuatro regiones del extremo norte siguen concentrando la mayor cantidad de proyectos (74% del total). Sin embargo, siete nuevos proyectos (21% del total) corresponden a la región de Coquimbo, Valparaíso y O'Higgins (COCHILCO, 2013). Al analizar las concesiones mineras de exploración por región, según datos del SERNAGEOMIN, entre 2009 y 2013 en las cuatro regiones del extremo norte aumentó en 24% el número de hectáreas concesionadas, contra un 16% de aumento en las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana y O'Higgins y un 34% de aumento en las restantes siete regiones del sur del país (COCHILCO 2009; COCHILCO 2013).

Los impactos que genera la Gran Minería suelen estar vinculados a transformaciones negativas en la calidad de vida dentro de los territorios. Entre los efectos más estudiados están los medioambientales, pues durante el proceso productivo se emite un alto nivel de contaminantes sobre recursos como el agua, la tierra y el aire, además de los altos niveles de consumo de agua que la industria minera requiere, situación especialmente compleja en zonas del norte del país con escasas hídrica (Meller, 2013: 19).

Según un estudio de Meller (2013:143), al comparar territorios mineros y no mineros en Chile, específicamente comunas mineras³, en éstas suelen disminuir los niveles de pobreza con mayor rapidez e intensidad. Sin embargo, la situación es distinta para otros indicadores sociales. Por ejemplo, para los niveles de educación las comunas mineras presentan peores puntajes en las evaluaciones nacionales estandarizadas tanto para la educación básica como media. Respecto a niveles de victimización, estos tienden a ser mayores en las comunas

³ Las comunas o municipios son la división administrativa menor y más básica existente en Chile. Actualmente el territorio chileno está dividido en 346 comunas. En el estudio de Meller se seleccionaron las cuatro principales regiones minera de Chile y en cada una se estudió una comuna (Meller, 2006).

mineras. En materia habitacional, las comunas mineras presentan mayores niveles de hacinamiento que las no mineras.

Existen algunos territorios donde la relación entre agricultura y Gran Minería es de más larga data. Este es el caso de los valles agromineros, concepto con el cual hacemos referencia a una realidad productiva presente en algunos territorios del Norte Chico (sur de la región de Atacama, región de Coquimbo y norte de la región de Valparaíso) y la zona central de Chile. En estos valles existió desde la colonia hasta fines del siglo XX una relación de articulación entre agricultura y minería basada sobre todo en la proporción de alimentos por parte de los productores agropecuarios, herramientas y a veces capital para el desarrollo de la minería (Goicovic, 2000: 54). Sin embargo, en la actualidad, estos valles experimentan transformaciones sociales relacionadas con el paso desde formas tradicionales de producción minera y agrícola, hacia la llegada de grandes capitales e inversiones multinacionales mineras así como de exportación de frutas, vinos y licores. Es el caso de los valles de los ríos Huasco, Elqui, Limarí, Aconcagua y Choapa.

El objetivo de esta investigación fue analizar cómo estas lógicas de producción tanto de la Gran Minería del Cobre como de la agroexportación, transforman las formas de vida y las relaciones sociales del territorio. Este estudio se basó en el caso del valle agrominero del Choapa, el cual destaca por la rapidez y magnitud con la que se han desarrollado la agricultura de exportación y la Gran Minería del cobre durante los últimos años. Estas actividades han generado rápidas transformaciones económicas, sociales, medioambientales y paisajísticas, que se relacionan con la manera como este valle se ha insertado, desde los años 90, en la economía global. Así como, de manera más amplia, con el modelo de desarrollo basado en la extracción y exportación de materias primas en el que se enmarca el Estado chileno desde los años 80.

La realidad agrominera del Valle del Choapa aparece rápidamente manifestada en su paisaje físico. Al dejar la carretera que une el norte con el sur de Chile, para doblar en dirección a la cordillera y entrar al camino hacia Illapel, comienza un notorio cambio de paisaje. Poco a poco la vegetación comienza a desaparecer y el clima árido atrapado en el vaivén de cerros se toma el espacio. En los múltiples arreglos y mejoramientos de los caminos, empiezan a aparecer carteles que indican la construcción de nuevas obras públicas bajo el cofinanciamiento de la Minera Los Pelambres, lo que nos recuerda que nos acercamos a la zona donde se ubica una de las extracciones de cobre más grandes del mundo. El contexto

cada vez más seco de pronto se ve interrumpido por la aparición del río Choapa y junto a él el valle que acobija a la comuna de Illapel y Salamanca. Ya en el Valle, se hace evidente la mezcla entre pequeños predios agrícolas junto a grandes zonas dominadas por la agroindustria pisquera y de frutos cítricos, las que gracias a las modernas formas de irrigación logran extenderse y escalar las laderas de los cerros que rodean el Valle. En la pequeña ciudad de Salamanca, sus cerros agrietados por los caminos que llevan hacia el yacimiento escondido entre las montañas, con las distintas tonalidades de rojos y cafés que se cuelan en su paisaje, nos reafirma la realidad agrominera que determina la producción económica de la zona.

Específicamente, este estudio se concentra en dos dimensiones de la realidad del valle. La primera corresponde a la manera como las identidades e imaginarios de los habitantes se configuran en relación a las nuevas lógicas de producción agrominera. La segunda se centra en las relaciones sociales entre los nuevos y viejos actores que comparten el territorio, sus formas de cooperación y conflicto. El objetivo de observar ambas dimensiones es conjugar los aspectos estructurales de las transformaciones vivenciadas en el territorio con las representaciones de aquellos actores que vivencian dichas condiciones. Para la realización de esta investigación se realizaron cuatro visitas de campo en el Valle del Choapa en cada una de las cuales se llevaron a cabo entrevistas a habitantes vinculados directamente al trabajo minero y agrícola, trabajadores de servicios ligados a la minería, trabajadores de otros oficios, así como actores vinculados a organizaciones sociales dedicadas a la defensa del medioambiente y representantes del gobierno local.

Desde los años dos mil se han desarrollado diversos estudios sobre las transformaciones sociales que se generan a nivel territorial a partir de las grandes inversiones destinadas a la extracción de materias primas. Estos estudios han estado motivados, en gran parte, por el aumento y la profundización de los conflictos socioambientales. La mayoría de los estudios enfocados en la minería se ha centrado en casos como el de Perú, Bolivia, Ecuador, Argentina y Uruguay, a los que se suman algunas experiencias centroamericanas como la de El Salvador (Bebbington, 2011: 13). En Chile, en cambio, estudios desde las ciencias sociales que analicen el rol y los efectos de las grandes inversiones mineras en los territorios subnacionales son escasos. La mayor parte de la investigación sobre el tema, así como la atención pública, tanto en Chile como en otros países, se ha concentrado en los efectos

macroeconómicos y el aporte de estos sectores en la economía nacional (McMahon y Remy, 2003: 2).

Por otra parte, la realidad social de los valles agromineros, o de manera más general, de los contextos donde la gran producción minera cohabita con la agricultura de exportación, constituye un objeto de estudio que ha sido poco analizado. La relevancia de considerarlo es que nos permite entender no sólo las transformaciones sociales que se generan por la lógica de producción minera, sino que a la vez por la del modelo de exportación agrícola, considerando la relación de ambas actividades en la construcción del territorio. Avanzar en la realización de estudios de este tipo cumple un rol relevante en el análisis sobre cómo la economía chilena globalizada basada en la extracción de recursos naturales, crecientemente privatizada y transnacionalizada, está afectando las geografías y formas de vida locales (Cf. Bury, 2007:80).

En este informe se presentan los resultados de este estudio. En el segundo capítulo se sintetizan las principales transformaciones que ha vivido el modelo agrícola y minero en Chile, con especial énfasis en los cambios que han afectado al Norte Chico, macrozona en la que se ubica el Valle del Choapa y desde la cual se puede evidenciar con claridad el paso de una agricultura tradicional a una global y de una pequeña y mediana minería tradicional a una Gran Minería global. En el tercer capítulo se presenta una discusión conceptual de los principales temas de análisis relevantes en este trabajo. En el cuarto capítulo se presentan las especificaciones de la metodología empleada en el estudio. En el quinto capítulo se describen algunos antecedentes geográficos, históricos, económicos y sociales del Valle del Choapa. En el sexto capítulo se presenta el análisis de los principales resultados de este trabajo. Finalmente, se presentan algunas conclusiones y reflexiones finales.

2. Transformaciones en la actividad agrícola y minera en los valles del Norte Chico

2.1. De la agricultura tradicional a lo agrario global

Durante las últimas décadas la actividad agrícola que desarrollan los valles del Norte Chico y de la zona central de Chile ha ido sufriendo importantes transformaciones. Desde un modelo de agricultura predominantemente tradicional, con el correr de los años ha ido ganando terreno un modelo agroexportador acorde a una mayor globalización, con la llegada de grandes inversiones en el ámbito de la agroindustria. La economía de estos valles se ha basado tradicionalmente en la actividad agrícola y pecuaria. Las comunidades diaguitas que poblaban los alrededores de los ríos Copiapó y Choapa, ya conquistadas por los Incas, eran sedentarias y desarrollaban una actividad agrícola de riego, cultivando maíz y quínoa, entre otros productos (Álvarez, 2003: 124).

Durante la conquista española, los valles del Norte Chico brindaron condiciones óptimas de suelo, clima y regadío para el desarrollo de sembradíos, además de la utilización de los extensos interfluvio secos para el pastoreo de la ganadería. La agricultura durante esta época se concentró en el cultivo del trigo y la vid. Durante el periodo colonial Chile fue un importante exportador de trigo. Si bien al inicio de la conquista existían formas de propiedad y de cultivo originarios de las culturas Molle, Diaguita e incásica, los rasgos de éstas fueron barridos por las formas de producción y propiedad hispánicas (Aranda, 2003: 28).

Ya en el siglo XIX, diversos factores van a estimular fuertemente la agricultura, como el aumento de la demanda interna que genera la minería, la Guerra del Pacífico, el crecimiento sostenido de la población y las demandas externas desde California y Australia. Esto va a impulsar la habilitación de una mejor y más moderna infraestructura de riego y la introducción de nuevos tipos de cultivo. A la vez, comienza a utilizarse la energía a vapor en la maquinaria agrícola, como en el transporte terrestre y marítimo. De la mano a estas transformaciones se va a promover en el país la innovación agrícola, a través de la creación de la Sociedad Nacional de Agricultura en 1838, la cual va a abogar por la construcción de caminos, canales de irrigación, canales de navegación y regadío, promulgación de leyes

agrícolas y transferencia de ciencia y tecnología desde Europa. Durante los últimos dos decenios del siglo XIX la agricultura va a verse afectada por una baja de los precios en el mercado internacional y un aumento de los costos de producción (Cortés, 2003: 59).

Durante el siglo XX y hasta los años 70 predominó una agricultura tradicional, que se caracterizaba por el modelo de la hacienda, la pequeña agricultura familiar, destinada más al consumo que al mercado. En esta época las transformaciones más importantes que vivió el agro en Chile se produjeron entre 1965 y 1973, sobre todo por la reforma agraria que hace desaparecer el latifundio, expropiando la totalidad de los predios mayores de 80 hectáreas (Castro y Bahamondes, 1986:114).

Durante esta época, uno de los principales cambios que sufrió la agricultura del Norte Chico, y específicamente de la región de Coquimbo, vino dado por el desarrollo de una fuerte inversión pública en infraestructura extrapredial de riego, sobre todo a partir de los años 60 (Rolando, 2003: 220), con la construcción en la provincia de Limarí del embalse La Paloma (1965), que se sumó al embalse Recoleta (1929) y Cogotí (1936), además de posteriores conexiones que se realizaron entre las tres obras (Livenais y Aranda, 2003: 20). El funcionamiento de estos embalses permitió extender las superficies irrigadas y generar un mejoramiento de la seguridad del riego.

Antes de la construcción de estos embalses, la estructura productiva de la zona se basaba principalmente en los cultivos anuales debido a un largo periodo seco durante primavera y verano, lo que obligaba a la siembra de cultivos invernales, para aprovechar la lluvia y la humedad acumulada en el suelo de esta época. La superficie de cultivos anuales en la región de Coquimbo, sin considerar hortalizas y praderas artificiales, superaba las 40.000 hectáreas. Entre estas, los cereales, sobre todo el trigo, participaban con 36.000 hectáreas. A inicios del siglo XXI, en cambio, los cereales no superan las 3.000 hectáreas y los cultivos anuales superan ligeramente las 13.000 hectáreas (Rolando, 2003: 222).

Con la dictadura militar se va a impulsar una política de libre mercado promoviendo el desarrollo capitalista del agro. Para lograr esto las tierras expropiadas fueron privatizadas. El 30% se restituyó a sus antiguos dueños, un 28% le fue asignado a campesinos individuales o cooperativas, un 10% se le asignó a no campesinos (ex empleados de hacienda y profesionales relacionados con la agricultura) y un 20% se licitó directamente con empresarios privados (Cereceda y Barría, 1984). Si bien estos últimos visualizaron

posibilidades de éxito económico, en su mayoría resultaron productores ineficientes durante los primeros años del auge agroexportador, de manera que muchos debieron vender sus propiedades permitiendo

“la reconstitución progresiva de la mediana y gran propiedad, ya no de miles de hectáreas, sino de algunas decenas y centenas altamente productivas y tecnificadas, en manos esta vez de tan sólo algunos pocos propietarios altamente especializados, con vinculaciones a grandes empresas transnacionales agroexportadoras (de capitales nacionales e internacionales) que controlan el mercado frutícola internacional” (Razeto y Suckel, 2011:255).

Durante este periodo el sector agrícola se abrió a los mercados externos liberando sus precios, con especial expansión del rubro frutícola, ya sea para la exportación hacia el sur o el extranjero, o para la producción de licores, como ocurre con el caso de la uva (Ortega, 2010: 41). Se va a dar un auge agroexportador, con una vocación frutícola de alta eficacia y tecnificación (Razeto y Suckel, 2011:250). Así, ya en el siglo XXI, Chile es uno de los principales exportador de frutas del hemisferio sur (Romero, 2002:179).

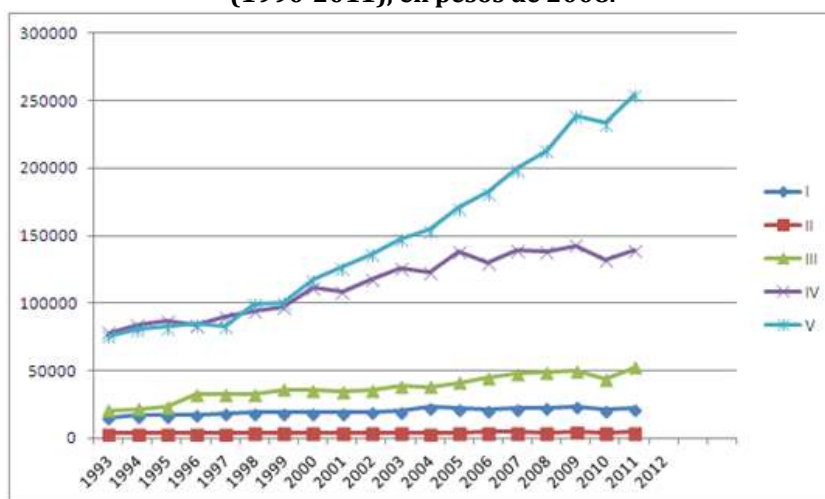
Este mayor desarrollo del agro estuvo acompañado de importantes transformaciones técnicas. Durante largo tiempo la provincia de Limarí era la única en el Norte Chico que disponía de embalses hidráulicos. En décadas más recientes los valles del Elqui y el Choapa fueron dotados de infraestructura similar, con los embalses Puclaro, Los Corrales y El Bato. De esta forma, a partir de los 80, los alrededores de estos embalses se convirtieron en lugares privilegiados para el desarrollo de una agricultura tecnificada que produce para la exportación (Livenais y Aranda, 2003: 20). A esto se le debe sumar la introducción de importantes avances en la infraestructura vial, lo que ha permitido mejorar las condiciones para la salida de productos y su conducción a la zona portuaria para la exportación (Rolando, 2003: 222).

Por lo tanto, desde los años 80 se genera una refundación capitalista y globalizadora de la agricultura que se mantiene hasta la actualidad (Canales y Hernández, 2011:86). Toma fuerza el modelo agroexportador a gran escala, el cual va a convivir, aunque de manera decreciente, con una mediana agricultura, así como con unas pocas unidades de parceleros de la Reforma Agraria que lograron superar la presión mercantil de los 80 y 90. A su vez, de manera marginal, conviven con pequeños minifundistas tradicionales asociados a una agricultura y minería de subsistencia (Razeto y Suckel, 2011:250). El sector de pequeños

agricultores que sobrevive a este proceso debe, por lo general, producir en suelos de baja calidad y con pocas posibilidades de competir con los empresarios agrícolas exportadores.

Según datos del Banco Central, entre 1990 y 2010 el sector agropecuario y pesca creció a un promedio anual de 4,7%, velocidad que superó para el mismo periodo a la minería (4,1%), a la industria manufacturera (3,4%) y a la construcción (4,3%). En el gráfico 1 es posible observar cómo entre 1990 y 2012 se da un aumento del PIB real de la actividad agropecuaria en casi todas las regiones del norte del país, pero con especial preponderancia de la Región de Valparaíso (V) seguida por la de Coquimbo (IV).

Gráfico 1: Evolución del PIB de la actividad agropecuaria en las regiones del norte del país (1990-2011), en pesos de 2008.



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Banco Central.

Un rol central ha tomado en las últimas décadas el sector frutícola. El valor del total de las exportaciones de frutas y verduras chilenas ha crecido desde US\$ 900 millones en 1990 a US\$ 1.536 millones en 2000 y US\$ 5.799 millones en 2012. Se ha desarrollado la exportación de nuevas frutas como peras, membrillos, berries y, de manera más reciente, cítricos como naranjas, mandarinas y limones (Meller y Zenteno, 2013: 142). Para este crecimiento fue fundamental la promoción de capital humano desde los años 60. Además, un factor clave jugó el trabajo realizado por el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) para la protección del país de la importación de plagas y pestes y para la generación de mayores controles de calidad de los productos de exportación, con la entrega de certificados de calidad. Adicionalmente, la agencia ProChile a través de su trabajo de promoción de exportaciones chilenas en el extranjero, ha sido considerada un factor relevante para el aumento de la exportación y producción frutícola. Todo esto sumado a los tratados de libre comercio

negociados por los distintos gobiernos durante las últimas décadas (Agosín y Bravo-Ortega, 2007).

Las transformaciones en la pequeña agricultura han sido profundas durante este periodo. En 1980 casi la mitad de la fuerza de trabajo en la agricultura en Chile consistía en pequeños agricultores, lo que va a transformarse profundamente con la modernización y globalización del sector. Las altas tasas de pobreza rural y los bajos niveles salariales en el sector agrícola, constituyen unas de las ventajas comparativas del sector agroexportador. Además, la alta rentabilidad y el crecimiento del sector dinamizan el mercado de la tierra y aumentan la presión sobre los predios creados al término de la Reforma Agraria (Berdegú y Rojas, 2014).

En un reciente estudio de Berdegú y Rojas (2014) se analiza la evolución en el número de pequeños agricultores por cuenta propia entre el 2000 y el 2011, en el que es posible constatar una disminución de un 10% de los hogares de pequeños productores en el país durante este periodo. “Estos hogares de agricultores familiares representaban el 28% en el 2000 y el 25% en el 2011, respecto del total de hogares dedicados a la agricultura, siendo superados por los hogares de trabajadores asalariados agrícolas (68% en el 2000 y 73% en el 2011)” (Berdegú y Rojas, 2014). Las principales disminuciones en el número de pequeños agricultores se dan en las regiones de Coquimbo (-30%), O’Higgins (-46%), Los Lagos (-26%) y Biobío (-21%).

2.2. De la pequeña y mediana minería tradicional a la Gran Minería global

Por otra parte, si estos valles se habían constituido históricamente como agrícolas y, en algunos casos, de pequeña minería, muchos de ellos con el correr de los años fueron recibiendo el influjo de la Gran Minería que se fue expandiendo desde el Norte Grande hacia el Norte Chico. La expansión de la actividad minera hacia el Norte Chico había comenzado ya en el siglo XVIII (Camus, 2004:290). La existencia de la minería y la agricultura como las principales actividades productivas de varios de los valles de esta zona va a mantenerse con el correr de los años, tomando nuevas formas en la medida en que se fueron transformando ambas industrias.

En el caso de los minerales, Chile fue exportador sobre todo de oro y plata durante la colonia, para que luego, en los siglos XVIII y XIX, el cobre adquiriera predominancia. Durante la década de 1880 va a comenzar la exportación salitrera a gran escala (Meller, 1998: 19). Ya desde la primera mitad del siglo XIX, el cobre era uno de los principales productos chilenos de exportación. Esta producción provenía de un importante número de pequeñas minas, que no producían cada una más de 20.000 toneladas y hacían uso de una tecnología rudimentaria e intensiva en trabajo. A fines del siglo XIX se produjo un importante aumento de la demanda extranjera, con la llegada de la industria eléctrica y la expansión de la construcción. A la vez aparecieron importantes innovaciones tecnológicas realizadas en Estados Unidos que hacían más rentable la explotación de cobre. A inicios del siglo XX distintas firmas norteamericanas van a realizar inversiones mineras en Chile, dada la insuficiencia tecnológica y financiera de los capitales chilenos. Parte importante de la industria minera estuvo desde sus orígenes controlada por capitales extranjeros. Son estos los que han puesto la capacidad financiera y técnica para que esta exportación sea a gran escala. Así, a inicios del siglo XX surge la Gran Minería del Cobre, gracias a las importantes innovaciones tecnológicas ocurridas en Estados Unidos, que hacen rentable su exportación a gran escala (Meller, 1998: 31).

La minería del cobre del Norte Chico, que se había instalado a partir de 1850, logrando competir por tres décadas de manera favorable en el mercado londinense, va a vivir una importante decadencia durante la década de 1920, en medio de la inestabilidad económica que siguió el término de la Primera Guerra Mundial, a lo que se le sumó los efectos del terremoto y tsunami de 1922 que destruyeron varias de las instalaciones mineras de la zona. Esto implicó el cierre de muchas faenas, afectando la actividad comercial de las poblaciones que se habían desarrollado a su alero. Esta depresión va a durar hasta mediados de los años 40, cuando se da cierto resurgimiento para declinar nuevamente en 1949. A partir de 1953 se experimenta un nuevo repunte, dadas las mejores condiciones en el mercado externo y una política de cambios preferenciales (Ortega, 2012).

En los primeros años del desarrollo de la Gran Minería del Cobre, la participación chilena va a ser baja, alcanzando cifras cercanas al 11%. Entre 1925 y 1960 el gobierno va a intentar incrementar esta participación, así como reducir el carácter de enclave de esta minería, para conectarla a la economía chilena y utilizar sus excedentes en función de un mayor

desarrollo. Esto va a suponer un progresivo aumento de los impuestos a la renta del cobre, proceso que va a terminar en la nacionalización del mineral durante el gobierno de Salvador Allende en 1971 a partir de la ley 17.450 (Meller, 1998:32).

Hasta 1971 la legislación minera nacional se basaba en el principio de la libertad de minas, cuyo origen venía de las Ordenanzas de Nueva España o México dictadas en el siglo XVIII. Esta no le reconocía al Estado un dominio pleno sobre los yacimientos, sino sólo un dominio eminente, como consecuencia de su soberanía territorial, pero que le impedía la facultad de usar y gozar de los yacimientos y le otorgaba la propiedad a particulares descubridores. Con la ley 17.450 se modifica la Constitución Política de 1925 y se consigna una doctrina regalista de la riqueza minera, es decir un dominio patrimonial del Estado, permitiendo la expropiación de la Gran Minería del Cobre. Se pasa desde una propiedad privada de los particulares hacia una propiedad en concesión (Agacino et al, 1998: 31). Con esto se va a expropiar la Gran Minería del Cobre, propiedad hasta ese entonces de capitales extranjeros, sobre todo norteamericanos.

Durante la dictadura militar, ya desde el inicio de la conformación de la Comisión Elaboradora de la Nueva Constitución (CENC), se generaron profundas discrepancias sobre el destino que debía tomar la Ley 17.450, específicamente respecto a si quitarle o no el dominio patrimonial al Estado sobre los yacimientos. Finalmente, en el texto incorporado a la Constitución Política dictada en 1980 se consignó el “dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible del Estado sobre todas las minas del país”, lo que no lo desprendía de su dominio patrimonial y mantenía el derecho de concesión de los particulares pero no el de propiedad. Política que resultó paradójica respecto al corte neoliberal que tenía dicha Constitución. Esto explica que, casi inmediatamente después de su promulgación, se levantaran fuertes discusiones dentro de la misma administración y colaboradores respecto a la interpretación de estos artículos, lo que llevó a la renuncia del Contralmirante Quiñones, ministro de minería de ese entonces, y a la promulgación en el cargo de José Piñera, quien fuera uno de los artífices de algunas de las principales reformas neoliberales en el país (Agacino et al, 1998: 36).

Este nuevo ministro, a partir de enero de 1981 se aboca a elaborar la Ley Orgánica Constitucional sobre Concesiones Mineras que se promulga en 1982, cuyo objetivo principal

era darle una interpretación más neoliberal al inciso sexto del N°24 del artículo 19 de la Constitución Política. A través de esta Ley se establece que el dominio estatal sobre la riqueza minera no es un dominio pleno, es decir, un derecho a uso, goce y libre disposición. Luego, en 1983, entra en vigencia un nuevo Código de Minería, que incluye la Concesión Minera Plena, a través de la cual se reestablece el dominio privado sobre los yacimientos mineros (Larraín, 2012). Uno de los principales objetivos de este nuevo código era asegurar derechos sólidos de propiedad en el sector minero y a la vez hacer de éste un sector atractivo para la inversión extranjera.

Estas transformaciones se dieron en conjunto al Decreto Ley 600 del año 1977, reformado en 1987, el cual establece una serie de mecanismos para facilitar la inversión extranjera⁴. No obstante, estos nuevos mecanismos no fueron suficientes para lograr un mayor auge de la inversión extranjera en la minería, dado el alto riesgo político que involucraba la dictadura militar. Fue necesario el regreso a la democracia en 1990 y las mayores condiciones de estabilidad política para que se materializara el aumento de las inversiones extranjeras generándose el llamado “boom minero” (Guajardo, 2007).

Además de la apertura a las inversiones extranjeras, este boom se relacionó también con las presiones ambientales y la reducción de recursos en los países desarrollados, que hacían cada vez más difícil y costosa la minería en países como Australia, Canadá y Estados Unidos. En América Latina, en cambio, las normas permitían mejores condiciones para los inversionistas extranjeros, sobre todo en cuanto al pago de tributos y a la repatriación de ganancias (Gil, 2009: 23).

La creciente inversión privada va a cambiar significativamente el porcentaje de participación de CODELCO (Corporación Nacional de Cobre), la principal empresa estatal, en la producción de cobre. Mientras que a inicios de los 90 la estatal aportaba el 75% de la

⁴ El Decreto Ley 600 entra en vigencia en 1974, año desde el cual la mayoría de los inversionistas lo han utilizado como mecanismo de entrada a Chile. Este es un Estatuto de la Inversión Extranjera, el cual busca atraer la llegada de capitales extranjeros al país. Los principios del decreto son “el trato nacional para los inversionistas extranjeros, su libre acceso a los mercados nacionales y la casi total prescindencia del Estado con relación a las actividades de las empresas extranjeras o al destino sectorial de sus recursos” (Ffrench-Davis, 2003: 288). Para entender mejor el rol del DL600 en las inversiones extranjeras en Chile ver Ffrench-Davis, R. (2003). La inversión extranjera directa en Chile. Hacia un Chile competitivo: Instituciones y políticas, 1a ed., Santiago, Editorial Universitaria, 287-324.

producción nacional, en el año 2011 este porcentaje se reduce a un 33% (Meller, 2013: 31). Esto también ha significado una superación del aporte que realizan las empresas privadas al fisco, en comparación al realizado por CODELCO (Milet, 2010: 25).

Si en 1990 las exportaciones de cobre representaban el 12% del PIB, en el año 2011 pasan a sumar el 18% (Meller, 2013: 16). Sin embargo, con las caídas en el precio del mineral desde el 2011 este porcentaje ha ido disminuyendo, dando cuenta del efecto de la volatilidad de los precios del mineral en su aporte en el producto nacional. Después del llamado boom de los commodities, vivido durante la década de los dos mil gracias al alto precio que mantuvieron las materias primas, la minería sigue siendo una actividad de alta relevancia: el año 2013 aportó el 11,1% del PIB nacional, con 7.227 miles de millones de pesos correspondientes a la minería del cobre y 830 miles de millones de pesos a otras actividades mineras (90% y 10%, respectivamente). Respecto a las exportaciones mineras, estas representaron el 57% del total en el 2013, dentro de las cuales el 91% corresponde a cobre. Entre las inversiones totales del país del 2012, las inversiones mineras representaron el 26% (con 7.758.441 millones de pesos) y entre las inversiones extranjeras del 2013 representaron el 53% (con 3.901 millones de dólares).

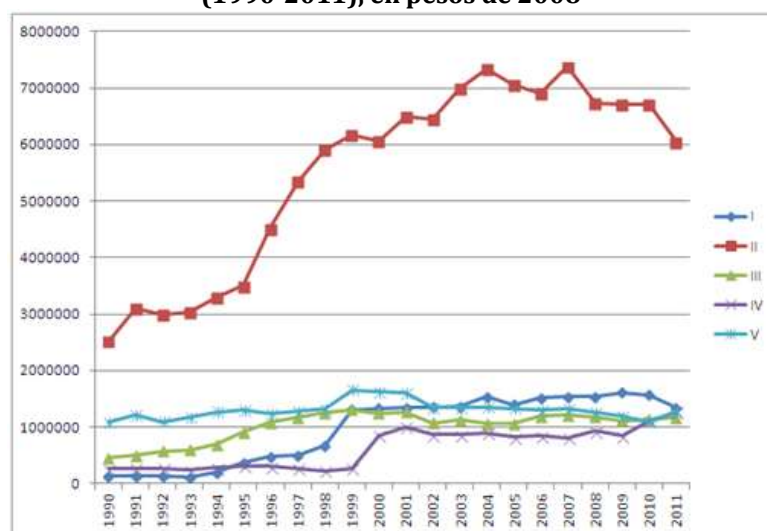
Por otra parte, la minería es importante fuente de contribución a los ingresos del fisco. En la recaudación fiscal para el año 2013 la contribución de la empresa estatal Codelco fue de 2.868 millones de dólares, 4,9% del total de los ingresos fiscales. Mientras que la contribución al fisco de las 10 principales empresas privadas productoras de la Gran Minería en Chile (representantes del 90% de la producción de la minería privada), fue de 2.965 millones de dólares, 5,1% del total (COCHILCO, 2014:72). Además, la exportación de cobre es el principal mecanismo de generación de divisas de la economía chilena, para el financiamiento de las importaciones y poder mantener el equilibrio interno (Meller, 2013: 42). Dado estos beneficios fiscales y macroeconómicos de la minería, uno de los principales promotores de estas inversiones es el Estado, el cual ha ido potenciando los mecanismos desarrollados desde los años 80 para promover las inversiones extranjeras, a través de políticas y normativas que generan un contexto propicio para la instalación de grandes proyectos mineros.

El alto precio que han mantenido los metales en los mercados internacionales y las facilidades que otorga la legislación chilena a la industria minera, son elementos centrales

para explicar la expansión minera hacia el Norte Chico. A esto debe agregarse la alta demanda por minerales a nivel mundial y las innovaciones en tecnologías mineras que han hecho económica y técnicamente posible recuperar minerales en zonas con yacimientos de baja calidad (Bebbington, 2010: 57). Todo esto ha permitido que las explotaciones se extiendan sobre países de la región que habían permanecido inexplorados o que no tenían una tradición minera previa, como Argentina, Ecuador, Venezuela, Honduras y Guatemala (Composto, 2012: 255). Dentro de Chile, esto permite explicar la extensión de la Gran Minería a zonas que no eran las habituales, como ocurre con el Norte Chico y la zona central del país.

En el gráfico 2 podemos ver cómo ha evolucionado el PIB de la actividad minera en las regiones del norte del país entre 1990 y 2011, donde es posible notar un importante auge de la actividad en la Región de Coquimbo (IV) a fines de los años 90, para luego mantenerse hasta fines de los años 2000.

Gráfico 2: Evolución del PIB de la actividad minera en las regiones del norte y centro del país (1990-2011), en pesos de 2008⁵



Elaboración propia a partir de los datos del Banco Central.

Al analizar las regiones de Chile según el peso que la actividad minera tiene en los PIB regionales según datos del Banco Central para el 2010, la lista la encabeza la región de Antofagasta (II), en la cual casi dos tercios del producto se explican por la actividad minera.

⁵ No se considera la región de Arica y Parinacota (XV), creada en el 2007, y que antes de dicha fecha estaba incluida la región de Tarapacá (I) para hacer comparable la serie estadística.

En el segundo lugar se ubica la región de Atacama (III) y en el tercer lugar la región de Tarapacá (I), en las cuales la actividad minera tiene una participación en el producto cercano al 50% y al 40% respectivamente. La región de Coquimbo (IV) se ubica en cuarto lugar, con un peso de casi el 40% de la actividad minera en el PIB (Clerc, 2013: 115). Al analizar el aporte de cada región en la producción nacional de cobre, según datos del SERNAGEOMIN para el año 2013, la región de Antofagasta (II) aportó el 52% de la producción de cobre fino, seguida por la de Tarapacá (I) y de Coquimbo (IV), con un 10% de aporte en el total cada una.

Si bien en las últimas décadas se generan incentivos para el desarrollo de la Gran Minería en Chile, también van a tomar fuerza pequeñas y medianas empresas mineras. Estas en su conjunto generan un aporte de gran importancia en las exportaciones del país. Por ejemplo, en el 2011, las exportaciones de las pequeñas y medianas empresas mineras superaron las exportaciones totales de salmón, forestales, de vino y de uva (Meller, 2013: 27). Sin embargo, la pequeña y la mediana minería representan un porcentaje mucho menor en comparación a la producción que genera la Gran Minería, la cual en el año 2011 representaba el 85,6% de la producción. Pese a esta gran diferencia, es importante hacer notar que esta cifra ha ido disminuyendo desde el año 2000 a la actualidad, pues en dicho año la Gran Minería representaba el 92,5% de la producción nacional. Además, si entre 1990 y 2000 la Gran Minería creció a una tasa anual del 30,3%, entre el 2000 y el 2011 lo hizo a un 0,1%, mientras que la pequeña y mediana minería creció en el primer periodo a un ritmo anual del 5,7% y en el segundo a uno de 7,3% (Meller, 2013: 31).

En el siguiente cuadro es posible observar la producción de cobre fino por región de la Gran, la Mediana y la Pequeña minería en los años 2003 y 2012. Podemos observar que la Gran Minería aumenta en un 15% su producción, mientras que la mediana disminuye en un 20% y la pequeña aumenta en un 82%. Al analizar por región, vemos que las mayores tasas de crecimiento se dan en la Pequeña Minería en la región de Atacama (228%), en la Mediana Minería de Valparaíso (187%), en la Mediana Minería de Coquimbo (158%) y en la Pequeña Minería de Antofagasta (156%). Llama la atención las altas tasas de crecimiento tanto de la pequeña, mediana y alta minería de la región de Coquimbo, en acorde con el fuerte impulso que ha ido tomando el sector en esta zona del Norte Chico del país.

Cuadro 1.
Producción de cobre fino por región según tipo de minería (en T.M. de Cobre Fino)

Regiones	2003		2012		Variación 2003-2012
Gran Minería					
Tarapacá	606.305	13,7%	431.054	8,5%	-29%
Antofagasta	2.339.420	52,7%	2.857.529	56,1%	22%
Atacama	300.568	6,8%	222.380	4,4%	-26%
Coquimbo	337.793	7,6%	497.461	9,8%	47%
Valparaíso	306.070	6,9%	303.753	6,0%	-1%
Metropolitana	207.846	4,7%	362.707	7,1%	75%
Lib. O'Higgins	339.440	7,6%	417.242	8,2%	23%
Total	4.437.442	100%	5.092.126	100%	15%
Mediana Minería					
Tarapacá	-	-	-	-	-
Antofagasta	259.526	61,1%	61.960	20,2%	-76%
Atacama	130.117	30,6%	127.311	41,4%	-2%
Coquimbo	24.238	5,7%	62.872	20,5%	159%
Valparaíso	11.079	2,6%	31.834	10,4%	187%
Metropolitana	-	-	-	-	-
Lib. O'Higgins	-	-	23.442	7,6%	-
Total	424.961	100%	307.419	100%	-28%
Pequeña Minería					
Tarapacá	-	-	529	0,6%	-
Antofagasta	7.995	17,1%	20.469	24,0%	156%
Atacama	12.095	25,9%	39.645	46,5%	228%
Coquimbo	8.085	17,3%	15.810	18,6%	96%
Valparaíso	6.807	14,6%	8.585	10,1%	26%
Lib. O'Higgins	11.722	25,1%	130	0,2%	-99%
Total	46.704	100%	85.168	100%	82%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SONAMI

Las inversiones mineras en el país están en crecimiento y se espera que esta tendencia se mantenga en las próximas décadas. Por una parte, la demanda por cobre debería seguir aumentando, dado el rol que desempeña para las economías emergentes en los procesos de urbanización y de construcción de infraestructura eléctrica, productos electrónicos y autos (Maller, 2013: 23). La demanda actual por cobre tiene que ver con sus múltiples usos, sobre todo en la industria del transporte, la electrónica, la construcción, la agricultura, la energía, la salud y las nuevas tecnologías. Además de la producción de aleaciones, la fabricación de utensilios de cocina, equipos químicos y farmacéuticos, monedas y dispositivos anticonceptivos intrauterinos, entre muchas otras (Meller, 2013: 187).

Además, se debe considerar la demanda en aumento por cobre en China, país que en la última década se convirtió en el primer demandante de cobre a nivel mundial (representando el 26% del consumo mundial en 2007), seguido por Estados Unidos, lo cual

ha sido uno de los factores fundamentales de la subida del precio del mineral (COCHILCO, 2008).

Por otra parte, Chile es el principal productor cobre en el mundo, con un 32% de la participación en la producción a nivel mundial, seguido por China, Perú y Estados Unidos. También Chile es el país con mayores reservas de cobre en el mundo, representando en el 2011 el 28% del total, seguido por Perú con un 13% y Australia con un 12% (Meller, 2013: 29). En el ranking de reservas también se ubica como el tercer país con más reservas de molibdeno y plata y el cuarto país con más reservas de oro (SERNAGEOMIN, 2013). Según estimaciones de COCHILCO, en base a la cartera de proyectos mineros se esperan entre 2014 y 2023 inversiones de 104,8 mil millones de dólares, 16% del cual ya ha sido gastados, el 47% se desembolsaría entre 2014 y 2018 y el restante 37% desde el 2019 en adelante (COCHILCO, 2014).

2.3. Vieja y nueva articulación agrominera

En Chile, sobre todo en los valles agromineros de la zona central y del Norte Chico, existió por muchos años una relación de articulación entre agricultura y minería. Su relación se va a dar principalmente a través de la proporción de alimentos por parte de los productores agropecuarios, herramientas y a veces capital para el desarrollo de la minería. De esta forma, se configuraba un paisaje económico en el cual los centros mineros, sobre todo los orientados a la explotación cuprífera, operaban fundamentalmente para satisfacer la demanda externa (española primero y luego inglesa), mientras que las haciendas y los pequeños productores agrícolas iban generando un emergente mercado interno al dirigir sus productos hacia los campamentos mineros (Goicovic, 2000: 54).

Según Ortega (2012), hasta mediados del siglo XX existió una intensa articulación entre minería y agricultura en el Norte Chico y específicamente en la región de Coquimbo. En este entonces era un sector minero cuya producción tenía como destino el mercado internacional capitalista y que se había estructurado de acuerdo a las pautas del capitalismo industrial y una agricultura en la que convivían la gran propiedad, los pequeños campesinos y las comunidades agrícolas (Ortega, 2012: 48). Si bien desde el punto de vista del empleo y de la inversión, la minería no era la actividad más importante en la zona, sí eran determinantes sus articulaciones con otros sectores productivos, específicamente con la agricultura. Esto permite explicar los importantes efectos que la decadencia de la minería desde la década de 1920 tuvo en la actividad agrícola de la zona. Con la reducción de las operaciones mineras las compras del sector agropecuario cayeron sustancialmente. Pero la producción agropecuaria de la región no sólo se articulaba con la minería que se producía en la zona, sino también con la industria salitrera y la minería del Norte Grande, cuya caída, y el colapso definitivo de la primera, privó al sector de un mercado que había sido vital para la colocación de sus productos.

Mientras durante la colonia el crecimiento de la producción minería generaba un aumento en la demanda de alimentos y por lo tanto un efecto sobre la agricultura local y nacional, en la actualidad este sector no moviliza una demanda muy importante por alimentos que funcione como una oportunidad de mercado para la agricultura local. A su vez, la agricultura cada vez más destinada a los mercados externos, no genera una producción de alimentos

diversificados destinados al consumo local⁶. Por lo tanto, el abastecimiento alimentario de la mano de obra minera se satisface a través de cadenas de comercialización independientes, como las que generan los supermercados. Es decir, tanto la agricultura como la minería siguen una lógica concentrada sobre todo en el mercado internacional.

Si bien se articulaban económicamente, ambas actividades durante la colonia van a competir por la mano de obra de la zona, lo que va a fomentar un mercado laboral interno en el que se pagaban salarios más altos que en otras regiones del país (Aranda, 2003: 29). La inestabilidad del clima de esta zona, así como la inestabilidad propia de actividades como la minería y del pastoreo basado en desplazamientos, significó durante la colonia una alta movilidad de los pobladores, quienes conformaban una identidad que sabía transitar entre agricultor, pastor y minero (Aranda, 2003: 29). Según Goicovic (2000), en distintos valles del Norte Chico a comienzos del siglo XIX, se daba un contexto socioeconómico plurifuncional, en el cual se combinaban y superponían las actividades mineras, agrícolas y ganaderas. La estacionalidad de las actividades agrícolas y ganaderas y los ciclos recurrentes de expansión y contracción de la minería determinaban una fuerte movilidad territorial y laboral entre la población de la zona.

De esta forma, la relación entre agricultura y minería nos permite explicar la importante movilidad interna de la población que existía al interior de la región de Coquimbo. Cambiar “el casco minero por la chupalla” cuando “las minas no rinden lo que deben rendir” era una práctica habitual durante las décadas de 1930 y 1940, tal como recuerda el personaje Galvarino Arqueros de *La Novela de Galvarino y Elena* de José Miguel Varas, al reflexionar sobre el trabajo no urbano en la zona. Por lo tanto, en las estrategias de vida de las comunidades rurales de la época, el trabajar en la agricultura y en la minería como actividades complementarias, jugaba un rol de gran importancia (Ortega, 2012: 48).

En esta primera etapa de expansión minera, surgieron conflictos en relación a la deforestación de la zona, la cual era culpada a los mineros, quienes requerían de la madera local como combustible. La presión sobre los recursos vegetales del Norte Chico se intensificó aún más durante las primeras décadas del siglo XIX con los descubrimientos de

⁶ Según datos de ODEPA en base al Censo Agropecuario del 2007, el 61% de las explotaciones de Chile señalan mantener su producción o parte de ella orientada a mercados externos (ODEPA, 2011).

los minerales de plata de Agua Amarga (1815), Arqueros (1825), Chañarcillo (1832) y Tres Puntas (1848) y con la explotación de un sinnúmero de pequeñas y medianas minas de cobre a partir de 1826 (Camus, 2004:298). Esto lo señalaba Claudio Gay al retratar la historia de la agricultura en Chile. Según el historiador, la tala de árboles que llevaban a cabo los mineros en las montañas de zonas rurales, generó una escasez de leña que desató un conflicto a mediados de siglo. En esos años la Sociedad de Agricultura reunía a los principales terratenientes agrícolas del país, quienes en función de sus intereses levantaron demandas legales para resolver este conflicto, lo que implicó largas discusiones parlamentarias (Gay, 2009:162).

En el siglo XX y XXI, con la expansión de los nuevos modos de extracción minera ya no va a ser posible lograr sustentar la producción con la mano de obra local extensiva, la cual fue reemplazada por una fuerza de trabajo más especializada generalmente externa a la localidad (Damonte, 2012: 117). Uno de los primeros efectos de la coyuntura de altos precios de los metales entre 2004-2008, fue la generación de importantes desplazamientos en el mercado laboral de las regiones III y IV, generándose una importante “fuga” de fuerza de trabajo desde los campos frutícolas a faenas mineras de todo tamaño, con los problemas que aquello generó para la industria agrícola (Ortega, 2010:42). Por lo tanto, en el siglo XX, sigue existiendo una relación importante entre los cambios en el mercado laboral de la actividad agrícola con aquellos que se dan en la minería, con los flujos de población entre los territorios que ello genera. Sin embargo, la competencia en la actualidad es más favorable para la minería, que tiene la capacidad de pagar salarios mucho más altos que la agricultura. Según datos de la encuesta de caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN) del 2011, los trabajadores no calificados que trabajan en la explotación de minas y canteras tienen ingresos del trabajo en promedio casi del doble que los trabajadores no calificados dedicados a la agricultura, ganadería, caza y silvicultura (400 mil contra 210 mil pesos, aproximadamente). Incluso el salario promedio de los trabajadores no calificados de la minería son mayores que los de los trabajadores calificados de la agricultura (320 mil pesos aproximadamente)⁷.

⁷ Este cálculo incorpora a los trabajadores que en la encuesta Casen quedan registrados como pertenecientes al sector “explotación de minas y canteras”, lo que tiende a no considerar a los trabajadores subcontratados que suelen quedar registrado en el sector “Intermediación financiera”. Es importante considerar que estos últimos tienden a recibir sueldos más bajos que los trabajadores directos (Aroca, 2002: 90).

Pese a los mayores salarios, la cantidad de trabajos que genera la minería es limitada y por lo general es temporal. La minería es intensiva en capital pero no en mano de obra, de esta forma se da la paradoja de que mientras genera una cantidad de producto mayor a nivel nacional (12% del PIB del 2013, contra el 3% que aportó el sector agropecuario-silvícola), no genera más cantidad de empleo que la agricultura en Chile (5% de los ocupados según CASEN 2011, contra el 7% de ocupados que pertenecen a la actividad agricultura, ganadería, caza y silvicultura). A nivel de los territorios esta situación se replica, con una actividad minera que genera alto producto pero poco empleo y una agricultura que genera bajo producto pero mayor empleo. Si bien la minería también genera una mayor cantidad de trabajos vinculados al comercio y los servicios que se van desarrollando a nivel local.

3. Temas de análisis

3.1. Estudiando territorios agromineros

Estudiar un territorio específico y sus transformaciones supone desafíos conceptuales relevantes para su delimitación como objeto de análisis. El qué define un territorio y el cómo debe delimitarse para estudiarlo ha constituido una larga discusión desde las distintas disciplinas interesadas por la relación entre el espacio, la naturaleza y la sociedad. En este capítulo se presenta un análisis de los principales conceptos en juego que resultan relevantes al estudiar un territorio agrominero en Chile, tomando en consideración algunas de las discusiones que han marcado su desarrollo desde las ciencias sociales, sobre todo desde la geografía humana.

Regiones y territorios

La primera y más intuitiva noción que nos entrega la geografía para hacer referencia a un territorio específico, es la que lo distingue como una parcelación de la superficie de la tierra. Bajo esta noción se agrupan conceptos como el de territorio o región. En este sentido, la corografía, término utilizado desde el siglo I, hace referencia al estudio de parcelas concretas de la superficie terrestre, espacios contiguos, ya sean localidades, parte de países, países enteros, conjuntos de países o continentes (Cresswell, 2004: 16). Desde una “geografía regional clásica”, la noción de región hace referencia a entidades físicas reales, objetivas, como resultado de la interacción entre la naturaleza y la sociedad. Era una concepción que buscaba aplicarse sobre todo a los territorios de la Europa preindustrial (especialmente de la Francia rural con el trabajo de Vidal de La Blache), donde los resultados de dichas interacciones eran relativamente estables en el tiempo y en las que se privilegiaban las investigaciones de ámbitos rurales, localidades, comarcas, pero no tanto los paisajes industriales (García, 2006: 32).

Con el interés por los procesos modernos de urbanización, durante el siglo XX se empieza a plantear una noción de región cuyo estatuto ontológico es más difuso. Algunos autores van a plantear que más que realidades evidentes, las regiones son herramientas conceptuales

del investigador. Desde esta perspectiva, las regiones no tienen fronteras fijas y absolutas, sino que estas varían según el objeto que se quiera estudiar. Eso no quiere decir que sean categorías de análisis artificiales o antojadizas, sino que deben ser operativas y dar cuenta de realidades regionales. Según Agnew, es un falso dilema el que disputa si la región es un ente objetivo o más bien un instrumento subjetivo utilizado para el análisis, más bien “las regiones son tanto la materialización de las diferencias existentes sobre la superficie terrestre como las ideas que las personas se forman sobre esas diferencias” (Agnew, 1999: 93).

La llamada “nueva geografía regional”, a partir de los años 80, va a entender el estudio de lo regional desde un sentido bastante distinto al que tenía el planteamiento corológico clásico. No sólo busca estudiar regiones sino que la regionalización misma es objeto de estudio, en tanto responde a razones sociales que deben ser comprendidas para entender la realidad de las regiones que se estudian. Así Castree plantea: “la diferencia geográfica importa no sólo por sí misma, sino también porque tiene efectos constitutivos sobre los procesos, normas y regulaciones que se despliegan sobre amplios espacios y tiempo” (Citado en García, 2006: 40).

Por su parte, la noción de territorio, como la de región, hace referencia a una porción de la superficie de la tierra. Sin embargo, con la primera se tiende a poner el énfasis en las características propias del asentamiento y apropiación humana en un espacio físico, tanto en su dimensión jurídica, política, cultural y económica (Paasi, 2003: 109). Con el concepto de territorio, se busca superar la noción del espacio como una realidad neutra y objetiva. Esto explica que la proliferación del concepto en los estudios de las ciencias sociales se de en paralelo a las teorías que ponen en interdependencia al espacio físico y la sociedad, sobre todo a partir de los años 80 (Painter, 2010: 1091). Por lo tanto, la noción de territorio hace referencia a una realidad socio-física, que incluye una relación entre procesos sociales y el espacio material.

El concepto de territorio se ha expandido en las últimas décadas como objeto de estudio en el plano de las ciencias sociales, la geografía y la economía, así como preocupación de las políticas públicas y como objeto de reivindicación social. Su uso es variado, equívoco y su definición es compleja. La intensificación de su uso tiene que ver, por una parte, con el matiz político con el que se utiliza desde organizaciones sociales, movimientos indígenas y ONGs

en el mundo. Ante los conflictos crecientes entre comunidades locales, el Estado, empresas y otros actores que disputan el uso que se le quiere dar a la tierra según sus lógicas respectivas, se utiliza el concepto de territorio como una forma de enfatizar el carácter social, cultural e identitario de ésta. El concepto de territorio en este sentido, es una forma de agregarle valor cultural y no mercantil a la realidad física en la que se asientan las comunidades.

Además, con el concepto de territorio se pone énfasis en la lógica activa de quienes lo habitan y se identifican con él, no como ocupadores pasivos de un espacio dado, sino como constructores de una realidad social de la que forman parte y en la cual se imbrican sus identidades, historias y proyectos (Forsberg, 2003). Esta mirada se centra en el territorio como espacio social en contraposición a la del habitante-cliente-pasivo, ya sea desde el punto de vista del Estado interesado por el dominio soberano de la tierra como el de las empresas interesadas en el uso de los recursos productivos que ésta provee. El concepto de territorio desde un uso reivindicativo penetra también en las políticas públicas, las cuales en la actualidad ponen a la perspectiva territorial entre sus modelos de desarrollo (Cf. Schejtman y Berdegú 2003). De igual forma, va a tener efectos en las lógicas de acción de las empresas, las que muchas veces van a incorporar en su lenguaje la importancia del desarrollo de los territorios a través negocios más sustentables, que generen menos relaciones conflictivas con los actores locales.

El territorio así entendido, es definido como un espacio determinado por relaciones de poder, por lo que supone una dimensión política de la construcción del espacio. De la mano a la dimensión política, el motor más importante de su construcción viene dado por la acción de sujetos sociales. El concepto de territorio no puede entenderse desligado del concepto de acción y por lo tanto de la idea de actores, *territores*, como sujetos sociales con capacidad de incidir en su construcción. En este sentido, no es trivial que el uso del concepto de territorio tome fuerza en paralelo a la emergencia creciente de conflictos territoriales. La importancia de la acción en la constitución del territorio, implica comprenderlo desde su carácter a la vez pasivo y activo, como sustantivo y como verbo, perspectiva dialéctica desde la cual el territorio está constituido por la construcción del territorio, por lo cual utilizamos en su estudio nociones como las de “dinámicas de territorialización” o “pautas de construcción del territorio”.

Pero además de esta dimensión política, según Haesbaert (1997) el concepto de territorio es usado en el mundo académico desde otras vertientes. Propone tres dimensiones centrales, los cuales suelen mezclarse en el análisis de los territorios, apareciendo algunas con mayor predominancia que otras: a) como categoría política o política-jurídica, es decir, como un espacio sobre el cual se ejerce un poder, muchas veces, aunque no exclusivamente, referido al poder del Estado, b) como categoría simbólica y subjetiva, es decir, como un espacio de apropiación simbólica e identitaria de un grupo y c) como categoría económica, es decir, como fuente de recursos, que incorpora luchas relacionadas al capital y el trabajo. Con esta distinción no se sugiere que exista una dimensión que sea la más adecuada. En los primeros usos del concepto, lo más habitual era definir el territorio como un espacio de apropiación política, específicamente a través de la dominación geopolítica de los Estado nación. Hoy en día, las distintas dimensiones de la apropiación del territorio cobran fuerza. El problema no es estudiar el territorio centrándose en algunas de sus dimensiones, como su carácter político, su gobernanza, su carácter económico o cultural. El problema está en confundir la parte con el todo y olvidar la complejidad latente que involucra el territorio como realidad multidimensional.

Límites del territorio de estudio

Si bien con el concepto de territorio se hace referencia a una porción específica de la superficie terrestre, muchas veces dicha delimitación no es determinable matemática, cartográficamente, ni necesariamente responde a divisiones político-administrativas o censales. Al comprenderse como una realidad relacional, el territorio es también movimiento, fluidez e interconexión, es decir, temporalidad, enfoque genético o diacrónico que hace más difícil una delimitación espacial fija (Haesbaert, 2007: 33).

Cuando estudiamos territorios concretos se suele asumir la existencia de una parcelación que supone una entidad particular, con ciertas cualidades que nos permite diferenciarlo. En algunos casos los límites del territorio que se estudia están claramente definidos, como ocurre con los límites administrativos a escala subnacional. Sin embargo, en otros casos estos límites son ambiguos, como cuando se habla de lugares en general (Harvey, 2006: 245). Muchas veces se delimita un territorio por elementos puramente materiales, como la cualidad física de la tierra o el régimen climático. Pero en otras ocasiones depende más bien de la existencia de una cultura compartida, de una comunidad imaginada, de una historia,

de las divisiones administrativas de un Estado nación, de sentidos de pertenencia, etc. (Abramovay, 2006:2; Harvey, 2006: 245). En definitiva, es importante reconocer que los territorios están hechos y se construyen tanto en lo imaginario como en lo material, como entidades que cristalizan una mezcla de procesos materiales, sociales y mentales (Rangan, 2002 citado por Harvey, 2006: 245).

A la vez, puede un territorio configurar una región o porción de la tierra contigua o más bien puede darse como un espacio fragmentado, con lugares que se configuran en red (Llános-Hernández, 2010: 214). En la delimitación de un territorio, pueden superponerse varios de estos elementos de manera más o menos coherente. Por ejemplo, puede darse que un territorio claramente delimitado por elementos administrativos se corresponda con una delimitación geográfica o cultural. Sin embargo, también puede darse lo contrario. Por ejemplo, existe un debate respecto a la pertinencia de la división regional existente en Chile para dar cuenta de territorios unificados en términos productivos, culturales e históricos. Las regiones son la principal delimitación político-administrativa del país, basada en una limitación estratégica de control político llevada a cabo durante la dictadura militar de los años 70. Sin embargo, algunos autores piensan que esta no es la división administrativa que mejor se ajuste a las unidades culturales, históricas, productivas ni funcionales⁸ (Raczynski y Serrano, 2001; Delamaza y Thayer, 2013). Las provincias, en cambio, parecen ser divisiones administrativas que se ajustan mejor a realidades territoriales delimitables por criterios productivos. La mayoría de ellas se definieron en función de la presencia de los principales ríos en territorio nacional. De hecho, la mayoría de sus nombres corresponden a la de estos ríos. La lógica de los ríos se relaciona a la las cuencas de los valles y por lo tanto ejes productivos agrícolas y zonas de articulación de asentamientos urbanos.

En el caso de las comunas o municipios, la división administrativa más básica existente en Chile, corresponden a unidades territoriales mucho más pequeñas que las regiones, por lo que es más probable que abarquen unidades productivas más homogéneas. Además, suponen el principal acceso local al sistema público nacional y la municipalidad funciona como referente de parte importante de la acción colectiva que se genera en sectores populares, tanto en el campo como en la ciudad (Delamaza, 2009: 144). Según Delamaza

⁸ Es importante resaltar que esta discusión se da sobre todo en el ámbito de las políticas públicas, desde donde se cuestiona si las regiones son una unidad administrativa adecuada para aplicar políticas a nivel territorial.

(2009), esto último se explica por las reformas estatales de 1981 que significaron el traspaso a las municipalidades de los servicios de salud y educación, la administración de la red asistencial y nuevos modelos de política social que son canalizados a través de los municipios.

Para entender lo que nos lleva a delimitar un territorio de estudio en base a ciertos elementos y no otros, es importante analizar el proceso a través del cual los elementos considerados relevantes para su delimitación llegaron a serlo. Pero además, estos elementos interactúan entre sí, determinándose mutuamente. El proceso de formación de los territorios es un flujo perpetuo de procesos sociales y naturales que reconfiguran la superficie de la tierra y la distribución de sus cualidades espaciales (Harvey, 2006: 246). Por ejemplo, las divisiones administrativas pueden jugar un rol de delimitación territorial importante incluso cuando no reflejen unidades previas de otro tipo, pues pueden incluso servir como constructoras de esta unidad. En el caso de las regiones, si bien se generaron por vía administrativa y sin clara coherencia con historias y culturas comunes, estudios recientes muestran que los chilenos manifiestan niveles relativamente altos de identificación con sus regiones y, en concordancia con eso, se ha dado un aumento de las protestas de carácter regionalista en los últimos años (Asún y Zúñiga, 2013). Por lo tanto estas sí pueden cumplir un papel importante en la generación de identidades y proyectos comunes.

Por otra parte, es importante considerar que no siempre los territorios se delimitan en función de ciertas cualidades homogéneas, como cierto uso de la tierra, ciertos tipos de suelo, la existencia de una cultura compartida, etc. Existen casos donde la delimitación se da más bien en base a la existencia de relaciones coherentes entre elementos que no son homogéneos sino diversos, como ocurre con los territorios funcionales, donde se define una unidad territorial en base a la articulación entre elementos distintos pero complementarios (Harvey, 2006: 245), específicamente entre espacios de habitación con espacios de trabajo.

Territorios funcionales

En la tradición de la geografía regional, se va a hablar desde los años 80 de regiones funcionales, concepto con el que se pretende estudiar no sólo la homogeneidad de

caracteres o singularidades de regiones particulares, sino también los procesos de organización espacial vinculados a la industrialización, tema escasamente tratado por la geografía regional clásica. Esto suponía estudiar las interacciones entre las partes componentes de la región, como reflejo de las funciones desempeñadas por cada una (García, 2006). Esta noción cobra especial relevancia en las teorías que buscan interpretar el funcionamiento del sistema económico mundial y la globalización, con la división espacial del trabajo a nivel mundial, las interacciones entre la escala global y la local, las relaciones centro-periferia, etc.

Con el concepto de territorios funcionales, se hace referencia a la existencia de articulaciones territoriales que se dan en función de la organización productiva, como por la existencia y funcionamiento de mercados laborales, cadenas productivas y de comercialización, de los servicios y de las redes sociales. Esto genera una alta frecuencia de interacciones económicas y sociales entre habitantes, organizaciones y empresas de los territorios que componen la articulación funcional.

Esta mirada nos permite entender las relaciones entre territorios particulares como redes funcionales ligadas, por ejemplo, a las formas como Chile contribuye a través de la exportación de materias primas en el sistema económico globalizado. La inevitable importancia física como contenedor de los recursos naturales de las localidades donde se ubican las plantas de agroproducción o las explotaciones mineras, por una parte, y la relevancia de los centros urbanos como espacios donde se desarrollan las finanzas y servicios empresariales que dirigen dichas producciones, genera un conjunto de redes subnacionales entre distintos tipos de localidades rurales y urbanas, según los roles funcionales que cumplen en la cadena de producción y en el mercado (Sassen, 1994:35).

Por lo tanto, la expansión de redes que se movilizan a partir de la globalización económica no sólo se da a nivel internacional sino también al interior de cada país. Como plantea Borja y Castells (1997: 31) se van dando redes entre ciudades diversas en relación a su articulación con la economía global. El concepto de glocalización propuesto por Robertson en 1992, busca enfatizar en este carácter interno de lo global en lo local. Al pertenecer a una red urbana global, se da un doble flujo a través de la internalización de lo local, a partir de la exportación de materias primas, por ejemplo, y de la necesidad de lo global de localizarse (Carrión, 2013: 27).

La expansión de ciudades intermedias en América Latina tiene que ver con esta necesidad global de articular ciudades en redes. En este sentido, las ciudades intermedias se producen en un conjunto de articulaciones con lo rural, con las ciudades metropolitanas y con lo urbano-global (Carrión, 2013: 23). Estas articulaciones se dan muchas veces entre localidades medianas y pequeñas, que conforman territorios funcionales.

Según un estudio de Berdegué et al (2011), los territorios funcionales en Chile corresponden a espacios pluri-comunales, existiendo tres tipos principales: a) Seis regiones urbanas (Gran Santiago, Gran Concepción, Gran Valparaíso, Antofagasta, La Serena-Coquimbo y Temuco), los cuales contienen el 56% de la población del país, b) 43 territorios funcionales rurales-urbanos, cada uno de los cuales contiene una ciudad principal en torno a la cual se articulan dos o más comunas rurales. Estos contienen el 38% de la población del país, son los que más han crecido en las últimas décadas y contienen gran parte de la producción agropecuaria y c) 54 territorios rurales, cuyos mercados laborales son autocontenidos y en los que vive el 6% de la población. Para delimitar y estimar cada tipo de territorio, este estudio se basa en datos comunales, pues las comunas son la división política-administrativa básica a partir de la cual se realizan las mediciones de los Censos de población. Según este estudio, el caso del valle agrominero del Choapa corresponde a un territorio funcional rural-urbano, que contiene las comunas de Salamanca e Illapel.

Territorios no metropolitanos

Muchos de los análisis sobre la globalización se centran en las transformaciones culturales que se viven en los centros metropolitanos, como los espacios que están a la cabecera de los flujos migratorios internacionales y de los flujos de información a través de los avances tecnológicos que permiten más y nuevos medios de comunicación (Appadurai, 2001: 11). A la vez, los centros metropolitanos suponen contextos donde se desarrollan nuevos procesos económicos propios de un mundo globalizado, como las actividades financieras, de seguros, inmobiliarias, de publicidad, diseño, marketing, etc. (Borja y Castells, 1997: 36). En contraposición a esta imagen de las metrópolis como los espacios característicos donde toman forma las manifestaciones de la globalización, los territorios rurales y las ciudades

más pequeñas, aparecen como una realidad más atrasada, tradicional y por lo tanto menos globalizada.

Sin embargo, si pensamos en la globalización desde el punto de vista de las transacciones comerciales que se llevan a cabo a nivel mundial, en países como Chile parte fundamental de su capacidad de exportación e interacción económica a nivel mundial, tiene que ver con la actividad productiva que se realiza en zonas no metropolitanas, específicamente a través de la producción minera y agropecuaria-silvícola. En este sentido, la base de muchos de los procesos globales chilenos, viene dada por territorios específicos que se hacen globales porque se articulan a través de relaciones globales. El principio de las ventajas comparativas logra extenderse incluyendo a todos los territorios donde se identifica un potencial productivo, que en el caso chileno se basa en ser potenciales proveedores de materias primas del sector agropecuario y minero.

La categoría de lo metropolitano, hace referencia a grandes aglomeraciones urbanas, con alta densidad poblacional, que reúne multitud de subcentros urbanos. Por lo tanto es una categoría para diferenciar un tipo de realidad específica dentro de lo urbano (Brown et al, 2004: 402). Las zonas metropolitanas corresponden por lo general a las ciudades capitales de cada país o las más importantes. De ahí proviene la palabra *metrópolis*, compuesta del griego *mater*, que significa madre y de *polis*, que significa ciudad. Es allí donde suele concentrarse el poder político, con la ubicación de las principales instituciones del Estado y el poder económico, con la de los centros de decisión de las empresas. En su origen el concepto de *metrópolis* hacía referencia sobre todo a las realidades urbanas industriales, donde la concentración de la población favorecía la generación de economías de escala. Con los procesos de globalización y de tercerización de la economía, el concepto de *metrópolis* toma énfasis como un espacio de concentración y articulación de las funciones y actividades propias de la economía global. En ellas se concentran las actividades del sector financiero así como los servicios (Sasson, 1994).

Por otra parte, la urbanidad no metropolitana corresponde a los territorios cuyos patrones de asentamiento y/o de producción no corresponden ni a la realidad metropolitana ni rural propiamente tal. Con este concepto se muestra cómo el modelo tradicional que distingue lo urbano y lo rural, se ha ido substituyendo por uno donde lo central no es solamente el crecimiento urbano-metropolitano en detrimento del mundo rural (Canales y Canales,

2013). Se han utilizado distintos nombres para dar cuenta de esta realidad intermedia entre lo metropolitano y lo rural, como “ciudad media”, “ciudad intermedia”, “ciudad rural”, “rurbanidad”, “aglomeraciones semi urbanas”, “aglomeraciones semi rurales”, entre otros, intentando con ellos mostrar sus características particulares, las cuales se pierden al utilizar a la metrópolis como paradigma de ciudad.

Especialmente relevante es el concepto de “ciudades intermedias”, con el que se hace referencia a un proceso de descentralización en la localización industrial. La proliferación de estas ciudades en América Latina, tiene que ver con el patrón de crecimiento urbano que se ha desarrollado en las últimas décadas. Hasta mediados de los años setenta, el crecimiento urbano en América Latina se caracterizó por la concentración de la población en grandes centros urbanos, por lo general metropolitanos, sustentado en los procesos de industrialización. Con el agotamiento del modelo de industrialización y la creciente globalización de la economía de la región, se van a dar nuevos patrones de localización industrial, que van a generar la expansión urbana hacia las llamadas ciudades intermedias. Distintas industrias van a relocalizarse en territorios no metropolitanos, gracias a los menores costos, con lo que se produce una desconcentración de las metrópolis. Estas transformaciones van a generar nuevas pautas de migración entre ciudades, con procesos de emigración desde las zonas metropolitanas (Carrión, 2013).

En el caso chileno, la categoría residual de lo “no metropolitano” ha ido cobrando relevancia respecto al actual desarrollo agrario exportador en un contexto de altas demandas por los productos que allí se desarrollan. Si bien el nivel de concentración urbana que existe en el país es aún muy alto (según datos del Instituto Nacional de Estadísticas del 2013, la Región Metropolitana concentra el 40% de la población del país), se ha ido dando una creciente expansión demográfica en territorios intermedios no metropolitanos. Esto explica el hecho de que mientras entre 1930 y 1970 las tres ciudades metropolitanas de Chile (Santiago, Valparaíso y Concepción) crecen a una tasa promedio de 3,1%, en contraste a una de 2,7% del resto de localidades urbanas del país, entre 1970 y 2002 el crecimiento de las primeras disminuye a una tasa de 1,9%, mientras que el resto de las localidades urbanas mantiene una alta tasa de crecimiento de 2,7%. Por lo tanto, hasta los años 70 la lógica predominante de migración rural era hacia las zonas metropolitanas, pero actualmente una parte fundamental de la migración se da hacia los demás poblados urbanos no metropolitanos (Canales y Canales, 2013: 8). Lo importante es que la expansión demográfica que se ha dado

en los últimos años en estos territorios viene dada por la capacidad de productividad agraria, en el marco del fomento a una economía de agroexportación y no por el desarrollo industrial y urbano que se genera en las ciudades.

En el estudio de Canales y Canales (2013) se propone el concepto de “agrouibes” como una categoría especialmente pertinente para el caso chileno. Según este trabajo, el crecimiento de ciudades no metropolitanas está asociado al desarrollo de la agro-industria como un sector que va a generar pautas de asentamiento y movilidad particulares. Las “agrouibes” representan una realidad diferente a la rural, pues no tiene una vocación productiva agrícola primaria, sino que agraria secundaria y terciaria. Son, por lo tanto, diferentes a la vez a las “ciudades medias”, cuya vocación tiene que ver con la descentralización industrial de las metrópolis. Con esta distinción es posible dar cuenta de ciertas características del crecimiento de estos territorios que tienen estrecha relación con su fundamento productivo agro-industrial, como son la tecnologización, el aumento y mejoramiento de la conectividad, los cambios en las dinámicas laborales, etc. La utilización de este concepto permite dar cuenta de la realidad agraria predominante en el mapa productivo de la geografía de Chile cuando no ponemos el foco en los tres principales centros metropolitanos existentes.

El crecimiento económico agroindustrial impulsa el crecimiento del empleo en este tipo de actividad, el cual ya no se concentra en unas pocas localidades urbanas sino que se distribuye en todos los territorios agrarios, promoviendo su expansión (Canales y Canales, 2013: 11). Esto se relaciona con el aumento del empleo rural no agrícola, con mayor velocidad que el agrícola y a la vez con el aumento del empleo agrícola en zonas no rurales (Schejtman, 2013). Específicamente, el mayor crecimiento de estas ciudades agrarias se concentra en la zona central de Chile, entre las regiones de Coquimbo y Talca. Estas presentan un mayor dinamismo demográfico (2,7% de crecimiento anual promedio entre 1982 y 2009) y además mayor especialización en la agroindustria como fuente productiva predominante (Canales y Canales, 2013: 14).

Territorios agromineros

Para la geografía económica, la región o territorio se comprende como una organización espacial de los procesos sociales asociados al modo de producción. Esta visión le va a otorgar a cada territorio una especificidad relacionada a su dinámica productiva. Los territorios económicos suponen un conjunto de agentes (empresas, consumidores,

trabajadores, organizaciones, etc.), factores (recursos naturales, tecnología, mano de obra, etc.) y procesos económicos (producción, circulación, distribución, consumo, innovación, globalización, etc.). Desde esta perspectiva, tiene sentido hablar, por ejemplo, de territorios agrarios, o territorios agromineros. En esta investigación hacemos referencia al caso particular de los valles agromineros.

En Chile los territorios rurales son predominantemente agrarios si las miramos desde una lógica productiva, con la diferencia de que suelen ser las zonas rurales donde se desarrolla la agricultura propiamente tal, mientras que en las ciudades intermedias agrarias se desarrolla con más fuerza la agroindustria, con la existencia de comercio y servicios orientados a la agricultura y a la agroindustria. Por lo tanto, se va a dar una articulación de sistemas de poblados rurales y ciudades agrarias de distintos tamaño y dinámicas (Canales y Canales, 2013: 5).

Dentro de los territorios agrarios y rurales en Chile, existen algunos que a la vez destacan por albergar los minerales que permiten el funcionamiento de la principal industria extractiva del país. Si bien los yacimientos mineros suelen ubicarse en altura y en zonas poco pobladas, en los cuales se instalan campamentos mineros para que los trabajadores puedan albergarse, suelen generar redes con las localidades a su alrededor, como lugares de abastecimiento, de alojamiento, de descanso, de ubicación de proveedores, etc.

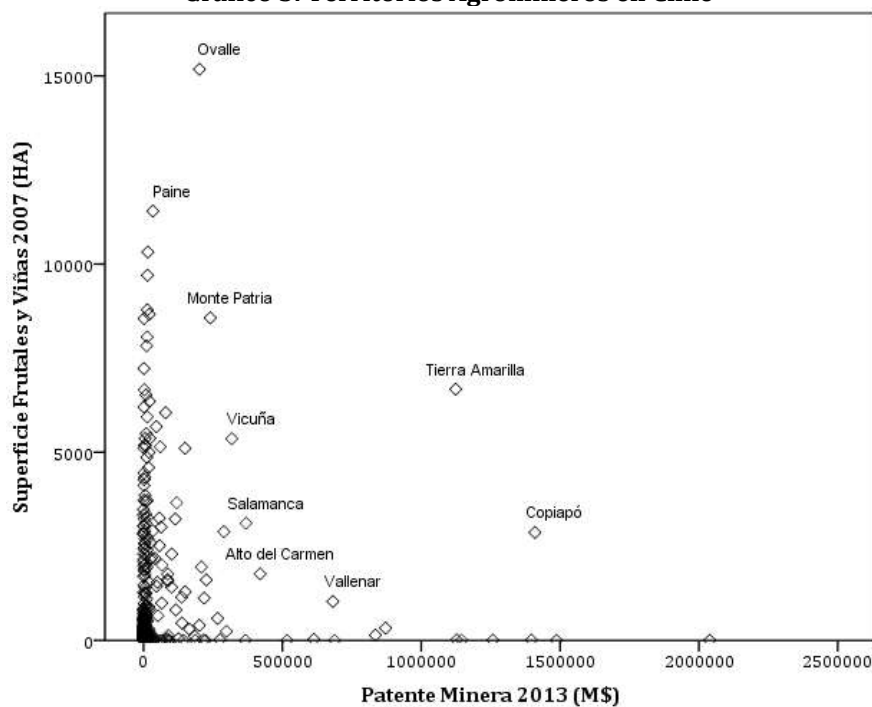
En este sentido, el caso de los valles agromineros es especialmente interesante, ya que en ellos conviven, gracias a la riqueza natural de su geografía física, la actividad minera y agraria, ambas en su lógica crecientemente globalizadora. Los territorios agromineros son un tipo de realidad territorial existente en Chile, donde se da una geografía natural que provee de los recursos para el desarrollo de la actividad agrícola y minera. Espacios donde esto se da suelen ser las cuencas de los valles, lugares donde la superficie de la tierra se ve hondada por montañas, las que proveen de los minerales y permiten el fluir de ríos que dan vida a la actividad agrícola. La geografía de Chile genera varios de estos valles, ubicados por lo general en el Norte Chico y la zona central del país. Esta zona comparte algunos rasgos materiales como la prevalencia en el tiempo de la minería mediana y pequeña junto con la agricultura y la ganadería, con grandes, medianos y pequeños productores (Ortega, 2012: 44).

Es importante destacar que estos son valles andinos, estrechos y transversales, que se amplían hacia el sur y terminan en terrazas de abrasión marina. Se dan vastas extensiones secas, o interfluvios entre valle y valle, con un subsuelo rico en yacimientos de cobre, oro, plata, hierro y azogue. Estos valles en el Norte Chico se ubican en un contexto de marcada aridez y semi-aridez (Aranda, 2003: 27). Este es el caso, por ejemplo, de los valles de los ríos Copiapó (en la región de Atacama), Huasco (en la región de Atacama), Elqui (en la Región de Coquimbo), Limarí (en la Región de Coquimbo) y Choapa (en la Región de Coquimbo).

Cada uno de estos valles forma parte de una provincia del mismo nombre. Esto tiene que ver con el origen de las provincias como división político-administrativa en Chile, la cual hace referencia a zonas abarcadas por algunos de las cuencas de los principales ríos del país. De esta forma, las provincias de Copiapó, Huasco, Elqui, Limarí y Choapa, funcionan como divisiones político-administrativas que logran dar cuenta de manera bastante adecuada de una realidad territorial geográfica y económicamente unificada, como son estos valles agromineros.

En el siguiente gráfico, es posible observar la relación entre producción agrícola de exportación (medida a través de la variable hectáreas de frutales y viñedos, según el Censo Agropecuario 2007) y producción minera (medida a través de la variable monto por patente minera municipal, según datos del Sistema Nacional de Información Municipal para el 2013). Podemos observar que la mayoría de las comunas de Chile tienden a ubicarse en uno de los dos ejes. Sin embargo, hay un grupo minoritario de comunas que presenta una relación más fuerte entre ambas variables, los cuales corresponden, precisamente, a varios de los que aquí denominamos valles agromineros.

Gráfico 3. Territorios Agromineros en Chile



Fuente: Elaboración Propia

Por ejemplo, aparecen las comunas de Tierra Amarilla y Copiapó, ambas pertenecientes a la provincia y el valle homónimo de Copiapó. En esta provincia la principal actividad es la minería, con explotaciones de mina, plata y cobre. Existen algunos proyectos mineros de envergadura en la zona, como las instalaciones de Minera Candelaria y Minera Manicunga en la comuna de Tierra Amarilla, de explotación de cobre y oro respectivamente. En la comuna de Copiapó destaca la presencia de ENAMI (Empresa nacional de minería), que reúne a la mediana y pequeña minería. La segunda actividad más importante es la agricultura, donde se produce sobre todo uva para la exportación.

También destacan en el gráfico las comunas de Alto del Carmen y Vallenar de la provincia y Valle de Huasco. En el Valle del Huasco se desarrolla la actividad frutícola, principalmente se produce uva pisquera y uva de mesa de exportación, además de cítricos, paltos y hortalizas (Urkidi, 2008: 69). En ambas comunas se desarrollan proyectos de gran envergadura de ENAMI y de Minera del Pacífico, específicamente de hierro y litio. En Alto del Carmen, además, se ubica el proyecto de oro Pascua Lama de la Compañía Minera Nevada.

Entre las comunas con alto nivel de producción agrícola de exportación así como minero, aparece también la comuna de Monte Patria, de la provincia y Valle de Limarí. Su principal actividad económica es la agricultura, sobre todo con plantaciones de uvas de mesa y para el pisco, hortalizas y plantas forrajeras. Además, en su interior existen diversos proyectos mineros, sobre todo de cobre y oro. También entre estas comunas encontramos la de Vicuña, ubicada en la provincia y Valle del Elqui. La principal actividad de Vicuña es la agricultura, centrada en la exportación de uvas, así como de cítricos y paltas. En la comuna, además, existen diversas minas de cobre y oro. Finalmente, figura entre estas comunas la de Salamanca, ubicada en el Valle del Choapa en el cual se centra este estudio.

Históricamente, en estos valles los conquistadores españoles desarrollaron agricultura y ganadería. A esto se le debe agregar la distribución de gran cantidad de yacimientos mineros, particularmente de cobre en los interfluvios, que daban origen a agrupamientos poblacionales débiles y efímeros en consonancia con la duración de los yacimientos (Aranda, 2003: 27). Hoy en día, estos valles siguen produciendo predominantemente las actividades mineras y agrícolas pero cada vez más desde una lógica globalizadora. A esta tendencia entra primero la agricultura en los años 90, con la instalación de nueva tecnología en la producción de frutas y uvas para el vino y el pisco y desde los años 2000 y en una tendencia creciente, se han ido incorporando a esta zona grandes inversiones mineras, sobre todo de cobre.

3.2. Efectos territoriales de la producción agrominera actual

La modernización de la producción agropecuaria de carácter agroindustrial y vocación exportadora genera importantes transformaciones socioeconómicas en los territorios productores. De igual forma ocurre con la instalación de grandes inversiones mineras en las localidades aledañas a los yacimientos, así como en los territorios vinculados a las cadenas de explotación y comercialización de estos productos (Meller, 2013; Bury; 2007; McMahon y Remy, 2003). En los territorios agromineros, donde conviven ambas actividades, podemos observar cómo en su relación se dan transformaciones económicas, sociales y culturales particulares. En este capítulo se analizan algunas de las transformaciones que suelen generar a nivel territorial la Gran Minería como la agroexportación.

Enclave

La Gran Minería que se instala en el siglo XX, sobre todo la de propiedad extranjera, tiende a generar una relación económica de enclave, pues desarrolla escasas vinculaciones con el resto de los sectores económicos donde se emplazan los yacimientos (Meller, 2013:18) y pocos encadenamientos productivos en los territorios donde se ubica⁹. La Gran Minería en Chile genera pocos encadenamientos hacia adelante, pues casi la totalidad de su producción es exportada sin ser usada como insumo en otras actividades. Respecto a los encadenamientos hacia atrás, son mayores pero también son bajos, pues genera pocas compras de insumos en comparación a sus niveles de producción. Los principales sectores con los que se da este tipo de encadenamientos son el de Servicios Financieros y a Empresas, el de Electricidad, Gas y Agua y el de Comercio, Restaurantes y Hoteles (Aroca, 2002: 91). Es importante destacar que pese al bajo encadenamiento, las empresas contratistas y que

⁹ El concepto de encadenamiento productivo, hace referencia al impacto que genera un sector de la economía, como la minería, en uno o varios sectores diferentes, ya sea en su producto, su empleo o su ingreso (Cf. Aroca, 2002: 85). Un encadenamiento productivo hacia atrás hace referencia al uso de insumos que un sector hace de otros sectores de la economía, como maquinarias y servicios de ingeniería en el caso minero. Un encadenamiento hacia adelante se refiere a la proporción del producto de un sector que sirve como insumo para otros sectores de la economía, por ejemplo en la producción de subproductos y productos del cobre.

brindan servicios a la minera suelen jugar un rol clave como fuente de desarrollo empresarial local¹⁰ (McMahon y Remy, 2003: 15).

Por otra parte, los principales encadenamientos que la minería genera impactan sobre todo a sectores económicos no localizados en los territorios donde se extrae el recurso. En el caso del sector de Servicios Financieros y a Empresas, por lo general se refiere a empresas cuyas casas matrices se ubican en ciudades metropolitanas como Santiago. Sin embargo, sí se da un mayor desarrollo de algunas pequeñas y medianas empresas locales que venden servicios a la minería, tales como empresa de computación, seguridad, alimento, etc. (Aroca, 2002: 90). Además, con la alta propiedad extranjera de la Gran Minería en Chile, se da una importante fuga de los ingresos generados por este sector en forma de utilidades y dividendos a los propietarios extranjeros¹¹ (Rivero y Aroca, 2014: 250). Por otra parte, los trabajadores de la Gran Minería, tanto los directamente contratados como los subcontratados o vinculados a empresas contratistas, en su mayoría no pertenecen a los territorios donde se ubican los yacimientos. Según un estudio de Aroca (2002) sobre la Segunda Región de Antofagasta, en esta

“existe una alta proporción de trabajadores que trabajan en las minas y que luego se regresan por sus periodos de descanso a sus hogares que están ubicados en alguna otra región. Desde la perspectiva del país esto no tiene mayor importancia pero desde la perspectiva regional esto implica que la región podría estar dejando de percibir un incremento en la demanda considerable, lo que implica menos producción, menos ingresos y menos empleos” (Aroca, 2002: 84).

De esta forma el “efecto inducido” que genera la minería en los territorios es bajo e impacta más bien a los territorios donde habitan los trabajadores. Con este concepto se hace referencia al efecto que genera la minería gracias a la compra de insumos, pero no de manera directa (encadenamiento hacia atrás), sino que se refiere al efecto que se da a partir del aumento de la mano de obra y por lo tanto de los salarios y el gasto a nivel local.

¹⁰ Conscientes de la importancia que pueden tomar las empresas contratistas y de servicios en las economías locales, varias empresas mineras han introducido en sus programas de Responsabilidad Social Empresarial prácticas para el desarrollo y potenciamiento de contratistas y abastecedores locales (McMahon y Remy, 2003: 15).

¹¹ Según Rivera y Aroca (2014: 250) esta característica es propia de la Gran Minería pero no así de la minería de pequeña escala que se desarrolla en el país.

En el caso de la agricultura de exportación en Chile la situación es bastante distinta. Las empresas dedicadas a la exportación de frutas pueden coordinar una serie de operaciones, desde la producción hasta el transporte de las frutas. En algunos casos son propietarias del equipamiento necesario (plantas de embalaje, material de transporte, bodegas) o, en otros casos, se limitan a la función de coordinación de actividades subcontratada. Algunas empresas compran terrenos para realizar la producción, pero esto no es muy común. En la mayoría de los casos las empresas no producen sino que compran las frutas de los productores de la zona (Abramo et al, 1997:154).

La fruta fresca tiende a exportarse para su consumo directo, por lo que no se generan muchos encadenamientos hacia adelante. Sin embargo, una parte de la producción agrícola es destinada al consumo local, por lo que la agricultura genera mayor encadenamiento que la minería a través del consumo. Por otra parte, la agricultura enfocada en la exportación de frutas genera compra de insumos, tales como las mismas frutas a los productores, semillas, fertilizantes y plaguicidas. A la vez se han desarrollado empresas especializadas en estudios hidráulicos y sistemas de riego, en la venta de maquinaria agrícola, en el transporte de las frutas, etc. (Dirven, 2002: 2).

En el caso de la industria pisquera, esta se apoya en la producción que realizan actualmente cerca de 3.000 pequeños viticultores. Parte importante de este aporte se da a través de cooperativas de pequeños productores asociadas a las empresas que realizan el procesamiento de la uva. El nivel de exportación dentro del total de producción de pisco en Chile es baja, cercana al 5%, por lo que la mayor parte se consume en el país (ODEPA, 2011: 6). Respecto al impacto local de estos encadenamientos, la compra de frutas a los productores es lo más relevante tanto para la exportación directa como para la elaboración del licores. De esta forma, parte importante del empleo que moviliza este sector tiene que ver con el trabajo no asalariado que realizan los productores en sus propios predios. Además de este, el sector agroexportador no genera muchos trabajos directos en sus empresas para los habitantes de las zonas rurales donde se localizan. Sin embargo, genera una importante cantidad de empleos durante ciertos periodos específicos del proceso productivo, como son la cosecha y el embalaje, generándose una fuente de empleo temporal

y de sueldos bajos, que suele ser utilizada por los habitantes rurales de la zona (Abramo et al, 1997: 155).

En el caso de la agroexportación, la participación de empresas chilenas es mucho mayor en comparación a lo que ocurre en la minería. Las agroindustrias pisqueras, por ejemplo, son casi exclusivamente de propiedades nacionales, por lo que los ingresos que generan suelen ser gastados en el país. Sin embargo, los principales dueños y ejecutivos de estas empresas suelen habitar en Santiago, por lo que la mayor parte de las ganancias que genera este sector no se gasta en los territorios donde se localiza la producción. Sí, en cambio, se genera mayor cantidad de ingresos en la zona a partir de las ganancias de los productores y algunas empresas de insumos y servicios localizadas en estos territorios.

En comparación a la Gran Minería, la agricultura de exportación genera ingresos y productos con mayores posibilidades de que sean reinvertidos y consumidos dentro del propio territorio. Por lo tanto, algunos ven el uso agrícola de la tierra como más inclusivo que las formas de uso de la industria extractiva (Bebbington, 2007: 29). Sin embargo, si bien la agricultura tiende a generar mayores encadenamientos productivos que la minería, los beneficios de estos tienden a concentrarse en los núcleos urbanos locales y las pequeñas ciudades, incluso en las ciudades grandes, más que en las aldeas y las áreas rurales dispersas. Según Driven (2002: 3):

Esta distribución territorial de los beneficios depende, en gran medida, del estado de la infraestructura que los conecta, de la densidad de la población, de las economías de aglomeración, de las políticas gubernamentales y de los niveles promedios de ingreso per capita así como su distribución entre los hogares.

Tributación

Los impuestos que paga la Gran Minería pueden generar importantes beneficios locales si éstos se canalizan apropiadamente (McMahon y Remy, 2003: 18). Sin embargo, en países centralizados como Chile no es claro que esto ocurra. La mayor parte de los impuestos que pagan las empresas mineras en Chile no se quedan en las regiones donde están ubicados los yacimientos, sino que se centralizan en las arcas fiscales siendo administrados por el gobierno central con criterios que no los hace tangibles directamente en las regiones.

El principal aporte que generan las mineras a los fondos presupuestarios nacionales se relacionan con el pago de un impuesto general a la renta de primera categoría, el cual afecta a todos los sectores productivos del país y grava con una tasa del 20% a las utilidades repartidas (la cual hace poco fue de 17%). En segundo lugar, existe un impuesto adicional que remplaza al impuesto Global Complementario que deben pagar los dueños de las empresas como persona natural en Chile. Este afecta solo a las remesas de ganancias exportadas fuera del país y formalmente alcanza a un 35% de éstas (aunque dado que el impuesto general se considera avance del adicional, en la práctica la tasa efectiva del adicional es del orden de 16%) (Cademartori et al 2014: 3).

Por otra parte, en Chile existe desde el 2005 la ley 20.026 que estableció un impuesto específico a la minería del cobre, que se aplica sobre los ingresos operacionales de las empresas¹², con una tasa única de impuesto de 5% para ventas anuales por encima de las 50,000 TM de cobre fino y un régimen escalonado para volúmenes menores. En el 2010, la Ley 20.469 modificó la norma, estableciendo un rango mayor, con una tasa de entre 5% y 14%, dependiendo de la renta operacional. Ese 14% máximo realmente se convierte en 12,3% (Cademartori et al 2014: 4). Es importante considerar que el Estado chileno firma con la inversión extranjera a través del DL600 un convenio llamado de invariabilidad tributaria que no rige para el resto de las empresas chilenas. A través de este convenio garantiza una tasa de carga estable a cambio de un pequeño porcentaje extra en la tasa de impuestos. Corresponde a una tasa invariable fija de 42% como carga impositiva toda efectiva. Para convencer al inversionista a renunciar a este acuerdo, los gobiernos han ofrecido alzas pequeñas contra mayor estabilidad, lo cual generalmente es aceptado por los inversionistas para prevenir un cambio más de fondo en el marco institucional (Cademartori et al 2014: 4).

El Impuesto Específico a la Minería financia un Fondo de Inversión y Reconversión Regional (FIR), cuyo objetivo es la realización de obras de desarrollo de los gobiernos regionales y municipalidades del país. Según la ley 20.469 que establece el impuesto específico y la

¹² Este tributo no es un propiamente un royalty, pues su tasa no se aplica sobre el valor de la producción extraída ni sobre las ventas, sino sobre la Renta Imponible Operacional Minera (RIOM), que son los ingresos de la actividad minera menos sus costos de producción, la depreciación financiera del equipo de capital y los intereses financieros (Cademartori et al 2014: 3).

creación de este fondo, un tercio de los recursos del fondo deberán ser asignados a las regiones mineras y los dos tercios restantes serán distribuidos entre la totalidad de las regiones del país.

Parte marginal del aporte que hacen las empresas mineras se da a través de contribuciones directas a los gobiernos locales, ya sea a nivel regional o comunal. A nivel de la región a través del pago por derecho de ocupación de suelo y permisos relacionados con la operación. A nivel de las comunas, uno de los ingresos propios permanentes de cada municipio viene dado por el pago de patentes mineras. Por patente minera, las grandes empresas deben pagar un monto anual equivalente a un décimo de unidad tributaria mensual por cada hectárea, si la concesión es de explotación y de un quincuagésimo de dicha unidad si es de exploración. La Ley 19.143 de 1992, concede a beneficio municipal los recursos provenientes por pago de patentes mineras. Sin embargo, esta ley establece que el 50% de los recursos recaudados por patentes mineras se incorpora a la cuota del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, correspondiente a la región donde se ubica la comuna y el 50% restante corresponde a las Municipalidades en las que se ubican las concesiones mineras, para ser invertidos en obras de desarrollo de la comuna. Además de las patentes mineras, las empresas mineras, como las de cualquier otro sector, generan un aporte a nivel municipal por contribuciones de bienes raíces, derechos y permisos de circulación municipales, entre otros (Castillo et al, 2003: 99).

Durante los últimos años se han ido levantando algunas críticas, sobre todo desde los gobiernos locales, por el bajo monto de la contribución que realiza la minería a nivel local. Como una forma transitoria de darle mayor retribución a las comunas donde se desarrolla la actividad minera, en el 2012 se crea el Fondo de Desarrollo del Norte y de las Comunas Mineras de Chile (FONDENOR) a través del cual se asignará, entre 2013 y 2025, aproximadamente 208 millones de dólares a cerca de 60 comunas mineras del país, a una razón de 16,7 millones de dólares anuales.

Respecto a la tributación del sector agropecuario, esta es más sencilla ya que no existen impuestos específicos a su operar y tampoco se han levado cuestionamientos respecto a la justicia de la retribución que este sector específico genera a nivel territorial, sobre todo porque el nivel de renta que genera es mucho menor en comparación a la minería. Su

contribución se da a través del pago centralizado del impuesto a la renta de primera categoría. En el caso de producción de pisco, además, se debe pagar un impuesto adicional por la Ley de Alcohol del 25%. Estos fondos son centralizados en el fisco para el presupuesto nacional. Al igual como ocurre en la minería, una parte marginal de las contribuciones que realizan las empresas de agroexportación llegan a nivel regional o municipal a través del pago de patentes, permisos, contribuciones, permisos de circulación, entre otros.

Medio ambiente

La minería destaca por ser una industria que genera importantes daños en el medio ambiente de los lugares donde se realiza la extracción, sobre todo en la tierra y los recursos hídricos. Los procesos productivos mineros emiten dióxido de azufre, anhídrido de carbono y arsénico (Meller, 2013: 19). Esto sobre todo en el contexto de las actuales tecnologías de extracción minera, las cuales utilizan diversas sustancias químicas para disolver o lixiviar los metales del mineral que los contiene, generando muchos más pasivos ambientales que la minería tradicional (Svampa, 2011: 196). El agua es uno de los recursos más impactados por la actividad minera, tanto por la infiltración en las cuencas de ríos de ácidos y metales pesados utilizados para la separación del material así como por el vertimiento de relaves (Budds & Hinojosa, 2012: 127). Respecto al aire, en los datos otorgados por el Ministerio de Energía sobre la emisión de gases efecto invernadero, es posible observar que la minería presenta una gran participación respecto al total de las emisiones, superando a varias industrias, como al papel y la celulosa, al cemento, a la siderurgia, a la pesca, al azúcar y a la petroquímica (Clerc, 2013: 106).

Las industrias extractivas, como la minería y los hidrocarburos, son intrínsecamente no sostenibles, pues sustraen del medio ambiente un recurso que no reponen y que no tiene la capacidad de reponerse por sí mismo (Bebbington, 2010: 55). La agricultura, en cambio, tiende a reproducir los recursos que genera, siendo mucho más sustentable. Sin embargo, no toda la agricultura es sustentable. En las últimas décadas, las transformaciones que ha vivido la industria agrícola a nivel mundial, han potenciado los aspectos extractivos del modelo agrario, sobre todo el agroexportador. La agricultura requiere de recursos como el agua, tierra fértil y biodiversidad que se haya en cantidad limitadas y no siempre son reproducibles. Uno de los ejemplos más claros de un modelo de agricultura que no resulta

sustentable es el de las plantaciones de soja, las cuales generan importantes impactos en el medioambiente, sobre todo por el uso de transgénicos (Giarracca y Teubal, 2010: 115). Por otra parte, este tipo de agricultura genera especialización a través de monocultivos de especies para exportación, lo que afecta en los principios nutritivos de la tierra y genera una destrucción en la biodiversidad. De esta forma, de manera creciente se ha comenzado a hablar del modelo agrícola como el sojero como una forma más de extractivismo (Giarracca y Teubal, 2010: 115).

En un estudio reciente del Consejo Minero se señala que durante el año 2013 el sector agrícola utilizó 13 veces más agua que la Gran Minería en Chile. Si bien ambas actividades utilizan grandes cantidades de agua, la agricultura lo requiere por el proceso biológico de las plantas, por lo que consume y transforma el agua en otros alimentos, mientras que la minería sólo la consume y la contamina (Giarracca y Teubal, 2010: 127). Por otra parte, las zonas de Chile donde más agua demanda la minería son justamente aquellas que menor disponibilidad presentan, como ocurre en la zona norte del país. En cambio, la agricultura tiende a concentrarse en la zona central y sur, que dispone de mayores cantidades de agua, si bien en regiones como Coquimbo, donde se ubica el Valle del Choapa, en los últimos años se ha presenciado una importante sequía que ha complejizado este escenario.

Por otra parte, la contaminación que genera la minería sobre el agua y el aire genera problemas de salud en los habitantes del territorio. En la agricultura ocurre algo similar a través del uso de agroquímicos, lo cual ha generado importantes críticas en algunos países de América Latina, como Paraguay, Brasil y Argentina, donde se han desarrollado importantes monocultivos como el de la soja. En Chile este es un tema que ha ido despertando nuevos debates de manera incipiente.

Formas de vida y diferenciación social

Los poblados previamente existentes cercanos a las nuevas explotaciones mineras por lo general son de baja densidad de población. Estos van a sufrir profundos cambios, pues pasan a ser lugares de paso, de alojamiento y de abastecimiento para los trabajadores de las grandes empresas mineras, contratistas y empresas de servicios. La minería tradicional, generaba patrones de urbanización diferentes, a partir sobre todo de la instalación de

ciudades campamentos. La Gran Minería actual, en cambio, genera un desarrollo de pequeños centros urbanos, por lo general agrícola-mineros, impulsados en gran medida por los recursos que genera la actividad minera (Damonte, 2012: 101).

La llegada de nuevos trabajadores puede conducir a problemas sociales por la falta de alojamiento e infraestructura, la deficiencia de servicios educativos y de médicos (McMahon y Remy, 2003:5). Por otro lado la minería se asocia a una cultura de trabajo que genera efectos negativos en la calidad de vida de las localidades donde se ubica. Distintos ejemplos de localidades mineras en el mundo, han mostrado una cultura patriarcal en el trabajo minero, asociada a expresiones de masculinidad, alcohol, violencia y prostitución (Ballard & Bank, 2003: 292).

En el caso de la agroindustria, cuando capitales extranjeros o nacionales se asientan en lugares rurales para generar producción agrícola para la exportación a gran escala, se dan importantes cambios en las formas de asentamientos de dichos lugares, apareciendo por ejemplo, empresas que llevan cabo servicios que sirven a la cadena de mercantilización de la agroindustria, como empresas de embalaje, de transporte, etc. Sin embargo, la cantidad de servicios que requiere esta industria es menor a la de la minería, por lo que se logra absorber para los procesos productivos un mayor porcentaje de trabajadores locales y la población flotante que se genera es mucho menor. De esta forma, los conflictos sociales que genera por la llegada de población al territorio son menores.

Por otra parte, con la llegada de la Gran Minería y sobre todo con la aparición del empleo minero, se van a dar importantes transformaciones a nivel territorial vinculadas a un proceso de monetarización de la economía local. Se va a generar una mayor diferenciación social, determinada por la mayor capacidad de consumo de aquellas familias con miembros empleados en la minería o en sus empresas contratistas. A la vez, aumenta la cantidad de artículos importados y más costosos. “Esto genera la aparición de un segmento de la población local que accede a más y mejores productos, mientras que las familias sin miembros empleados en la mina van a decrecer su nivel de vida ante el proceso inflacionario” (Damonte, 2012: 101).

3.3. Desentrañando el conflicto socioambiental

Actores e intereses en disputa

Una de las relaciones más estudiadas entre los actores presentes en territorios donde la agricultura y la minería conviven es la del conflicto, sobre todo entre las empresas mineras con los agricultores de la zona y organizaciones medioambientalistas. En el caso de Chile, esto aún no ha sido tan problemático pues la mayoría de las extracciones mineras están ubicadas en el extremo norte del país, en zonas desérticas donde la agricultura se desarrolla de manera escasa. Además, el nivel de conflictividad en general que se ha dado en Chile en estos territorios ha sido bajo aún en comparación a otros países mineros como Perú. Los conflictos que se han desatado en territorios mineros en Chile se han relacionado, sobre todo, con los efectos contaminantes de la minería y con la apropiación de tierras, lo que ha sido especialmente complejo en zonas indígenas. La relación entre la Gran Minería y las comunidades indígenas suele ser conflictiva por la apropiación y uso por parte de las compañías mineras de territorios considerados ancestrales por los grupos indígenas, los cuales ven perjudicada su sustentabilidad. Estos grupos indígenas en Chile suelen ser también pequeños agricultores de subsistencia. Este tipo de conflictos ha sido habitual en distintos países de América Latina, pero también en otros países como Canadá y Australia. En el caso chileno

“En los territorios de las comunidades indígenas del norte de Chile –aymara, lickan antay o atacameña, quechua, colla y diaguita– se han impulsado grandes proyectos mineros que presionan sobre sus ecosistemas, en particular sobre las aguas, lo que ocasiona la desecación de bofedales, vegas y aguadas, indispensables para el desarrollo de la economía agropastoril propia de estas comunidades” (Yañez y Molina, 2008: 12).

En el llamado Norte Chico, en cambio, la cantidad de explotaciones mineras es menor y también son menos numerosas las comunidades indígenas que habitan la zona. Sin embargo, en estos territorios se está dando un encuentro creciente entre la Gran Minería y la agricultura. Este contexto pone a los actores relacionados al mundo agrícola, sobre todo pequeños productores, en el centro de los conflictos con las empresas mineras.

En Perú, el conflicto entre minería y agricultura ha sido más común. Un ejemplo interesante fue el que se desató en Piura en 1999, donde pequeños y medianos agricultores se opusieron al proyecto minero de la empresa canadiense Manhattan Minerals Corporation. Esta es una de las principales zonas frutícolas del Perú y sus agricultores temían que la minería amenazara dicha actividad y terminara desplazándola, generando pocos empleos y ganancias insuficientes para compensar las pérdidas (De Echave et al, 2009: 18).

Por otra parte, en los territorios donde se han desatado conflictos entre empresas mineras y comunidades, suelen jugar un rol importante organizaciones medioambientalistas. Estas muchas veces están asociadas a redes transnacionales o corresponden a organizaciones extranjeras que tienen sede en los países donde se desarrollan los conflictos o que se asientan en los territorios por la emergencia de conflictos. Según Bebbington (2007: 22):

“Tales redes congregan a actores internacionales —e.g., Oxfam, Friends of the Earth International, grupos ambientalistas con base en San Francisco, grupos de derechos humanos y de derechos indígenas y otros—, así como ONG locales y nacionales y organizaciones sociales. Las organizaciones indígenas campesinas de nivel nacional y regional son también prominentes en estas redes, y tienden a sostener que la tierra y el subsuelo deben ser entendidos como territorio antes que como recurso”

Por lo general estas ONGs van a buscar asociarse a las comunidades locales, campesinos y/o grupos indígenas. Muchas veces estos conflictos se desatan entre una mezcla de actores, indígenas, agricultores y medioambientalistas, los cuales van generando alianzas estratégicas. Hasta los años noventa, era bastante inusual que se dieran conflictos importantes entre las empresas mineras y los campesinos en América Latina. Sin embargo, con la llegada de diferentes ONGs medioambientales, se generaron alianzas con los campesinos y surgieron nuevas formas de acción colectiva contra la industria extractiva (Cf. Gil, 2009: 60).

Por otra parte, con la proliferación de las acciones de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) por parte de las grandes empresas mineras, comienzan a darse importantes alianzas entre estas empresas y ONGs relacionadas a temas medioambientales, así como con centros de estudio o consultoras que intentan actuar como mediadoras entre las comunidades y las empresas mineras. En Chile las empresas consultoras encargadas de asesorar a las mineras

para el desarrollo de estrategias para frenar conflictos o generar formas exitosas de RSC han cobrado especial importancia. Muchas veces los gobiernos locales también van a generar alianzas con multinacionales mineras. A su vez, los gobiernos locales van a actuar como un intermediador que las mineras solicitan en los momentos de conflictos con las comunidades. Este tipo de alianzas suele darse a través de canales informales, especialmente a través de la relación que logran establecer encargados de la empresa minera con ciertas autoridades locales (Cf. Horowitz, 2011: 1383).

Más allá de los gobiernos locales, los Estados también juegan un rol importante en estos conflictos, sobre todo porque suelen ser promotores de las grandes inversiones mineras, las cuales generan efectos positivos a nivel macroeconómico y fiscal. Sin embargo, no necesariamente generan efectos igualmente positivos para las economías de los actores locales, que por lo tanto van a ver sus intereses en contraposición muchas veces respecto a las del Estado al que forman parte (De Echave et al, 2009: 185). Esto explica el que los analistas de este tipo de conflicto suelen criticar la existencia de:

“vacíos en los marcos institucionales de los países en estudio así como en la gestión política para tratar de evitarlos, mitigarlos o solucionarlos [los conflictos]. La falta de legislación minera (que incluya leyes ambientales, sociales, laborales, territoriales, entre otras) alineada a estándares internacionales y, sobre todo, que sea firme al monitorear y sancionar la falta de cumplimiento de las políticas de desarrollo sostenible de los países, ha sido uno de los factores que ha estado presente en los conflictos” (Saade, 2013: 33).

El Estado como promotor de la minería también va a generar redes que congregan a mineros, inversionistas, bolsas de valores y ministerios de Minería y Economía. Desde la perspectiva del Estado se argumenta que las principales decisiones sobre el modelo minero deben tomarse a escala nacional (antes que local), sobre la base de que la minería es una prioridad nacional. Según Bebbington (2007:21): “por supuesto, la sustitución y la reducción de capitales es fácil de aceptar a este nivel, porque quienes toman las decisiones no experimentan los efectos de las sustituciones en sus propios medios de vida”.

Así, tienden a existir importantes contrastes entre los intereses macroeconómicos de los países, que van a fomentar fuertemente la inversión extranjera en este tipo de industrias, a través marcos legales ad hoc, y los intereses económicos, sociales y culturales de las comunidades que habitan territorios proveedores de los recursos, así como de grupos

activistas medioambientales. En este sentido, al poder económico de las grandes empresas extractivas, se le debe agregar un poder político que muchas veces las va a sustentar.

El surgimiento de organizaciones sociales en el territorio en conflicto con las grandes empresas extractivas, no puede analizarse sin considerar su relación con diversos actores sociopolíticos tanto a nivel nacional (el Estado, ONGs nacionales, otras organizaciones sociales, sindicatos, etc) como internacional (ONGs internacionales u organismos de cooperación internacional). En estas diversas interacciones, la participación de actores internacionales que se ubican en, y actúan desde espacios globales (y no locales) es fundamental, no sólo porque algunos de ellos establecen y facilitan los esquemas financieros y reguladores bajo los cuales se dan las grandes inversiones mineras y agrícolas, sino también porque otros se alinean y/o influyen en el surgimiento y formas que adquieren las organizaciones sociales. En este sentido, no es posible entender las transformaciones de los territorios si no los entendemos “como espacios coproducidos por procesos globalizantes e historias locales” (Bebbington, 2011:16).

Muchas veces los conflictos entre las comunidades locales y las industrias de explotación, han llevado a la generación de protestas violentas, lo que ha servido para deslegitimar las demandas de las comunidades locales o para cambiar el foco del problema. Esto ha ocurrido, sobre todo, en países como Perú, Colombia y México (Vélez-Torres, 2014). En relación a esto, además de las interacciones ya mencionadas, es importante considerar el rol de los medios de información, sobre todo a través de los sistemas de comunicación masiva, en la construcción de relaciones sociales y escenarios conflictivos (Gil, 2009: 36).

Una forma de analizar las relaciones existentes en un territorio en que cohabitan estos distintos actores, es en base a los diferentes intereses existentes entre ellos y las formas como éstos logran articular sinérgicamente su vida compartida en el territorio o en maneras conflictivas de relacionarse (Bebbington et al, 2008: 2900). En Latinoamérica han aumentado en las últimas décadas los conflictos entre estos actores, como respuesta a las crecientes inversiones en extracción de recursos. De esta forma aparecen continuamente movimientos sociales que

“Emergen para oponerse a los patrones de control y acceso de recursos y, en algún sentido, para resistir los procesos económicos que conducen al desposeimiento de activos. La aparición de tales movimientos puede ser comprendida como un intento por defender los medios de

vida, los activos y el territorio, desafiando las estructuras, discursos e instituciones que impulsan y permiten su explotación y desposeimiento (o, en otros términos, como un esfuerzo por sostener una forma particular de controlar y manejar los recursos antes que otra)” (Bebbington, 2007:18).

En el caso de territorios agromineros, un ejemplo de esto está en los usos diversos que la minería y la agricultura le quieren dar a los recursos, los que no necesariamente logran convivir, sobre todo en contextos donde el agua, fuente básica de ambas actividades, es escasa. Por otra parte, los intereses respecto al uso y la proyección del territorio pueden tener que ver con motivos más culturales, como ocurre con la defensa de ciertas formas de vida ligadas a territorios concretos por parte de grupos indígenas, las cuales son amenazadas con la llegada de grandes inversiones extractivas. Por lo tanto, no sólo es una contraposición de intereses entendidos como puramente económicos, sino de estilos de vida (De Echave et al, 2009: 179). También pueden existir intereses políticos, como ocurre en ciertas zonas limítrofes, que para el Estado constituyen espacios de protección geopolítica, por lo que se prohíbe en ellos la explotación de recursos naturales, pese a lo rentable económicamente que pueda llegar a ser.

Del choque de intereses (conflicto implícito) a la acción colectiva (conflicto explícito)

Al analizar la literatura especializada en la relación entre actores productivos, sociales y políticos en los territorios proveedores de materias primas para la industria extractiva, hay una importante tendencia a observar y analizar los conflictos explícitos que se han desatado. Esto es entendible como respuesta de la academia a la proliferación de estos conflictos, como un fenómeno de relevancia pública que requiere atención y análisis. Sin embargo, el conflicto explícito no debe nublar la complejidad de las relaciones entre los actores de estos territorios, pues pueden existir otras relaciones, profundamente problemáticas, incluso injustas, que no estén marcadas por la emergencia de formas explícitas de conflicto.

En los territorios donde se desarrolla la industria extractiva, se suele hablar de la ocurrencia de conflictos cuando emerge una confrontación entre actores con intereses diferentes. Por lo general, esto se da cuando un grupo de representantes de las comunidades, como agricultores de la zona o activistas medioambientales, reclaman o protestan por una injusticia respecto al accionar de una industria extractiva, sus efectos socioeconómicos o

medioambientales en el territorio, reclamo que hacen público a través de formas de acción colectiva. Por lo tanto, el concepto de conflicto que habitualmente se utiliza en estos contextos, supone la existencia de intereses contrapuestos entre actores del territorio, la generación de una sensación de injusticia que va a ser compartida por parte de algún grupo de interés, y, además, cierto nivel de organización por parte de este grupo, que le permita hacer público su reclamo. Todas estas son condiciones para la emergencia de lo que aquí llamaremos “conflictos explícitos”. Desde esta mirada es posible utilizar el bagaje conceptual de las teorías sobre movimientos sociales y acción colectiva, para preguntarnos, por ejemplo, por qué ciertos territorios son más proclives a la emergencia de conflictos de este tipo que otros con condiciones productivas similares.

Según Tarrow (1997), para que se configuren formas de acción colectiva se requiere la movilización de distintos insumos o recursos, materiales e inmateriales, que no todos los grupos sociales necesariamente comparten. Por ejemplo, se requieren ciertos niveles de capital social, como un recurso que facilita la capacidad de organización entre las comunidades o grupos de interés. Este capital social necesario para la organización, va a ser más difícil de encontrar en aquellos territorios donde los grupos que reclaman la injusticia están fragmentados entre sí, con intereses en disputa. En aquellos contextos donde existe una tradición de protesta, con repertorios de acción colectiva conocidos, es más fácil convertir una injusticia en un conflicto explícito. En una línea similar, según un estudio que analiza diversos conflictos socioambientales contra empresas mineras ocurridos en Perú, se plantea que “son fundamentales los procesos organizativos, la existencia o no de experiencias organizativas previas, la presencia de gremios u organizaciones de distinto tipo, la intervención de agentes externos como ONG, iglesias y partidos políticos” (De Echave et al 2009: 180).

Una de las principales fuentes de datos para poder cuantificar e identificar los conflictos que se desatan en América Latina es la que provee OCMAL (Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina). Este observatorio define como un conflicto minero aquellas formas de protesta que cubre la prensa de cada uno de los países de América Latina, por lo tanto no se consideran conflictos aquellos que no despierten la atención de los medios. Estos conflictos que no son interesantes para la prensa, suelen tampoco serlo para las mismas empresas de la industria extractiva, pues no ponen mayores resistencias a sus inversiones. Sin embargo,

este tipo de conflictos resulta sumamente relevante, pues no necesariamente dan cuenta de una situación menos conflictiva (cf. De Echave et al, 2009: 198). En muchos casos es el paso previo para que se desate un conflicto explícito, por lo que nos permite entender la genealogía de éstos. En otros casos, puede convertirse en una dinámica más o menos estable, que no desemboque en conflicto explícito pero que nos permite observar los elementos que dificultan la generación de transformaciones sociales impulsadas por la protesta.

Desde algunas perspectivas, el que se desate un conflicto explícito no es visto como una amenaza, sino como una oportunidad para los territorios, que puede en algunos casos funcionar como un motor de cambio. La experiencia de un conflicto en un territorio puede resultar una oportunidad para generar dispositivos de participación y acción organizada, además puede abrir espacios de diálogo entre la comunidad, con el gobierno local y las empresas (Obando et al, 2008). Lo esencial para estas perspectivas no es la resolución rápida de los conflictos, sino más bien su transformación en procesos de cambio constructivos (Laderach, 2003).

Por otro lado, para las empresas mineras los conflictos explícitos suponen un conjunto de costos que deben evitar, dado los riesgos de interrupción de los proyectos, las pérdidas de productividad debido a los retrasos que provocan las manifestaciones y paralizaciones, la posibilidad de no poder generar proyectos futuros o ampliaciones, la pérdida de tiempo en la que incurren altos ejecutivos, etcétera (Saade, 2013). Esto ha significado que las empresas estén incluyendo cada vez más el historial de conflictos de un país dentro de las variables a considerar en el análisis de rentabilidad de las inversiones futuras. Por lo tanto, los conflictos recurrentes se convierten en un desincentivador de las inversiones extranjeras en la minería.

Según un estudio de la consultora EY Chile, los conflictos con comunidades locales en Chile pueden significar pérdidas de hasta 20 millones de dólares por semana para las empresas, sobre todo en términos de la pérdida de valor que dificulta la legitimidad social para operar, siendo éste uno de los principales riesgos que enfrentan los grandes proyectos mineros en la actualidad (EY Chile, 2014). La pérdida de valor, la generación de conflictos y oposiciones generan costos relacionados a los procesos de judicialización por temas medioambientales

y sociales, dada la paralización, postergación o detención de las inversiones. Esto ha despertado un creciente interés de las empresas por buscar mecanismos para dirimir estos conflictos y para evitar los procesos de judicialización. Así, en las últimas dos décadas han implementado nuevos y diversos mecanismos de mitigación, compensación, negociación, diálogo, inversiones sociales y de RSC.

Si ampliamos el concepto de conflicto a uno que no sólo incluya la protesta y la acción colectiva, es posible observar que incluso la pura existencia de intereses contrapuestos entre los actores del territorio es conflictiva. Esta situación suele darse arraigada en una estructura de poder que va a permitir que ciertos actores tengan mayor capacidad alcanzar sus intereses que otros (Cf. Bebbington et al, 2008: 2900). Esta desigualdad puede despertar reclamos de injusticia lo cual a su vez puede o no desembocar en un conflicto explícito. Por lo tanto, vemos que el paso del conflicto implícito que supone el choque de intereses, al conflicto explícito que suponen los movimientos socioambientales, supone un largo camino que debe tenerse en cuenta para analizar el fenómeno del conflicto en estos territorios desde toda su complejidad.

Tampoco toda falta de conflicto explícito en este tipo de territorios da cuenta de un conflicto implícito. Pueden darse también relaciones de cooperación. Pensemos, por ejemplo, en contextos donde pese a la contraposición de intereses entre los actores del territorio, coexisten en base a un acuerdo que permite darle diversos usos a la tierra sin generar una sensación de injusticia en ciertos grupos. Casos donde esto podría estar ocurriendo en mayor medida son aquellos donde la industria extractiva opera bajo una normativa que genera mayores compensaciones económicas para los actores del territorio, se transforma en una importante fuente de empleos y opera bajo claras limitaciones medioambientales. Pero también puede imaginarse como un resultado al que se llegue luego del desato de conflictos explícitos, o como respuesta a estos, o como transformación hacia una situación de mayor justicia y mejor convivencia. Este tipo de situaciones no suele ser lo habitual en los países de América Latina, donde la contraposición de intereses entre los actores del territorio se estructura en relaciones de poder sumamente asimétricas. A lo más, pueden darse contextos de mayor encadenamiento productivo y mejoramiento de las condiciones económicas y las fuentes de empleo local, que permitan que ciertos sectores sociales tengan posiciones favorables respecto a los efectos de la industria minera en el territorio. Sin

embargo, estas suelen ser perspectivas de grupos específicos dentro de las comunidades y difícilmente se transforman en valorizaciones generales.

La construcción de la injusticia socioambiental

Para Tarrow (1997) uno de los puntos de partida necesarios para la generación de acción colectiva, es el desarrollo de un sentido de injusticia ante una situación específica, la cual el movimiento social va a buscar terminar. Si bien este enfoque es sumamente útil para entender qué condiciones permiten el que emerjan conflictos explícitos, no nos permite entender el paso previo de cómo se configuran las valorizaciones que son las que definen cuándo algo es considerado injusto y cuándo no. El por qué en ciertos contextos la actividad minera y su efecto medioambiental, por ejemplo, va a generar una sensación de injusticia, mientras que en otro la misma situación es vivida como justa, tiene que ver con cómo en cada contexto se generan valorizaciones distintas sobre los recursos naturales, su uso y las formas de repartir las ganancias de su extracción. Según Bebbington:

“Algunos actores perciben la tierra como algo por ser extraído con el fin de producir riqueza mineral —dicho en breve, como un bien productivo—. Otros la ven como algo por ser labrado, también como un bien productivo, pero como uno que permite formas de producción culturalmente más resonantes y socialmente más inclusivas. Otros argumentan que la tierra (o por lo menos ciertas áreas de tierra) debe ser vista (y valorada) principalmente en términos de los servicios que brinda al ecosistema (en estos casos, fundamentalmente abastecimiento de agua). Y todavía otros, si bien menos y de manera quizá más implícita, ven la tierra no solo como tierra, sino también como territorio, un espacio que forzosamente trae consigo ciertas consecuencias culturales y de gobernanza” (Bebbington, 2007: 36).

Distintos actores van a tener distintas valorizaciones, las cuales no son estáticas, se construyen, cambian y se influyen mutuamente. Un ejemplo de esto es la valoración de grupos medioambientalistas, los cuales muchas veces se instalan en las localidades donde llegan grandes empresas mineras para generar mayor conciencia entre los habitantes locales sobre los efectos ambientales, de tal forma de despertar un sentido de injusticia que permita la gestación de un movimiento social. Tanto los discursos como las acciones de apoyo de instituciones y ONGs internacionales, han servido como soporte para legitimar las demandas de comunidades locales, sobre todo ante temáticas medioambientales (Arellano-

Yanguas, 2012: 629). Esto también ha significado que en los movimientos que mezclan ambos tipo de actores se conjugan valorizaciones con orientaciones materialistas, que muchas veces acompañan los intereses de los pequeños campesinos, y post-materialistas propias de los sectores medioambientalistas (Cf. Delamaza, 2009: 166). Sin embargo, en algunos casos se produce un choque con la perspectiva de las comunidades, que no necesariamente se va a centrar en los efectos medioambientales sino que, por ejemplo, en la desigual repartición de beneficios económicos que la minería genera.

Para entender cómo se construye la crítica que las comunidades realizan sobre la actividad minera cuando explicitan una injusticia, es importante considerar cuáles son las principales posturas desde donde se han desarrollado estas miradas. Existen diversas posturas sobre los efectos y el valor de las industrias extractivas. Algunas de estas han estado influenciados por la hipótesis que plantea “la maldición de los recursos naturales”. Sachs & Warner (1995) plantearon esta hipótesis, al encontrar una relación negativa entre el nivel de exportaciones de recursos naturales como porcentaje del PIB y la tasa de crecimiento per cápita de 97 países en desarrollo, entre 1970 y 1989. De manera paralela, Prebisch desde los años cincuenta plantea la hipótesis de que los términos de intercambio se han ido deteriorando para las exportaciones de recursos naturales con el correr de los años¹³. De esta forma, mientras algunos autores, ante ejemplos como el de Canadá y Australia, argumentan que la minería puede jugar un rol central en la generación de mayor desarrollo, otros se basan en casos como el de Perú, Bolivia, Zambia y muchos otros, para sugerir que los países ricos en minerales les va peor, dado que quedan en una situación de condena al ser exportadores de materias primas.

Hoy en día han aparecido enfoques más matizados, como el del “post-extractivismo”, para el cual no todas las formas de extracción de recursos naturales deben ser prohibidas, sino que se deben buscar alternativas al extractivismo dado los impactos socioambientales negativos que implica (Gudynas, 2011: 63). Estas posturas buscan generar estrategias donde la extracción no suponga la destrucción de recursos naturales y que genere mayor

¹³ Un reciente estudio de Meller, Poniachik y Zenteno (2013) muestran distintos estudios que han criticado tanto los planteamientos de Sachs y Warner así como de Prebisch. Además, en este estudio se lleva a cabo un cuestionamiento de las hipótesis y las metodologías de estos estudios, para concluir que la hipótesis de los recursos naturales no es adecuada para América Latina, sino que por el contrario son una gran bendición para la región. Ver Meller, Poniachik y Zenteno (2013) “América Latina & la bendición de los recursos naturales” En Meller (2013), Recursos naturales y diversificación exportadora. Una mirada de futuro para América Latina, Cieplan.

calidad de vida y menor pobreza, no por la vía de supuestos derrames económicos, que es lo que pretendía la teoría clásica que defiende el extractivismo, sin lograr resultados sustanciales en la disminución de la desigualdad (Gudynas, 2011: 65). En estos casos, lo que se busca es, por ejemplo, mejorar el uso de tecnologías para reducir los impactos ambientales a través del tratamiento de efluentes y relaves, reciclaje de agua, captura de emisiones contaminantes particuladas, o lograr mejores condiciones de trabajo a través de medidas de seguridad y sanidad laboral, cobertura médica, mejores salarios o mejorar las relaciones con las comunidades locales (Gudynas, 2011: 68). Esta perspectiva es la que suele sostenerse desde algunos de los gobiernos progresistas que han estado en el poder de distintos países de América Latina durante las últimas décadas, los cuales van a interesarse por los réditos económicos de la minería sin desconocer la importancia de mantener una postura más activa en su regulación para evitar las importantes externalidades negativas que genera (Cf. Gudynas, 2010).

La distinción anterior entre grupos anti-extractivistas y post-extractivistas, se refleja a nivel de los actores del territorio según lo que estos reclaman y los objetivos que buscan. En un extremo, están quienes se resisten a la implementación de nuevas operaciones mineras o a la expansión de las operaciones existentes, “como reflejo de una sensación de que ellos están siendo desposeídos tanto de una forma de vida como de algo con mucho valor económico, y que no están por tanto dispuestos a negociar” (Bebbington, 2007: 19). En otro extremo, están las comunidades que exigen obtener mayor participación en los beneficios de las compañías mineras que operan en el territorio. Movimientos cuya preocupación es

“la de negociar la mejor compensación por el desposeimiento y/o mayores garantías que la calidad de los activos locales será protegida, movimientos que dejarían de oponerse una vez que la industria extractiva haya puesto en funcionamiento planes para la remediación ambiental y la compensación social” (Bebbington, 2007: 19).

Con el aumento de las operaciones mineras en los últimos años ha ido creciendo este segundo tipo de conflicto (Arellano-Yanguas, 2011). En definitiva, diferentes actores dentro del movimiento planean con frecuencia críticas distintas a los temas que están abordando y diferentes propuestas alternativas de políticas, lo que puede ir desde el total rechazo, demandas por mayor participación en las decisiones, hasta una distribución más equitativa de los beneficios (Bebbington, 2011a)

Cuando el Estado toma un rol protagónico en estos conflictos, muchas veces tiene que ver con la discusión sobre las ganancias mineras. Para el Estado los recursos fiscales que genera la minería deben distribuirse según lógicas nacionales, por ejemplo dando prioridad a las zonas más pobres del país. Sin embargo, muchas veces para las comunidades de los territorios proveedores, deben ser ellos quienes reciban una mayor proporción de recursos, sobre todo como forma de compensación de las externalidades negativas que genera la minería en los territorios (Saade, 2013: 43).

Por otra parte, para entender la emergencia de los conflictos socioambientales en territorios agromineros en Chile, es importante considerar cuál es la valorización que comúnmente estas actividades han tenido. En Chile existe una baja valorización de la industria minera, y sobre todo de la cuprífera, por parte de la sociedad civil. Esta imagen ha sido reafirmada en una tradición cultural y literaria del trabajo minero asociado a la pobreza, el cansancio, la enfermedad y la congoja (Meller 2013: 18). Con el aumento de conflictos entre mineras y comunidades, se ha ido generalizando la idea respecto a los efectos perjudiciales que genera la minería en los territorios, lo que levanta sospechas negativas en las comunidades apenas se enteran de la futura instalación de un yacimiento minero en la zona. En cambio, el imaginario respecto a la agricultura es muy diferente. No existe una percepción negativa generalizada respecto a la agroexportación. Aspectos negativos de esta industria, que en otros países han tomado fuerza como banderas de lucha por parte de las comunidades locales, como es el aumento de los monocultivos o el uso de agroquímicos, en Chile no han levantado aún un imaginario compartido contrario a esta actividad.

Si bien el sentido de injusticia se basa en las diversas valorizaciones de los actores, estas no se dan en el vacío sino en un contexto de relaciones de dominación y poder que las definen. Las relaciones de poder entre los actores en juego en el territorio pueden determinar tanto las valorizaciones y los discursos como las acciones y prácticas. Respecto a las valorizaciones y discursos, hay ciertas concepciones que van a tener mayor hegemonía que otras y van a tener más capacidad de penetrar en los imaginarios y significados. Respecto a las acciones y prácticas, ciertos actores van a tener mayor capacidad que otros de llevar a cabo acciones para incidir en el devenir del territorio en función de sus intereses y valorizaciones. El territorio no supone una síntesis equilibrada de los actores que lo

componen, sino más bien funciona como reflejo de las relaciones de poder, así como de sus capacidades para construir habilidades sociales necesarias para liderar los diferentes proyectos. Esto significa que para entender las transformaciones que viven los territorios no basta el estudio de los actores en general, sino que es necesario analizar concretamente quiénes son éstos, sus intereses, sus capacidades y dónde se sitúan en sus relaciones de poder con los demás (Abramovay et al 2007:29).

Respecto a las relaciones de poder al interior de las mismas comunidades que habitan el territorio, Petras y Veltmeyer (2010) van a criticar el uso que se le ha dado al concepto de comunidad para hacer referencia a uno de los actores relevantes en el marco de los conflictos territoriales con grandes empresas, por suponer una imagen de un todo homogéneo. Las comunidades deben entenderse como realidades unidas muchas veces por alianzas múltiples y contradictorias (Watts, 2000: 268). Si bien las comunidades que comparten un territorio, están unidas por un espacio común, por ciertas instituciones y ciertos vínculos sociales, no necesariamente existe entre ellos una “identidad fuerte” sino que en la medida en que se den diferenciaciones de clase importantes es posible encontrar “identidades débiles” (Petras & Veltmeyer 2010).

Para Petras y Veltmeyer (2010), esta homogeneización es una construcción propia de la ideología liberal, desde la cual no es posible observar cómo en estos conflictos se pone en movimiento una diferenciación de clases sociales que van a entrar en disputa por el proceso de acumulación global de capital en el que participan. En una comunidad que está en conflicto con una gran empresa minera, por ejemplo, no se puede suponer que los intereses económicos y políticos de sus habitantes son homogéneos, pues con la entrada del flujo de capitales que esta empresa moviliza en el territorio, se van a desarrollar importantes dinámicas diferenciadas de clase que se deben considerar. Por otra parte, según Horowitz (2011:1385), muchas veces la construcción de la idea de comunidad como un todo homogéneo es el resultado de una estrategia por parte de los activistas que se oponen a las acciones de las grandes empresas ubicadas en el territorio, de tal forma de hacer aparecer a la comunidad como un todo con intereses unificados.

4. Metodología

En términos metodológicos el estudio de territorios específicos implica observar diferentes actores, con sus discursos y prácticas, así como paisajes, con sus continuidades y rupturas. De esta forma, para llevar a cabo esta investigación se realizaron entrevistas a diferentes habitantes del Valle del Choapa, proceso que fue acompañado por la observación y descripción del paisaje físico y social del entorno.

La primera visita a terreno fue realizada durante los primeros días de noviembre de 2013. En dicho trabajo de campo se llevaron a cabo siete entrevistas en la ciudad de Salamanca. La estrategia teórica para seleccionar la muestra inicial fue entrevistar a habitantes que no trabajaran ni en la minería ni en la agricultura. Esto con el objetivo de conocer el relato sobre las transformaciones que se han vivido en el Valle desde la perspectiva de los habitantes en general. Todas fueron entrevistas en profundidad, con una duración de entre 40 y 90 minutos.

Las entrevistas realizadas durante la primera visita fueron muy abiertas temáticamente, por lo que su resultado es similar a una conversación cotidiana sobre Salamanca que un habitante realiza con un foráneo interesado en conocer la historia de la zona. El objetivo fue aproximarse a distintos temas que surgen en el relato cotidiano de los habitantes del valle en relación a la descripción sobre la vida social, las localidades y el entorno. La pregunta principal, que sirvió como puerta de entrada a estas conversaciones fue la siguiente: ¿cómo ha cambiado el valle en los últimos años?

La segunda visita al campo se realizó la última semana de julio y la tercera la última semana de octubre de 2014. En cada una de estas visitas se llevaron a cabo seis entrevistas en profundidad. En estos casos la estrategia para seleccionar a los entrevistados fue buscar habitantes del Valle relacionados en su trabajo de manera directa e indirecta a la minería y a la agricultura. También se entrevistaron algunos trabajadores del municipio, participantes de asociaciones medioambientalistas y otros grupos de interés. El objetivo en esta etapa fue conocer los relatos sobre la realidad del Valle de quienes sí se encuentran más involucrados en su vida cotidiana con ambas actividades productivas, así como con los conflictos que a partir de la Gran Minería se han desatado.

Las entrevistas realizadas durante la segunda y tercera visita fueron un poco más dirigidas, buscando profundizar en aquellos tópicos que aparecían como recurrentes y relevantes en relación al tema de investigación. Específicamente, se buscó entender cómo se interpretan las transformaciones que se han vivido en el Valle desde lo productivo, laboral y desde las relaciones sociales entre los actores que conviven en él. Para esto fue muy relevante guiar las entrevistas hacia la descripción sobre el pasado del Valle y sobre las expectativas de futuro.

La mayoría de las entrevistas presentaron elementos de autobiografía, los cuales en algunos casos fueron forzados a través de preguntas específicas sobre la historia de los entrevistados y en otras ocasiones surgían espontáneamente en el relato sobre las transformaciones que ha vivido el Valle y sus experiencias vivenciando dichos cambios. De esta forma, se fue articulando de modo más o menos natural la historia del Valle y sus transformaciones con las rememoraciones familiares y personales de los entrevistados.

Todas las entrevistas fueron registradas en audios y transcritas íntegramente para su posterior análisis. El análisis de las entrevistas se centró en desentrañar las narraciones de los habitantes. A partir de este análisis se fueron definiendo los principales imaginarios en juego entre los habitantes del Valle en relación a las transformaciones productivas y laborales que han vivido, así como también en relación a las principales rupturas y transformaciones a nivel de las identidades.

El trabajo con las entrevistas siguió lógicas similares a las propuestas por Strauss y Corbin (1994) en la Grounded Theory. Cada entrevista fue fragmentada en temas, subtemas y categorías. Se fueron comparando los discursos e ideas, para ir dando cuenta de nociones coherentes y consistentes así como contrapuestas o en oposición, hasta llegar a comparaciones redundantes que permitieran configurar una interpretación ordenada de las narraciones.

En cada una de las visitas de campo, se generaron notas a partir de la observación del paisaje físico del valle: de la vegetación, los caminos, la infraestructura pública, de los poblados urbanos, su infraestructura y distribución, etc. Este tipo de observaciones fue de especial

interés para analizar cómo la industria minera y la agroexportación se han extendido dejando marcas en el paisaje físico.

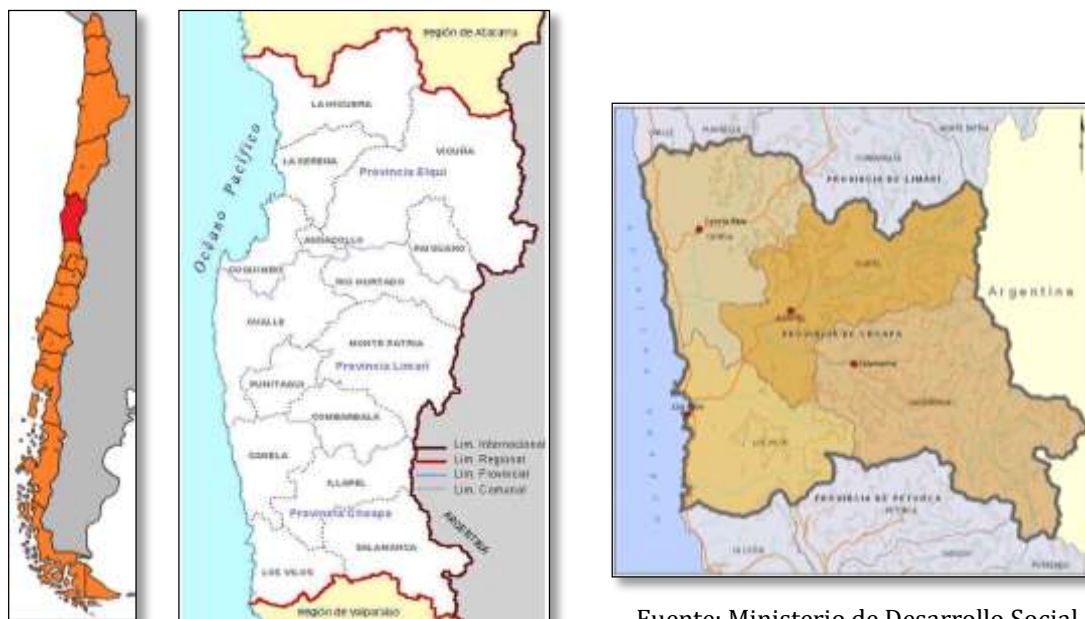
De manera paralela a todo este proceso, desde la primera visita de campo hasta el análisis final de las entrevistas, se revisó literatura especializada y datos secundarios acordes a los temas de interés que dieron inicio a la investigación y a los nuevos temas que fueron surgiendo. En base a ambos insumos, fueron generándose diversas interpretaciones en todo el proceso, las cuales poco a poco fueron configurando las ideas centrales que se presentan en este informe.

5. El Valle del Choapa: Antecedentes

5.2. El lugar del Valle

El Valle del Choapa está ubicado en la zona sur de la Quinta Región de Coquimbo, a 200 kilómetros hacia el norte de Santiago. La región de Coquimbo se caracteriza por presentar el menor ancho del territorio chileno continental y por estar atravesada por diversos valles y ríos transversales que nacen en la Cordillera de Los Andes. Dentro de éstos destacan los valles del Elqui, Limarí y Choapa, los cuales además delimitan de modo natural las tres provincias que componen la región. El Valle del Choapa, por lo tanto, pertenece a la provincia homónima del Choapa, la cual está compuesta por las comunas de Illapel, Salamanca, Los Vilos y Canela. Las primeras dos forman parte de la zona en la que se expande el valle propiamente tal, las cuales colindan al este con la cordillera de Los Andes y Argentina. Canela y Los Vilos, en cambio, son las comunas con zona costera del sur de la Región de Coquimbo.

Figura 1. División político-administrativo de la región de Coquimbo (provincias y comunas)



Fuente: Ministerio de Desarrollo Social

La población estimada de la Región de Coquimbo para el 2014 es de 707.500 habitantes. Para la provincia del Choapa es de 84.000 habitantes (12% del total regional). Las poblaciones comunales dentro de la provincia del Choapa son de 30.600 en Illapel (36% del

total provincial), 25.700 en Salamanca (31% del total provincial), 18.500 en Los Vilos (22% del total provincial) y 9.200 en Canela (11% del total provincial).

Cuadro 2. Población regional, provincial y comunal					
	Población 2014	Porcentaje respecto al total regional	Porcentaje respecto al total provincial	Superficie	Densidad
Región de Coquimbo	704.500	100%	-	40.579,9 km ²	16,95 hab/km ²
Provincia de Choapa	84.000	12%	100%	10.131,6 km ²	8,3 hab/km ²
Comuna de Illapel	30.600	4,3%	36%	2.629 km ²	11,64 hab/km ²
Comuna de Salamanca	25.700	3,6%	31%	3.445 km ²	7, 11 hab/km ²
Comuna de Los Vilos	18.500	2,6%	22%	1.823,8 km ²	9,6 hab/km ²
Comuna de Canela	9.200	1,3%	11%	2,196,6 km ²	4,2 hab/km ²

Fuente: elaboración propia en base a información del INE

Dentro de la comuna de Salamanca, la principal localidad es su homónima Salamanca. La ciudad de Salamanca, si bien es pequeña, actúa como un centro de servicios y comercio para varias de las localidades rurales que se ubican en sus alrededores (Aguilera, 2009). Lo mismo ocurre con Illapel, el principal centro urbano de la zona. Sin embargo, todas estas son localidades que destacan dentro de la región por el aislamiento de su ubicación entre cerros y zonas áridas.

El nombre de Choapa, corresponde a la denominación del principal río de la zona, que nace en la Cordillera de Los Andes y desemboca en el mar en Huentelauquén. En su curso superior y medio éste recibe, por su derecha, los ríos Chalinga e Illapel y, por su izquierda, recibe las aguas del estero Camisas. El río Choapa, forma los valles de Choapa, Chalinga y Camisas. En cada uno de los cuales se asientan diversas localidades. En el Valle del Choapa se ubica la ciudad de Salamanca y las localidades de Santa Rosa, Jorquera, Llimpo, Coirón, Cuncumén, Tranquilla, Batuco, Panguesillo, La Higuera, Quelén Bajo y Quelén Alto. En el Valle de Chalinga se asientan las localidades de Chalinga, El Boldo, Cancha Brava, El Tebal, Arboleda Grande, Manquehua, Señor de la Tierra, Cunlagua, Las Jarillas, Huanque, San Agustín y Zapallar. En el Valle de Camisas se ubican las localidades de El Tambo, Tahuinco, Colliguay, El Palquial, El Arrayán, Los Corrales y Peladeros.

5.3. Principales transformaciones productivas en el Valle

Desde la colonia hasta el siglo XIX

Al momento de la llegada europea, la provincia del Choapa era un territorio ocupado por distintas poblaciones indígenas que estaban sometidas a la dominación inca. No existe claridad respecto al nivel de resistencia que impusieron las poblaciones aborígenes de la zona (Cortés, 2003; Ruiz, 2000). Sin embargo, al descubrirse las minas de oro del Choapa durante el gobierno de García Hurtado de Mendoza, se desarrollaron desarraigos forzosos más intensos de los pueblos indígenas, quienes fueron víctima de sobreexplotación física, malnutrición y enfermedades, por lo que disminuyen en cantidad drásticamente (Cortés, 2003).

La actual tenencia de tierras en la zona, deriva de la concesión de las primeras mercedes de tierra cedidas por la Corona de España a los conquistadores considerados más relevantes, periodo de repartimiento de tierras que abarca aproximadamente entre 1544 y 1580. Los valles del Copiapó, Huasco, Elqui, Limarí y Choapa fueron distribuidos por los primeros conquistadores. Sin embargo, por disposiciones en la legislación sobre mercedes de tierra, ningún conquistador podía ser propietario de un valle entero, sino sólo de una parte. También quedaban fuera de sus dominios las quebradas e interfluvios adyacentes a los mismos, estancias que posteriormente darán origen a las comunidades agrarias del Norte Chico (Cortés, 2003).

En el Valle del Choapa, con el temprano descubrimiento de la riqueza minera aurífera, los encomenderos favorecidos van a competir por la escasa mano de obra indígena, desatándose importantes litigios por su posesión. El primer encomendero que se conoce en la zona del Choapa es Luis de Cartagena, después del cual va a aparecer Juan Godínez (Ruiz, 2000: 92). Luego, en 1549 a Pablo de Cisternas se le entrega la estancia nombrada Choapa La Baja y en 1555 a Juan de Ahumada se le entrega Choapa La Alta¹⁴. Estas estancias abarcaban desde la confluencia del río Illapel con el río Choapa hasta las tierras

¹⁴ Es importante mencionar que no hay claridad absoluta respecto a la correspondencia de estos nombres con las estancias definidas. Al contraponer el texto de Cortés (2003) y de Ruiz (2000), es posible observar distribuciones que son contradictorias.

cordilleranas de Cuncumén. En 1546, se le concede a Diego García de Cáceres la estancia de Illapel, que comprendía todo el valle del río Illapel. Estas haciendas cubrían prácticamente toda la hoya hidrográfica del río Illapel y el río Choapa (Cortés, 2003).

Con el aumento de las generaciones, las tierras de la región de Coquimbo se fueron fragmentando entre los herederos, conservándose como bien común las tierras altas de secano que no se podían subdividir y que servían para la crianza de ganado menor y de siembras de rulo, punto de partida de la actual comunidad agrícola del Choapa¹⁵ (Cortés, 2003). Además, se fueron incorporando a la propiedad agrícola soldados, artesanos, mineros, comerciantes y otros pobladores españoles, y a la vez algunos indígenas y mestizos logran retener tierras de sus pueblos (Aranda, 2003). Sin embargo, el caso del Valle del Choapa fue diferente, pues las mercedes Choapa La Baja, Choapa La Alta e Illapel, permanecen indivisas hasta 1821. Más bien, durante el periodo colonial estas aumentan sus dimensiones, a través de nuevas concesiones reales, enlaces matrimoniales, compras o donaciones (Cortés, 2003).

La formación de distritos mineros, faenas agropecuarias, actividades portuarias y el trabajo ferroviario, generaron las condiciones materiales para la concentración de fuerza de trabajo y una importante ampliación del mercado interno en la zona, lo que se encuentra en la base del crecimiento demográfico (Goicovic, 2009: 440). Desde el siglo XVI hasta mediados del XVII, la economía de la región de Coquimbo, y con ella la del Valle del Choapa, centró su crecimiento en las actividades mineras y agrarias. Con el tiempo la agricultura concentrada en el cultivo del trigo y la vid desplaza a la ganadería, lo que implica un vuelco de la economía regional desde un patrón minero-ganadero a uno minero-agrícola. La riqueza de la minería del cobre durante la colonia, va a significar la emergencia de un pujante sector comercial en la región de Coquimbo, vinculado a la explotación minera así como al transporte de minerales a los puertos de Coquimbo y Valparaíso.

Por otra parte, la demanda creciente del mercado peruano por trigo y subproductos de la ganadería, va a exigir un aumento de la producción agropecuaria local y una mayor especialización productiva (Aranda, 2003: 28). Además de la producción de trigo, los

¹⁵ En la comuna de Salamanca existe solo una comunidad agrícola, la comunidad de Chalinga. En Canela, en cambio, existen más de 20 comunidades agrícolas, mientras que en Los Vilos existen tres comunidades y en Los Vilos dos.

pequeños productores de la zona durante la colonia se van a dedicar sobre todo a la producción hortícola, frutal y a las viñas, a la elaboración de vinos y aguardientes que eran vendidos en el mercado interno, especialmente en el minero (Aranda, 2003: 28). Por lo tanto, la demanda de producción agrícola en el Valle no sólo dependerá de la demanda peruana sino también de la demanda interna dada por el sector minero. Esto supone una diferencia con la zona central del país, cuyo desarrollo de cultivos de trigo va a estar gatillada sobre todo por la demanda externa y no por la actividad minera.

En el siglo XIX comienza una fragmentación de la propiedad, con un proceso de transferencia de la tierra hacia nuevos propietarios, los que solían ser comerciantes, militares, políticos o empresarios mineros. Las propiedades extranjeras jugarán un rol central (Cortés, 2013: 54). El caso del Valle del Choapa resultó especialmente emblemático, porque Matilde Salamanca, encomendera en ese entonces, al morir en años cercanos a 1800, deja en su testamento como único heredero a su alma. Dada esta situación, el Estado de Chile reclama ante el tribunal las tierras. Lo mismo hará la Iglesia, al considerar que por tratarse de un asunto de fe le corresponde por derecho propio. El territorio será cedido a la Iglesia en 1806. Sin embargo, durante la Independencia el litigio culminó con la entrega de todas las tierras al estado chileno, que por decreto de Bernardo O'Higgins en 1821 pasan a ser administradas por la Junta de Beneficencia y Asistencia Social de Santiago (Cortés, 2013: 55). En 1844 es fundada la ciudad de Salamanca, en honor a la antigua encomendera, en los terrenos de la hacienda de Choapa ya en manos de la beneficencia. Fue ubicada en la ribera norte del Río Choapa, próxima a un antiguo asiento indígena que se situaba en la localidad hoy conocida como Chalinga. La ciudad de Illapel, por su parte, había sido fundada en 1752 como una villa dentro de la hacienda llamada San Rafael de Rozas. Pese a esta fundación, la hostilidad de Valeriano Gaspar de Ahumada, encomendado de la hacienda impidió el que los vecinos tuvieran suficiente motivación para levantar sus casas y poblar la villa. En 1788 Ambrosio O'Higgins va a ordenar la repoblación de la villa.

La primera gran transformación: la reforma agraria (1968)

A principio de 1930 va a darse un proceso de subdivisión de algunos fundos del Valle. Algunos fueron comprados por particulares, otros fueron obtenidos por parcelización por la Caja de Colonización Agrícola y la mayoría van a ser confiados en 1933 al Servicio

Nacional de Salud y manejados por administradores (Livenais, Janssen y Reyes, 2003: 363). Sin embargo, durante el siglo XX, uno de los principales cambios que se dio en el Valle tuvo que ver con el proceso de reforma agraria. A partir del Plan Choapa de 1968 las grandes propiedades heredadas del periodo colonial van a ser desmanteladas. La aplicación de la reforma en el Valle del Choapa se hizo de manera rápida, siendo el Plan Choapa una especie de plan piloto de la reforma agraria en el país (OLCA, 2004). El inicio temprano de la reforma en el Valle puede ser explicada por la fuerte organización de sindicatos de trabajadores agrícolas existente y las presiones que estos ejercían para cambiar las condiciones de vida de los asalariados de la época. Durante el primer año de la reforma agraria, el Choapa representó el 32% del total de tierras regadas distribuidas y el 50% de las familias beneficiarias del total nacional. De la superficie que consideraba el Plan Choapa, la mayor parte correspondía a los 11 dominios del Servicio Nacional de Salud en la comuna de Salamanca y a 13 fundos particulares de las comunas de Illapel, Salamanca, Canela y Los Vilos. 24 propiedades que representaban el 2,6% de las propiedades consideradas por el plan pero el 89,6% de la superficie correspondiente (Livenais, Janssen y Reyes, 2003: 363).

Esta transformación supuso un gran cambio económico y cultural en la zona. La reforma agraria implicó un cambio estructural en la propiedad de la tierra, generándose una crisis de la gran propiedad que dominó desde la colonia. Estos cambios afectaron los tamaños de los predios y permitieron el surgimiento de nuevas formas de organización y tenencia (Aranda, 2003: 29). Quienes habían sido durante generaciones peones o inquilinos de las antiguas haciendas, ahora pasan a ser propietarios de las tierras, lo que va a significar un cambio fundamental en términos de las relaciones sociales. La Reforma Agraria rompe una situación de inmovilismo social en la zona, a partir de lo cual se generó un despoblamiento del campo y una concentración de la población en las localidades de la zona. Estas transformaciones van a significar el paso desde un régimen de hábitat disperso a uno agrupado, con la creación de villorrios. Esto favoreció el desarrollo de infraestructura social, como escuelas, electricidad, agua potable, así como la red caminera (Livenais, Janssen y Reyes, 2003). Durante la contra reforma que se da con la dictadura militar, se va a instalar un régimen de pequeña agricultura en el valle (Livenais, Janssen y Reyes, 2003: 361). Van a aparecer “áreas de pequeña propiedad producto de la parcelación de los asentamientos que cambian las formas de organización del trabajo; se privatizan los derechos de agua y junto a ello cambian los rubros productivos” (Aranda, 2003: 29).

La segunda gran transformación: la globalización del Valle (1990)

El segundo periodo de profundas transformaciones en el Valle del Choapa, se va a relacionar con la llegada de inversiones para la producción y exportación de materias primas destinadas a la exportación, específicamente en el ámbito de la agroindustria y la minería. En el año 2000 se va a inaugurar el embalse Los Corrales construido por parte del estado de Chile con el objetivo de mejorar las condiciones de riego en el Valle del Choapa y con ello generar un aumento de sus potencialidades agrícolas (Livenais, Janssen y Reyec, 2003). Este embalse ha permitido una alta seguridad de riego en la zona del río Choapa hasta la unión con el río Limarí. Sin embargo, esta seguridad es menor en otras partes de la provincia, dándose importantes contrastes entre las zonas de riesgo y las de secano. En estas últimas el recurso hídrico es escaso y las potencialidades de desarrollo agrícola reducidas.

Además, en el Valle del Choapa se incorporó en los últimos 20 años una nueva infraestructura de riego por goteo, lo que ha permitido un aumento de la oferta agrícola. Disminuyó la producción de cereales, sobre todo de trigo, y también disminuyó la ganadería (bovinos, ovinos y caprinos). En cambio, aumentó la fruticultura (damascos y duraznos) y se desarrolló una especialización progresiva en la producción de uvas para el pisco (Livenais, Janssen y Reyes, 2003). Este cambio se puede observar claramente al analizar las transformaciones en el uso de suelo de la provincia del Choapa según los datos de los Censos Agropecuarios 1997 y 2007, en los cuales se muestra una disminución de los cultivos anuales, forrajeros y de hortalizas y flores. Sobre todo en los predios medianos y pequeños, se va a dar un reordenamiento enfocado en el crecimiento de la fruticultura, actividad más rentable.

Por otra parte, al comparar los Censos Agropecuario 1997 y 2007, es posible notar que los productores con predios más pequeños van a cambiar el uso de suelo sin mayor aumento de la superficie cultivada. Sin embargo, los predios más grandes van a crecer en tamaño además de cambiar el uso de suelo hacia los productos más rentables. Por ejemplo, en la zona existen grandes predios que se dedican al cultivo de la palta. También se va a dar un aumento de las viñas y parronales. Para el año 2007 la comuna de Salamanca concentraba el 15% del total de superficies de vides pesqueras del país (luego de Ovalle con un 39% y

seguida por Monte Paria con un 11%, ambas comunas pertenecientes a la región de Coquimbo).

En la actualidad existen dos sociedades cooperativas que reúnen a los productores de uva para pisco de los distintos valles de la región de Coquimbo: Capel y Control¹⁶. En el Valle del Choapa los productores producen el mosto, el cual luego es llevado a Elqui, donde es procesado, destilado y embotellado. A través de la participación en estas cooperativas, los pequeños productores pueden contar con mayor estabilidad en sus ingresos, pues se les paga mensualmente por lo que produjeron en el año.

Gracias a la tecnificación del riego también se ha dado un aumento importante en la zona de plantaciones de nogales, los cuales son exportados. De esta forma se creó en el año 2007 la Cooperativa Agronuez Choapa, que reúne a los agricultores productores de nogales. Hoy en día está compuesta por alrededor de 90 socios.

Actualmente en el Valle las dos principales empresas agrícolas que llevan a cabo exportación de sus productos, son Mercedario y Norte Verde. La primera fue fundada el año 2006, cuenta con un predio de 850 hectáreas en la comuna de Salamanca, 110 destinadas a la uva de mesa, 340 a la palta hass y el restante destinado a limones, mandarinos y naranjas. La agrícola Norte Verde cuenta con 110 hectáreas, en las que produce palta, cítricos y viñedos.

La compra de tierras de estas agrícolas se basó sobre todo en campos comunes, es decir, terrenos que no fueron repartidos como parcelas durante el proceso de reforma agraria, sino que eran de propiedad compartida por ubicarse en zonas más difíciles para la producción. Sin embargo, gracias a la aplicación de sistemas tecnificados para el riego en zonas de mayor pendiente y altura, estas empresas han logrado producir rentablemente en estos terrenos.

Según los datos del Censo Agropecuario 2007, en la provincia del Choapa el 4% de los predios agrícolas (194 en total) son de más de 100 hectáreas, los cuales concentran el 97% de la superficie de las explotaciones con tierra de la provincia. A la vez, el 46% de las tierras

¹⁶ Para más información ver <http://www.cooperativacapel.cl>.

de la provincia están en manos de empresas privadas, el 15% es de propiedad de comunidades indígenas históricas, el 11% es de productores individuales, por lo que podemos suponer que esta alta concentración de la tierra se debe, principalmente, a las empresas agroindustriales o dedicadas a la agroexportación

Algunas de las principales empresas que se abastecen de proveedores agropecuarios del Valle del Choapa son Capel y Agroindustria Choapa, las cuales se encuentran ubicadas en el Valle. Sin embargo, también las empresas Bodegas Limarí, Propal, Agrozzi y Aconcagua Food se abastecen de productos de la zona, si bien no están ubicadas en el Valle.

Por otra parte, el Valle del Choapa alberga grandes inversiones mineras. La más importante es la minera Los Pelambres, pero también se sitúa en la zona el proyecto Tres Valles. Además, en etapa de optimización para comenzar a operar se encuentra el proyecto binacional El Pachón. Tres Valles pertenece a la empresa brasilera Vale, segunda compañía minera más grande en Chile, que desde el 2006 opera en Salamanca con este proyecto de cobre. A fines del 2013 el proyecto fue vendido a un conglomerado de servicios mineros chileno. El Pachón pertenece a la empresa Glencore Xstrata y es un proyecto compartido entre Chile y Argentina.

El yacimiento cuprífero en el que hoy se ubica Los Pelambres, fue descubierto en 1921 y comprado por la minera Anaconda. Sin embargo, esta quiebra y vende sus derechos en 1986 a Andrónico Luksic. Los Pelambres inaugura su planta en 1992. El 5 de abril del 2000 se da inicio al proyecto. Actualmente la propiedad de este proyecto pertenece en un 60% a Antofagasta Minerals del Grupo Luksic, uno de los mayores grupos económicos de Chile, y en un 40% a un consorcio japonés integrado por Nippon LP Investment (25%) y MM LP Holding BV (15%). Es importante agregar que si bien Antofagasta Minerals es parte de un grupo nacional, su casa matriz está en el exterior.

Los Pelambres es una mina de cobre a tajo abierto, ubicada entre los 3100 y 3600 metros de altura. El yacimiento se ubica más al este de Salamanca, en plena cordillera. Sus instalaciones ocupan 120 kilómetros desde la cordillera, donde se realizan las labores extractivas, hasta el puerto de Chungo, en la zona de Los Vilos, donde se transporta el material (Milet, 2010: 33).

Cuadro 3
Minera Los Pelambres en Cifras

Capacidad de procesamiento	175 mil toneladas diarias de mineral (con un máximo de 210 mil toneladas diarias)
Producción 2013	405.300 toneladas de cobre
Trabajadores propios	978
Trabajadores no propios (colaboradores)	5.204
Trabajadores propios residentes en la región	56%
Número de proveedores de la región 2013	513
Monto de compras a proveedores de la región 2013	137,3 US\$ millones
Inversión social 2013	25,12 US\$ millones (20,62 US\$ millones de la Minera Los Pelambres y 4,5 US\$ de la Fundación Minera Los Pelambres).

Fuente: Elaboración propia en base a los reportes de sustentabilidad de la empresa

Este es uno de los 10 yacimientos cupríferos más grandes del mundo y el cuarto más grande en Chile. Actualmente, sus reservas alcanzan 2210 millones de toneladas y su producción supera las 339.200 toneladas de cobre fino. Además del cobre, en su yacimiento se produce molibdeno, subproducto del cobre. Las actividades de minera en la zona tienen un horizonte temporal de 40 años, según las estimaciones iniciales realizadas por la empresa.

Una de las principales transformaciones que ha vivido no sólo el Valle del Choapa, sino la región de Coquimbo en general, ha tenido que ver con la llegada de las grandes inversiones mineras y específicamente con la minera Los Pelambres. A fines de los años 90 la región de Coquimbo presentaba ritmos de crecimiento inferiores al país, lo cual fue revertido a partir de 1999 con el inicio de las operaciones de la Minera Los Pelambres. Desde entonces la región ha presentado un mayor dinamismo económico (UCN, 2007).

La fuerza de la gran industria minera en la región, ha significado una disminución de la pequeña minería artesanal, dado que la actividad se hace poco rentable para este grupo. La minería tradicional de carácter artesanal del valle hasta los años 90 vendía su producción principalmente a la Empresa Nacional de Minería (ENAMI). Sin embargo, este sector mediano y pequeño se va a debilitar a partir de los años 90.

5.4. Transformaciones socioeconómicas del Valle del Choapa (1990-2013)

Pobreza

Al analizar las transformaciones socioeconómicas que ha vivido el Valle del Choapa desde los años noventa, con la fuerza que toma la agricultura de exportación, y desde el 2000 con el inicio de las operaciones de la Minera Los Pelambres, llama inmediatamente la atención la importante disminución en la tasa de pobreza. Específicamente, esta tasa fluctúa desde un 60% en 1990 a un 14% en el 2009¹⁷. Pero el principal cambio se dio en el periodo comprendido entre el 2000 y el 2009, es decir con la instalación de la Minera Los Pelambres. Choapa fue la segunda provincia del país en la que más disminuyó la tasa de pobreza e indigencia durante este periodo.

Sin embargo, cuando analizamos la situación de cada una de las comunas dentro de la provincia, nos encontramos con una realidad disímil. Mientras en el 2009 Salamanca era la comuna con mayor porcentaje de pobreza e indigencia de la provincia, en el 2011 ocupa el tercer lugar, seguida de Illapel, la cual presenta las menores tasas de pobreza en ambos años. A su vez, si bien en Salamanca e Illapel la tasa de pobreza a indigencia disminuye en este periodo entre 3,6% y 5,4%, en Canela esta tasa aumenta en un 4,8% y en Los Vilos en un 6,5%.

Empleo

Tasa de desocupación. Llama la atención que mientras en 1990, Choapa estaba entre las cinco provincias del país con menor tasa de desocupación, en el 2011 está entre las 14 con tasas más altas. A la vez, es la segunda provincia que presenta mayor crecimiento de la tasa de desocupación entre 1990 y 2000. Sin embargo, ya para el 2011 esta tasa muestra signos de una mayor recuperación.

¹⁷ En el Anexo se puede observar el detalle de todas las estimaciones incluidas en este capítulo, las cuales fueron realizadas en base a los datos de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica (CASEN) para distintos años.

Seguridad del empleo. En 1990 Choapa era la séptima provincia del país con menor tasa de contratación entre su población ocupada¹⁸. Esta situación empeora en el año 2000, pues pasa a ser la segunda con menor tasa de contratación. Es decir, en este periodo no sólo aumenta la tasa de desocupación, sino también el nivel de ocupación sin contrato y por lo tanto la seguridad laboral. Si bien la situación muestra mejoras en el 2011, Choapa se mantiene entre las 13 provincias con menor tasa de contratación en Chile.

Afiliación al sistema previsional. Entre 1990 y 2000 el porcentaje de ocupados afiliados a algún sistema provisional en la provincia del Choapa aumenta en 1,5% para luego, entre 2000 y 2011 disminuir fuertemente este porcentaje. Así, en el 2011 Choapa pasa a ser la provincia con menor porcentaje de ocupados afiliados a algún sistema previsional en Chile.

Autoempleo. Por otra parte, según datos de la encuesta CASEN, para el 2011 el porcentaje de población autoempleada en la provincia de Choapa era de 26,0%, ocupando el lugar número 13 entre las provincias con mayor tasa.

Rubros. Nos existen datos oficiales que nos permitan conocer el número de trabajadores por rubro a nivel de la provincia de Choapa. Sin embargo, según datos de la misma empresa minera Los Pelambres, para el año 2012 el 2,8% del empleo de la región fue originado por la compañía. A la vez, de los 6.000 trabajadores directos de la empresa, el 46%, es decir alrededor de 2.760 trabajadores, son habitantes del Valle (de las comunas de Salamanca, Los Vilos e Illapel)¹⁹. A partir de la encuesta CASEN 2011 se pueden estimar alrededor de 25.000 ocupados en estas tres comunas (que representa alrededor del 9,2% de los ocupados de la región de Coquimbo), por lo que cerca del 11% de estos serían trabajadores directos de Minera Los Pelambres.

Respecto a la población restante (cerca del 90% de los ocupados del valle), es posible estimar que una parte importante está empleada en rubros primarios. Específicamente, según datos de la encuesta CASEN, mientras en el 2006 el 63,6% de la población de la provincia estaba empleada en rubros no primarios, en el 2011 esta tasa disminuye a 61,7%. Este dato es especialmente relevante, si consideramos que en el periodo sólo siete

¹⁸ La tasa de contratación en este análisis corresponde al número de ocupados contratados en relación al total de ocupados.

¹⁹ Información extraída de <http://www.pelambres.cl/comunidad-impacto-socioeconomico.html>

provincias del país disminuyen dicha tasa, siendo Choapa la cuarta que lo hace en mayor porcentaje. Esto da cuenta sobre todo del trabajo relacionado a la agricultura, pues el sector minero, si bien corresponde a la extracción de materias primas, no se contabiliza en esta encuesta como sector primario (a menos que sean pequeñas faenas). Es decir, un porcentaje predominante de la población de la provincia se dedica a la agricultura o pequeña minería, tendencia que ha ido aumentando en los últimos años.

Participación por sexo. Al analizar la tasa de participación laboral según sexo²⁰, la provincia de Choapa destaca por ser en el 2006 la quinta provincia del país con menor tasa de participación laboral femenina (31%) y en el 2011 la tercera (33%). Entre el 2006 y el 2011 esta tasa aumenta sólo 2,18%, lo que es bajo en comparación y al resto del país y nos indica que no hay una tendencia a mostrar mejores niveles de incorporación de las mujeres a la fuerza laboral.

Dinamismo económico

Según datos del Servicio de Impuestos Internos (SII), entre el 2005 y el 2012 en las comunas de Illapel y Salamanca el número de empresas existentes aumentó en un 6,7% y 17,2%, respectivamente. En Canela y Los Vilos, por otra parte, el número de empresas aumentó en 7,9% y 5,4%. Al relacionar el número de empresas con la cantidad de habitantes de cada comuna, vemos importantes diferencias dentro de la provincia. Salamanca destaca como la comuna que presenta mayor dinamismo empresarial de las cuatro de la provincia, seguida por Illapel y mucho más abajo Canela.

Al analizar el número de empresas según rubro, se observa que en las cuatro comunas de la provincia se da una disminución entre 2005 y 2012 en el número de empresa dedicadas a la agricultura, ganadería, caza y silvicultura, siendo esta disminución porcentualmente mayor en Canela (-32,2%) y en Los Vilos (-21,4%), y menos en Illapel (-16,2%) y Salamanca (-8,8%). Estas últimas dos, siguen siendo las comunas con mayor número de empresas dedicadas a este rubro en la provincia. En cambio, en tres de las cuatro provincias se da un aumento del número de empresas dedicadas a la explotación de minas y canteras. Aumento

²⁰ Corresponde a la población económicamente activa como porcentaje de la fuerza de trabajo, según sexo. Dato extraído del sistema de información territorial de Rimisp – Centro latinoamericano para el desarrollo rural. Disponible en www.rimisp.org.

que es porcentualmente mayor en Salamanca (98,6%), seguida por Illapel (67,3%) y Los Vilos (24,3%). En Canela, en cambio, se da una disminución en el número de empresas dedicadas a este rubro (-33,3%). En 2005 Los Vilos era la comuna con mayor cantidad de empresas dedicadas a la minería, pasando en 2012 a tener la misma cantidad que Salamanca.

Las empresas dedicadas al comercio, los hoteles y los restaurantes, han aumentado en las cuatro comunas de la provincia de Choapa. Sin embargo este aumento ha sido porcentualmente mayor en Salamanca (20,9%) que en las otras tres comunas (con crecimiento menor al 10%).

Cuadro 4.
Cambio en el número de empresas según rubro (2005 - 2012)

		Salamanca	Illapel	Los Vilos	Canela
<i>Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura</i>	2005	669	407	82	59
	2012	610	341	66	40
	Variación 2005-2012	-8,8%	-16,2%	-21,4%	-32,2%
<i>Explotación de minas y canteras</i>	2005	72	52	115	21
	2012	143	87	143	14
	Variación 2005-2012	98,6%	67,3%	24,3%	-33,3%
<i>Comercio, hoteles y restaurantes</i>	2005	545	727	582	177
	2012	659	794	628	186
	Variación 2005-2012	20,9%	9,2%	7,9%	5,1%
Fuente: elaboración propia a partir de datos del SII e INE					
Número de comunas consideradas: 345. Posición en orden de menor a mayor porcentaje					

Respecto a la minera, los habitantes del Valle han podido ir desarrollando servicios para ésta, con la proliferación del comercio, de la hotelería, de los restaurantes y de empresas ligadas a la producción minera. Esto explica, a su vez, que según datos del INE para el 2011, la provincia del Choapa se ubique entre las 11 provincias con mayores índices de diversidad del empleo (0,07)²¹. Sin embargo, existe una alta predominancia de trabajo relacionado con el sector primario, por lo que si bien hay alta diversidad de sectores que dan empleo, el sector secundario y terciario generan una cantidad de empleos mucho menor a los que otorga el sector primario, de predominante agricultura. Esto se relaciona con las altas tasas de autoempleo, bajas tasas de contratación y de afiliación a algún sistema previsional en la provincia, pues la mayor cantidad de empleos que se generan son en la agricultura por cuenta propia y, en menor cantidad, dándole servicios a la minería a través de la generación

²¹ Correspondiente al índice Herfindhal, que mide la diversidad sectorial de empresas. Dato extraído del sistema de información territorial de Rimisp – Centro latinoamericano para el desarrollo rural. Disponible en www.rimisp.org.

de pequeños negocios. El dinamismo empresarial en el valle viene de la mano sobre todo con el aumento de las pequeñas empresas y no tanto así de las medianas y grandes.

Ingresos

En 1990 Choapa era la segunda provincia con un ingreso autónomo²² per cápita más bajo en Chile y en el 2000 sigue estando dentro de las cuatro con niveles más bajos. Si bien en el año 2011 se da un avance, Choapa se mantiene entre las 10 provincias con más bajo ingreso per cápita. Sin embargo, no existen datos comunales que nos permitan analizar la diferencia dentro de la provincia, las que seguramente son importantes para comprender mejor este indicador, sobre todo porque los principales empleos creados en la zona gracias a la minería se ubican en las comunas de Salamanca, Illapel y en Los Vilos, pero en menor medida en Canela, comuna más pobre que seguramente puede estar sesgando los datos. Por otra parte, al analizar la desviación estándar de los ingresos per cápita, como indicador de la desigualdad, podemos observar que en 1990 y el 2000 Choapa está entre las tres provincias con menor dispersión de ingresos per cápita. Sin embargo, en el 2011 esta situación cambia, pasando a ubicarse entre las 16 provincias con mayor desigualdad de ingresos per cápita, lo que indica un importante aumento de la desigualdad de ingresos en la provincia durante el periodo.

Infraestructura y parque automotriz

Una de las principales transformaciones que se han vivido en el valle a partir de la llegada de la Minera Los Pelambres tiene que ver con el mejoramiento de la infraestructura de la zona. Por ejemplo, en el espacio público de Salamanca se pueden apreciar modernas obras públicas de infraestructura, algunas de las cuales han sido financiadas o cofinanciadas por la minera. Por otra parte, tanto en Illapel como Salamanca, llama la atención el desarrollo de infraestructura moderna para la instalación de restaurantes y hoteles que no es común encontrar en otras ciudades del país pequeñas y con un relativo aislamiento, como ocurre con Illapel y Salamanca.

²² La encuesta Casen define el ingreso autónomo como todos los pagos que recibe el hogar como resultado de la posesión de factores productivos. Incluye sueldos y salarios, ganancias del trabajo independiente, la autoprovisión de bienes producidos por el hogar, rentas, intereses, pensiones y jubilaciones.

Es interesante observar que este mayor desarrollo de la infraestructura local no ha implicado un mayor grado de urbanización, es decir un aumento de la población concentrada en los núcleos urbanos. Según datos de la encuesta CASEN, la provincia del Choapa en el 2011 es la cuarta en Chile con menor grado de urbanización²³ (56,2%) y la quinta en la que más ha disminuido este grado entre 2009 y 2011 (-5,9%). Es decir, hay una tendencia creciente a poblar zonas rurales en la provincia o, más bien, a que la distribución del poblamiento sea disperso.

El aumento del parque automotriz es una de las transformaciones evidentes en el paisaje del valle, sobre todo en comunas como Salamanca e Illapel. Entre 2008 y 2011 la provincia del Choapa estuvo entre las nueve provincias del país en las que más aumentó el número de vehículos motorizados (64%). Sin embargo, esta situación es bastante diferente dentro de cada comuna. Para el año 2013, en Illapel existían 0,25 vehículos motorizados por habitante, en Salamanca y Los Vilos 0,24, mientras que en Canela sólo 0,16.

²³ El grado de urbanización se define como el porcentaje de la población urbana respecto a la población total. En Chile, el Instituto Nacional de Estadísticas, define la población urbana en Chile como un conjunto de viviendas concentradas, con más de 2.000 habitantes, o entre 1.001 y 2.000, con el 50 por ciento o más de su población económicamente activa dedicada a actividades secundarias y/o terciarias.

5.5. Gran Minería e historia de conflictos en el Valle

Desde la instalación de la minera Los Pelambres a inicio de los años 90 se han desatado diferentes conflictos con las comunidades locales. En una primera etapa, entre 1996 y 1997, los principales conflictos nacieron por parte de algunos habitantes de Los Vilos, ciudad ubicada en el borde costero de la provincia del Choapa, donde se instalaría un terminal marítimo de carga de concentrado de cobre, específicamente en la Bahía de Conchalí. En Los Vilos la pesca es la principal fuente de ingresos y empleo. Tiempo antes de iniciados los conflictos, se habían incorporado nueva tecnología para la realización de actividades de cultivo y manejo de moluscos y productos del mar. En este contexto, las organizaciones de pescadores de Los Vilos iniciaron protestas contra la construcción del terminal de carga, dado los impactos ambientales que generaría y las limitaciones en el área de pesca artesanal. Una vez instalado el terminal marítimo, se generaron dificultades de circulación de las embarcaciones artesanales producto de la operación de los buques que transportan el mineral, lo que afectó la actividad pesquera (OLCA, 2004). Finalmente, la minera logró llegar a un acuerdo con las organizaciones de pesqueros, a través de la firma de un convenio de colaboración en 1998, sin por ello dirimir todas las opiniones desfavorables sobre la construcción del terminal, ni tampoco evitar el levantamiento de sospechas y desconfianzas respecto a la cooptación de dirigentes por parte de la minera para lograr frenar la radicalización de las protestas.

En la etapa de ampliación del proyecto minero, a fines de los años 90, los principales conflictos que se desataron tuvieron como protagonistas a los agricultores del Valle del Choapa, sobre todo de las localidades de Chillepín y Cuncumén. El Valle del Chapa ha debido afrontar en su historia las fluctuaciones en la disponibilidad del recurso hídrico, lo que supone un gran problema sobre todo para la producción agropecuaria de la zona. Con la llegada de la Minera Los Pelambres esta situación se complica aún más. En este sentido, se han generado protestas por las grandes cantidades de agua que la empresa minera requiere para su proceso productivo. Según información de la minera, en el año 2009 se utilizaron 97,7 millones de milímetros cúbicos de agua para sus procesos productivos, lo que según la empresa sería una cantidad prudente en comparación al resto de las empresas mineras del país. Sin embargo, esta situación ha despertado tensiones con los agricultores, quienes piden la priorización de esta actividad a través de la construcción de embalses (Larraín y

Poo, 2010:171). Además de la cantidad de agua que la minera utiliza, la contaminación que genera sobre este recurso ha sido uno de los principales temas que ha despertado el conflicto con las comunidades de la zona. La operación de la minera ha generado la presencia y concentración de elementos tóxicos en el agua del río. Además, se ha podido verificar un importante nivel de contaminación de las napas subterráneas de la zona. Su contaminación ha significado la destrucción completa de por lo menos cuatro de los quince glaciales de roca ubicados en la zona cordillerana donde está la minera.

Por otra parte, el proyecto original de la minera contemplaba la construcción de tres tranques de relave. Sin embargo, el Tranque Los Quillayes, primero construido y ubicado en lo alto del valle, comenzó a colapsar a dos años de entrar en funcionamiento, lo que obligó a que la empresa adelantara la construcción de los dos tranques restantes. Ante el anuncio de la construcción de estos dos nuevos tranques en la quebrada estero El Manque cercana a la localidad de Chillepín, las comunidades del valle, apoyadas por organizaciones medioambientales, van a oponerse. Se organizaron en el Frente de Defensa del Valle del Choapa, organización compuesta principalmente por agricultores y juntas vecinales. En septiembre del 2001 se reúnen cinco mil firmas en oposición a la construcción de los tranques de habitantes de Chillepín, Cuncumén, Coirón y Panguesillo. Su principal preocupación eran los efectos en la actividad agrícola y la calidad de vida que podrían generarse ante un posible derrumbe o colapso del tranque. Producto del fuerte rechazo de las comunidades, la empresa propone no realizar la construcción del nuevo tranque en El Manque a cambio de contar con la aprobación de la comunidad para generar un aumento en la capacidad del tranque Los Quillayes en Cuncumén y construir un nuevo tranque, El Mauro, en el valle contiguo del Pupío. Finalmente, la empresa logra obtener en el 2004 los permisos medioambientales para realizar este proyecto. Si bien a través de esta decisión se apaciguaron los conflictos con los habitantes aledaños al Manque, con el nuevo tranque de El Mauro van a ser las comunidades aledañas al valle del Pupío, y específicamente de la localidad de Caimanes ubicada a 12 kilómetros del tranque, los que se levantaron contra la minera (OLCA, 2004).

Otra fuente de conflictos entre la minera y las comunidades de la zona se ha relacionado con los derrames tóxicos que se han generado sobre el río del Choapa. Al ubicarse la minera en plena Cordillera de Los Andes, para poder transportar su producto cuenta con un conducto

que cruza toda la provincia hasta llegar al mar, en el puerto de la ciudad de Los Vilos, desde donde este se exporta. En diversas ocasiones este conducto ha presentado fallas generando derrames tóxicos sobre las cuencas del río Choapa (Larraín y Poo, 2010). En el 2007, después de que vecinos y organizaciones medioambientales denunciaran la ocurrencia de un importante derrame tóxico, la Corporación Regional de Medio Ambiente (COREMA) concluyó que la Minera Los Pelambres actuó arbitrariamente al descargar desechos de la industria minera al río Cuncumén, poniendo en grave riesgo el recurso hídrico, lo que fue dejado en evidencia por los informes de la DGA sobre la elevación transitoria de los niveles de Sulfatos y Molibdenos en el río. En agosto de 2009 nuevamente se genera una contaminación del río, lo que moviliza a varios vecinos de la comuna de Salamanca. Entre 2008 y 2009 se registran más de 11 episodios de contaminación de este tipo en Salamanca e Illapel.

Durante el desarrollo de todos estos conflictos han participado junto a las comunidades algunas organizaciones ambientales, nacionales e internacionales, como el Instituto de Ecología Política, Greenpeace y el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA). El objetivo de éstas ha sido darle apoyo a las demandas de las comunidades. Sin embargo, no siempre estas organizaciones han actuado de manera alineada, ni entre ellas ni con las comunidades, generándose diferentes fragmentaciones o diferencias entre los grupos que participan del conflicto. A partir de estos conflictos se van a denunciar irregularidades en los procesos de evaluación ambiental del proyecto minero y una capacidad de influencia de la empresa minera en la COREMA, la Comisión Nacional de Medio Ambiente (CONAMA) u otros servicios técnicos asociados al sistema de evaluación ambiental, así como desinformación intencionada, el incumplimiento de compromisos, sobre todo de mitigaciones medioambientales por parte de la minera, la generación de compensaciones económicas y negociaciones privadas. Va a instalarse la idea de que los acuerdos logrados con la minera no tienen mayor validez y que no existen mecanismos legales ni el apoyo del aparato público para hacer cumplir éstos y para, en general, regular el accionar de la empresa ante los efectos dañinos en los derechos de las comunidades (OLCA, 2004).

Además, se va a levantar una sospecha constante sobre la existencia de vinculaciones entre la minera Los Pelambres y el sector público, tanto a nivel central como con los gobiernos

locales. A partir de los rumores de que Andrónico Luksic, uno de los empresarios más importantes del país y uno de los propietarios de la minera Los Pelambres, sería uno de los principales financistas de la Concertación, coalición política que ha gobernado Chile en la mayoría de los periodos de gobierno luego del regreso a la democracia, va a aumentar el nivel de desconfianza sobre la capacidad del sector público de ser un intermediador válido en los conflictos con la minera, así como un ente capaz de hacerse cargo de los efectos negativos que genera la minería en el valle. A la vez, continuamente durante la ocurrencia de estos conflictos se han levantado sospechas sobre la cooptación de algunos dirigentes de organizaciones sociales. Ya desde el inicio de los conflictos se levantaron sospechas, por ejemplo respecto a las organizaciones de pescadores de Los Vilos. Según OLCA (2004):

“Si bien es cierto que las acciones iniciales de las organizaciones de pescadores en Los Vilos tuvieron un carácter radical, más tarde las presiones y manipulación de Minera Los Pelambres logró cooptar dirigentes de los pescadores imponiendo un acuerdo desventajoso a todas luces, pero que finalmente permitió resolver formalmente el conflicto en la caleta”.

La misma sospecha va a recaer contra la Junta de Canalistas del Choapa y también sobre el Frente de Defensa del Valle del Choapa. Por ejemplo, respecto a esta última, las sospechas planteaban que la organización estaba ayudando a la minera en la promoción de la construcción del tranque en el valle del Pupío, pues si bien Caimanes es una localidad vecina, se ubica lo suficientemente lejos como para no afectar sus propios intereses. Muchas veces se interpretan estas cooptaciones como una estrategia de la minera no sólo para frenar rápidamente los conflictos a través de compensaciones privadas y negociaciones rápidas con los principales dirigentes, sino también como una forma de desarticular a las organizaciones y de tal forma debilitarlas en su capacidad de generar futuros levantamientos.

6. Identidades, Imaginarios y Nuevas Relaciones Sociales en el Valle del Choapa

6.2. Extrañeza

La llegada de la minera Los Pelambres ha generado un importante aumento de las posibilidades de trabajo y de la diversidad de empleos en el Valle del Choapa. Hasta la llegada de la minera los habitantes de la zona se dedicaban principalmente a la pequeña agricultura, a la explotación minera en pequeña escala y al comercio. En cambio, hoy en día las posibilidades laborales se han expandido hacia nuevos rubros que seguramente no se hubieran desarrollado con tanta rapidez sin la influencia de la Gran Minería en la zona. Los ejemplos de esta transformación se pueden observar en la oferta comercial existente en el centro urbano de ciudades como Salamanca o Illapel, que muestran un importante desarrollo de servicios de hotelería, con la instalación de sucursales de grandes cadenas de supermercados y farmacias, así como de diversas empresas que dan servicios a la mina. Todos estos servicios han aumentado las posibilidades laborales para los habitantes de la zona.

Sin embargo, son pocos los trabajos que genera para los habitantes del valle la misma minera en su proceso productivo. Son muy pocos los habitantes del valle que trabajan en el yacimiento o las instalaciones que tiene la minera Los Pelambres. La mayoría de los trabajadores directos provienen de otras zonas del país, quienes se desplazan periódicamente para realizar sus turnos de trabajo en las instalaciones de la mina. A la vez, son pocos los habitantes que trabajan contratados directamente por la minera así como los ligados a las múltiples empresas contratistas que tiene Pelambres.

Si bien la llegada de la minera Los Pelambres ha generado diversos trabajos vinculados a los servicios y ha permitido el crecimiento y desarrollo del comercio, este mayor dinamismo económico no es vivido con clara aceptación entre los habitantes del valle. Existe la sensación de que si bien el trabajo que realiza una parte importante de la población está vinculado directa, pero sobre todo indirectamente a la minera, a través de los servicios no se trabaja *con* la minera sino que *para* la minera.

Los servicios se entienden como un trabajo anexo a la producción minera y consustancial a ella. De esta forma, el trabajo en servicios tiende a seguir dinámicas cíclicas, donde, por ejemplo, los hoteles y restaurantes pueden pasar vacíos durante varios días del mes, pero llenarse en aquellos periodos en los que se realizan paradas de planta, tiempo durante el cual quienes trabajan en las instalaciones de la mina suelen tomarse algunos días de descanso en las localidades cercanas. Sobre esto, una de las entrevistadas planteaba:

“Hay mucha gente que está trabajando *para la minera* y que no es mano de obra calificada, entonces tienen pegas [empleo] esporádicas, tienen pegas, no tienen pegas, entonces así mantienen de alguna u otra forma vinculada a las familias al campo laboral con fuentes de empleo, pero eso no necesariamente repercute en la calidad de vida de la gente” (Marcela).

Los múltiples trabajos que genera la minera en la zona no se viven como propios, sino como formas alienantes de trabajar. Eso se puede explicar por el hecho de que pese al dinamismo económico que ha implicado, su forma de producción sigue siendo de enclave y los habitantes del territorio no logran sentirse parte de sus beneficios. Existe, en cambio, una constante crítica respecto a los beneficios económicos que genera la minería como insuficientes. “Son sólo migajas”, es la frase que se repite para dar cuenta de la enorme desproporción entre las riquezas que la minería genera para sus propietarios y sus trabajadores directos en comparación a los habitantes del valle. Así, se distingue una “verdadera riqueza” que ha generado la minera en contraposición a las “migajas” que reciben los habitantes del valle (Cf. Bebbington and Bury, 2012: 56).

La dinámica de enclave que genera la minera se relaciona con una forma de producción en la que no es fácil articular los intereses de la compañía con los de los habitantes de los territorios que esta ocupa. Los objetivos que persigue la industria minera se constituyen como fines extraños a las identidades y formas de vida de los habitantes del valle. No sólo no son parte del proceso productivo, sino que tampoco comparten los objetivos o fines de este proceso. Eso se relaciona, en primer lugar, con el hecho de que en la actividad minera se extraen minerales que no se articulan con las necesidades de las poblaciones (Giarracca y Teubal, 2010: 126), pues estos no se consumen directamente ni tampoco se experimenta el uso que se les da en los contextos donde se exportan.

Podría pensarse que los habitantes podrían ser actores interesados por la productividad económica de la minera, por el dinamismo que genera. Sin embargo, esto no es lo que ocurre en el valle. Más bien se despliega un malestar y una sensación de alienación a la hora de

realizar algún trabajo vinculado a la minera, por los efectos negativos que genera en el territorio, los cuales no permiten contar con la seguridad de que los fines de ese trabajo son coherentes con las propias identidades y valorizaciones. Según Peet et al (2010:14) la alienación que se genera en estos contextos tiene que ver con la necesidad que genera el capitalismo de entender las relaciones sociales conformadas por individuos que persiguen intereses egoístas, lo que los fuerza a realizar acciones que saben que son social y medioambientalmente destructivas. De esta forma, la minería se constituye como una actividad extraña, “no sólo en sus mediaciones y características tecnológicas sino fundamentalmente en sus sentidos político-culturales y destino económico” (Machado, 2013: 137).

Por otra parte, la lógica de producción minera también genera extrañeza respecto al foráneo que llega al valle a desarrollar el trabajo vinculado a la mina. Con el inicio de las operaciones de la minera, la población del valle ha ido creciendo cada vez más. Por una parte aumentó la población flotante, la cual se moviliza entre distintas ciudades de Chile para realizar los trabajos directos en la mina, en las empresas contratistas o de servicios. Esto incluye a los mineros propiamente tal, así como diversos ingenieros y técnicos ligados al trabajo minero. Por otra parte, con el mayor dinamismo económico que se ha generado, ha aumentado la población migrante que llega como mano de obra barata en los múltiples servicios que se han ido instalando. Cada vez se pueden ver más migrantes de países del resto de la región que llegan a desempeñarse en este tipo de empleos. Fenómeno que si bien es creciente en todo el país, se hace especialmente relevante en estos contextos, donde territorios mineros como el de Choapa se convierten en especial foco de recepción de estos trabajadores.

Esto se relaciona con una sensación de disminución de la copresencialidad en las relaciones sociales que se dan en el valle. De una costumbre a vivir la escala local que permite el conocimiento entre los habitantes del territorio, la llegada masiva de trabajadores foráneos introduce dinámicas propias de un contexto donde es posible un mayor anonimato. Sin embargo, esta no parece ser la realidad del valle, donde los habitantes tradicionales siguen conociéndose y encontrándose cotidianamente en el espacio público aún pequeño de ciudades como Salamanca e Illapel. Por lo tanto deben convivir relaciones de copresencialidad con relaciones de anonimato respecto a la población flotante.

Respecto a los empleados de la minera, estos son percibidos como extraños en la medida en que si bien comparten el territorio se asume que lo hacen de un modo desinteresado. En las

conversaciones con habitantes de la ciudad de Salamanca, era habitual escuchar como ellos hacían referencia a la manera como los trabajadores llegan en sus buses, se detienen por un pequeño tiempo en la ciudad, consumen en los negocios aledaños a la plaza central de Salamanca para luego regresar a sus buses y partir en dirección hacia el yacimiento de la mina:

“Los mineros llegan aquí, porque aquí de la zona habrá un 10% a todo reventar que trabaja acá. El 90% es de afuera, llega aquí, se toman el bus que los llevan a su destino y se van” (Carlos). “La minera lo que tiene, lo malo que tienen es que pasan en bus, derecho para arriba” (Cristina). “Vienen por semanas, vienen por turnos. Pero siempre la gente llega, hasta un periodo como de veinte minutos, toma el bus y se va” (Pilar).

Esta imagen se relaciona con el hecho de que los mineros de Los Pelambres en su gran mayoría no son habitantes del valle sino que foráneos, quienes además no pasan mucho tiempo ni tienden a generar relaciones con los habitantes de las ciudades de Salamanca o Illapel. Por lo tanto son transeúntes en cuyo paso generan cierto consumo pero no generan mayores lazos ni formas de integración con los habitantes de la zona. Su paso marca el hecho de que son habitantes de otro territorios y que su interés por el valle es circunstancial. Sus proyectos de vida están arraigados en otro lugar, por lo que no desean vivir en el valle, ni tampoco consumir las ganancias, –o por lo menos la parte más importante– de su trabajo en él. Pero además estos no son un foráneo cualquiera que anda de paso por el valle. No son como cualquier turista o visitante. Los trabajadores mineros transitan en el espacio público a través de performances productivas que no pasan desapercibidas: grandes camiones, cascos y trajes reflectores, implementos de seguridad, etc. Por lo tanto, son extraños y desinteresados que se hacen notar marcando su presencia.

Por otra parte, respecto a los trabajadores que han llegado a vivir al valle como mano de obra barata y a las mujeres, muchas extranjeras, que han arribado a la zona para dedicarse al comercio sexual, también se observan como extraños, pero en un sentido diferente al del trabajador ligado directamente a la minería. Muchas veces se responsabiliza a estos nuevos habitantes del aumento de la delincuencia en el valle. Por ejemplo, una de las entrevistadas plantea:

“En Salamanca está lleno de poblaciones callampa y de tomas a la orilla del río. Desgraciadamente son pura gente que viene de afuera y no tienen donde vivir porque las casas aquí son carísimas. Toda esa gente que no llegaría acá si no fuera por el tema de la minería.

Nosotros sufrimos esas consecuencias, porque asociado con eso te llega el tema de prostitución, los robos, la delincuencia. El otro día me acordaba con unos amigos de chicos, que uno llegaba, te digo hace cinco años atrás, uno dejaba los autos abiertos, las casas abiertas, nunca te preocupabas si te robaban o no, nunca pasaba eso, quién cerraba un auto, era ridículo, pero ahora olvídate, te roban. Y no es que sean los nativos de acá, sino que la gente que viene de afuera, porque andan buscando mejores oportunidades, de repente no las encuentran, de platas fáciles. Entonces esos son los efectos negativos que nos trae la minería” (Marcela).

Estos foráneos, a diferencia de quienes trabajan para la minera, por lo general sí llegan a vivir al valle, por lo que se transforman en nuevos habitantes, que van a compartir el espacio público de manera más cercana a los antiguos habitantes. Sin embargo, su llegada se vive por los antiguos habitantes como un malestar que viene aparejado a la minera, como un efecto inevitable de la dinámica de territorialización que supone la minería.

Por otra parte, la sensación de extrañeza también se genera respecto a la empresa minera en sí misma. La minera Los Pelambres es la extraña por excelencia. Es común escuchar a los habitantes del valle hablar del carácter multinacional de la compañía, cuyos dueños y principales trabajadores no tienen ninguna relación con el valle. Estos, por lo general, trabajan y viven en Santiago, o incluso en otros países, sin embargo sus decisiones son centrales para el devenir del territorio. Por lo tanto, estos son los extraños más lejanos pero más omnipotentes. Su presencia y peso se siente cada vez que, por ejemplo, los habitantes hacen referencia a uno de los grupos económicos dueños de la compañía, la familia Luksic, sobre todo cuando aparecen en los medios de prensa noticias sobre sus nuevas compras o cambios en sus propiedades. Es habitual escuchar a los habitantes haciendo mención a estas noticias, contándose los unos a otros con especial interés, sabiendo que esos cambios, por muy ajenos que parezcan, pueden funcionar como detonadores de rupturas profundas en sus vidas cotidianas. En este sentido, el extrañamiento que viven varios de los habitantes del valle respecto a su mismo territorio, tiene que ver con la sensación de poseer cada vez menos capacidad de apropiación y decisión respecto al futuro del espacio compartido. El presente y futuro del valle está fuertemente determinado por una industria cuyos fines ni comprenden ni comparten con claridad y son cada vez más espectadores de un proceso productivo cuyos efectos funcionan a escalas que van más allá de la lógica a la que están acostumbrados.

6.3. Desconfianza

Sospecha y divisiones internas

Uno de los sentimientos compartidos entre los habitantes del Valle del Choapa que podemos encontrar en la actualidad es el de la desconfianza. Esta desconfianza se replica al interior de la comunidad, generándose una profunda desconfianza interna que se relaciona con una sospecha respecto a los intereses de quienes, pese a ser habitantes del valle, se relacionan, directa o indirectamente, con la empresa minera. Se asume que quienes se relacionan con la minera están dispuestos a destruir la sustentabilidad económica y social del valle en función de sus ganancias monetarias personales. Esta sospecha no nace de la pura especulación, sino que se basa en la historia de relacionamiento entre la minera y la comunidad del valle, en la que se dieron, sobre todo en sus orígenes, importantes negociaciones privadas entre la empresa y ciertos actores. A través de estas negociaciones se apaciguaron conflictos que podrían haberle resultado costosos a la empresa y a la vez favoreció a aquellos habitantes que recibieron recompensas económicas.

Quienes accedían a estas negociaciones eran, por una parte, grupos de habitantes que se veían directamente afectados por la operación de la minera, como por ejemplo los habitantes aledaños a la instalación de los tranques de relave. Por otra parte, se repiten las historias de representantes de instituciones públicas o dirigentes de organizaciones sociales que fueron cooptados por la minera. Es común escuchar la historia de algunos dirigentes sociales que participaron en manifestaciones y organizaciones para denunciar y hacer frente a la minera ante, por ejemplo, importantes casos de contaminación, quienes luego terminaron trabajando para la empresa. Todas estas negociaciones directas y cooptaciones, generaron importantes divisiones entre la comunidad apareciendo la figura del que “se vendió a la minera”, con la que los habitantes hacen referencia a aquellos que están dispuestos a renunciar a la protesta contra los costos medioambientales y sociales que genera la actividad minera, con tal de acceder a mayores beneficios económicos individuales (Cf. Bebbington and Bury, 2012: 71).

Especialmente relevante y compleja es la crítica a los mismos representantes de organizaciones sociales o medioambientales que se declaran contrarios a la minería. Incluso sobre ellos recae una sospecha de que en realidad están buscando acceder a negociaciones

privadas. Uno de los entrevistados, haciendo referencia a la desconfianza acumulada a partir de estas experiencias, plantea:

“Caimanes es complejo porque allá tú *no sabes con quién estás hablando*. Allá hay dos bandos: están los pro inversión minera y lo que no están de acuerdo. Los que no están de acuerdo están pensando en que en algún momento pueden recibir un rédito económico para cambiar de posición. Porque ha ocurrido. Entonces al final *no sabes con quién estás hablando*” (Carlos).

Se genera una importante desconfianza hacia los habitantes que participan de las organizaciones sociales, sobre todo los dirigentes, porque siempre cabe la sospecha de que sus verdaderos intereses sean terminar cooptados o incluso trabajando para la minera. Por lo tanto, se va a dar una resistencia a participar de dichas organizaciones, las cuales son vinculadas a la consecución de intereses personales y no colectivos.

Por otra parte, la desconfianza recae con especial fuerza sobre los representantes políticos locales. Varios entrevistados nos van a relatar la historia de actores políticos, como concejales y diputados, que van a tener un especial interés por relacionarse con la minera, sobre todo como representantes de la comunidad en los momentos de conflicto. Sobre esto, una de las entrevistadas plantea:

“Es que siempre si pasa algo en Salamanca ahí andan metidos todos. Después la minera viene, los llama para un ladito a los que se meten, ellos vienen para que la minera los vea, la minera los llama para un ladito, les pasa el billete y se quedan calladitos. Y los tontos ahí quedan, los otros, peleando. Eso ha pasado siempre” (Cristina).

Esta sospecha tiende a extrapolarse a la política en general. En este sentido, se da una sensación de frustración y un desinterés respecto a la política y a sus cargos de representación. Además, se tiende a vincular intrínsecamente a las organizaciones medioambientales o de denuncia hacia la minera, como organizaciones políticas, dado que atribuyen a ellas el carácter corrupto que le adjudican a la política. Esto explica el que algunos entrevistados planteen que no les interesa participar de estas organizaciones *porque* no les interesa la política, con lo que asocian las características negativas que le adjudican a la política a la participación en organizaciones sociales contra la minera.

Esta desconfianza se ha ido extrapolando hacia cualquier tipo de relación que se tenga con la minera, más allá de las relaciones basadas en la transacción monetaria directa. Con la figura del “vendido”, se hace referencia ya no sólo a quienes se dejan cooptar sino también

a aquellos que trabajan directa o indirectamente para la minera o aquellos que disfrutan de los beneficios de los programas de responsabilidad social empresarial que esta ofrece. Consciente de la generalización de esta crítica, uno de los entrevistados planteaba:

“No es toda la comunidad [la que “se vende”], porque el que tiene el hotel no va a decir eso, unos dos o tres valientes por ahí, que después lo andan acusando que anda vendido porque anda trabajando. Todo eso es parte del tablero de ajedrez en el que la minera tiene a la gente” (Gonzalo).

Dado que un porcentaje importante de la población tiene trabajos que se vinculan de una u otra forma con la minería, este enjuiciamiento constante ha despertado un extendido malestar, ya que nadie quiere reconocerse como cercanos a la minera pero a la vez una parte importante trabaja con algún nivel de relación con ella o por lo menos tiene familia que lo hace.

Hacia el rol social de la minera

En los primeros años de instalación de Pelambres se generó una forma de desconfianza de la comunidad ante la minera que es bastante habitual en los territorios donde se instalan grandes inversiones de capitales transnacionales. Las expectativas sociales reconocían que los intereses de la empresa la llevarían a generar efectos sociales y sobre todo ambientales perjudiciales para los habitantes. En los últimos años las grandes inversiones mineras en Chile han vivenciado fuertemente los costos que pueden suponer los conflictos con las comunidades locales, al frenarse proyectos por perder legitimidad. De esta forma, las empresas van a introducir nuevas estrategias de relacionamiento con los habitantes locales, cambiando su lenguaje y mostrando un mayor interés por realizar un aporte en la calidad de vida de los habitantes de las localidades donde se instalan y por generar mecanismos de mitigación ante los posibles efectos medioambientales que producen.

Estos mecanismos van a tener la capacidad de ir perfeccionándose con el tiempo, de tal forma que las empresas pueden ir introduciendo reflexivamente las críticas de las comunidades en sus modelos de responsabilidad social así como también pueden ir incluyendo nuevos mecanismos aprendidos de otros contextos de éxito. De esta forma, en los últimos años las estrategias de RSC de la minera Los Pelambres ha ido ampliando su enfoque hacia la búsqueda de un desarrollo más integral de localidad, siguiendo modelos

similares a los de las ONGs de desarrollo rural u otras. Con la creación por parte de la empresa de la Fundación Minera Los Pelambres en el año 2002, con el objetivo de poder establecer mayores vínculos con la comunidad, se da inicio a una política de RSC sobre todo en ámbitos como la educación, el desarrollo productivo y la calidad hídrica de la zona (Milet, 2010: 36).

Pese a los cambios en el enfoque, no existe una visión positiva por parte de los habitantes respecto a esta Fundación y su accionar, y más en general, respecto a la misión social que la minera incluye en sus discursos. Con las transformaciones en las estrategias de responsabilidad no se ha logrado resolver la sensación de desconfianza por parte de las comunidades. En el caso de los habitantes de Salamanca, va a estar muy presente la idea de que estas nuevas prácticas de la minera no son más que estrategias más sofisticadas para limpiar su imagen:

“La actividad turística promovida por estas grandes empresas tiene solamente un objeto publicitario. No les interesa, pero sí que les interesa que la prensa o las autoridades digan no, es que sí efectivamente están haciendo capacitación” (Jorge).

Al observar el desplante comunicacional que utiliza la minera, por ejemplo a través de su página web o en las diversas publicidades que se encuentran en las calles de la zona, llama la atención la excesiva relevancia que se le da a la misión social y a los efectos sociales favorables que ha generado la empresa en la localidad, así como su activa preocupación por el medioambiente. Por ejemplo, en el camino hacia Salamanca es posible observar diversos avisos firmados por Minera Los Pelambres, mensajes de utilidad pública (por ejemplo: “al manejar tenga cuidado con los animales”) o invitaciones a eventos sociales (como a un concierto musical que se realizaría en Illapel). Ante estos ejemplos, cabe preguntarse si alguien que no conociera el logotipo de Minera Los Pelambres sería o no capaz de identificar qué tipo de institución es la responsable de dichos avisos. Seguramente, es más probable asociarlos a una institución pública local o a una ONG, pero difícilmente a una transnacional minera. Según Machado (2011: 136), en la mayoría de las localidades mineras de América Latina es posible dar cuenta de esta proliferación de los logotipos de las empresas que se cuelean en la vida social, cultural, deportiva, etc. de estos pueblos, lo que lo lleva a hablar de cierta saturación del espacio semiótico.

En los primeros años de relacionamiento comunitario, cuando la minera no basaba su discurso social en la generación de desarrollo en el territorio, sino más bien de los beneficios

económicos que podría generar su proyecto, la desconfianza por parte de la comunidad tomaba una forma más directa, que se relacionaba con los efectos perjudiciales que la minera no estaba considerando de manera adecuada en su proyecto ni en sus discursos. Sin embargo, cuando la empresa introduce esta crítica en su propia estrategia, la cual muta hacia un discurso de interés social, la desconfianza ya no es directa, pues ya no se basa en los discursos explícitos que lleva a cabo la empresa, sino que hacia lo que estaría implícito, no dicho u oculto. Cuando el centro de la desconfianza pasa a estar puesto en la veracidad de lo que se dice, y no ya no en el contenido del mensaje, se genera un escenario donde las dinámicas de comunicación entre la minera y la comunidad se hacen más complejas y la desconfianza más difícil de resolver. Se genera un círculo vicioso en la medida en que siempre existe la sospecha de que la minera puede estar engañando.

El nivel de sospecha respecto a la manipulación de la información que lleva a cabo la Minera en función de sus intereses es sumamente alto (Bebbington y Bury, 2012: 70). Es común escuchar entre los habitantes del valle historias sobre formas de conspiración que se darían por parte de un equipo estratégico de la empresa que está preparado para desarticular toda organización de la comunidad que pueda ir en contra de los intereses de la empresa. Se plantea la idea de que la minera genera complejas estrategias para dividir a las comunidades, con la finalidad de dificultar su organización.

En un primer momento la empresa llevaba a cabo negociaciones directas para dirimir los conflictos. Hoy en día se plantea que las estrategias de RSC van a surgir muchas veces como mecanismos que permiten desarticular conflictos, más que como una política ex ante por parte de las empresas mineras (Bebbington, 2010: 9). Predominan, por lo tanto, los esfuerzos por generar un consenso que evite la emergencia de nuevos conflictos. Esto explica la percepción de que el desplante comunicacional y de recursos para acciones de RSE, tiene que ver con una necesidad de evitar conflictos más que con una política genuina de retribución.

Esto es esperable en la medida en que la racionalidad de las empresas opera en función de la mayor o menor rentabilidad de sus procesos productivos. Tal como plantea uno de los entrevistados: “Su negocio no es cuidar el agua de los campesinos, no es cuidar el aire de las personas, su negocio es hacer minería”. En este sentido, el aumento de costos para la empresa en estos contextos de conflicto con las comunidades locales, puede venir dado por los procesos de judicialización, las paralizaciones de obras, las manifestaciones, etcétera.

Por lo tanto, es coherente que su interés primero sea detener estas formas de conflicto explícito que suponen importantes costos para su operar.

Hacia la institucionalidad pública

Las instituciones públicas ubicadas en Salamanca, específicamente la municipalidad, van a ser un puente de contacto con la minera a la hora de entregar recursos para la comunidad. La minera Los Pelambres tiene una oficina de Asuntos Externos así como una Fundación, que son las encargadas de las relaciones con la comunidad, para lo cual trabajan directamente con las principales instituciones locales, en las cuales va a estar presente la imagen corporativa de la fundación como una de las entidades asociadas (Cf. Aguilera, 2009).

Según datos reportados por la empresa, en el año 2009 la municipalidad de Salamanca recibió US 424.000 por concepto de patentes mineras. Gracias a estos ingresos ha podido llevar a cabo la construcción de diversas obras públicas infraestructura, así como distintas actividades sociales. Según datos del Sistema Nacional de Información Municipal, Salamanca es la comuna de la región de Coquimbo que mayores ingresos recibe por concepto de patentes mineras y está dentro de las 15 comunas de Chile que más dinero recibe por dicha patente. Todo esto va a levantar la sospecha de que la municipalidad va a estar estrechamente vinculada a la minera, a quien va acudir para financiar sus proyectos, a la vez que la minera va a generar alianzas con la municipalidad para generar mayores consensos y facilitar las negociaciones con la comunidad (Cf. De Echave, 2009: 185). Sobre esto una de las entrevistadas plantea:

“Aquí todo está en convenio, todas las conversaciones están en convenio. Los proyectos de intervención son cofinanciados, las intervenciones culturales también. La minera hace el aquelarre cultural, los déficit que puede tener naturalmente el municipio lo cubre la minera entonces es un trabajo de alianza estratégica entre lo público y lo privado” (Fernanda).

Esta poca confianza hacia la institucionalidad pública como un mediador válido que logre hacer frente a los efectos perjudiciales que produce la minera sobre la comunidad, se relaciona también a la incapacidad que ésta ha tenido para fiscalizar o sancionar a la minera ante los desastres medioambientales que ha producido.

Según Bebbington (2010: 58), son varios los autores que están de acuerdo respecto a que la calidad de las instituciones tiene mayor importancia que otros factores para determinar en qué medida la expansión de la minería impulsa el desarrollo y la sostenibilidad. En un contexto donde las instituciones públicas no tienen la calidad suficiente, son débiles los mecanismos para garantizar la transparencia respecto de las cantidades de dinero generados por la minería, su uso y su distribución. Debilidad que nos permite entender mejor el malestar y la desconfianza social que los entrevistados muestran respecto a los gastos sociales que lleva a cabo la empresa.

Esta crítica y falta de confianza se va a extender también hacia el Estado, el cual no ha aplicado varias sanciones correspondientes a leyes sobrepasadas por la minera, luego de tener conocimiento de los desastres medioambientales que ha producido (Larraín y Poo, 2010). Esto tiene que ver con la idea de que al Estado y su institucionalidad dejan pasar varios de los efectos perjudiciales que genera la minería a nivel de los territorios en función de sus réditos macroeconómicos (Cf. De Echave, 2009: 74). La crítica, muchas veces, recae en las leyes, como algo independiente a la minera y su operar. Así aparece la noción de que la minera opera bajo la ley sin embargo esta última es muy permisiva y por lo tanto injusta. Chile cuenta desde 1994 con un Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), que evalúa ambientalmente proyectos de inversión pública y privada. Sin embargo, existen serias limitaciones institucionales, radicadas especialmente en el Estado, que restringen la efectividad y legitimidad de la evaluación ambiental. Hay una falta de neutralidad de las agencias estatales a favor de los inversores, que hace que el SEIA sea predecible respecto de la casi inevitabilidad de la aprobación de proyectos (Rivera et al, 2013: 295).

Además, la responsabilidad que se le atribuye al Estado, se relaciona con el centralismo que marca su administración en Chile. Santiago concentra las principales decisiones así como los beneficios relacionados a la minería, pero las localidades donde se extrae el mineral son las que reciben los efectos perjudiciales. Algo similar se puede observar en el caso peruano (Bebbington and Bury, 2012: 70). Sobre esta situación una de las entrevistadas plantea:

“Están afectando tu hábitat, están afectando tu entorno, entonces necesitan recibir una compensación un poco mayor que el resto del país. Porque por ejemplo Santiago se lleva todos los beneficios de la Gran Minería y no tiene conflictos por la Gran Minería. Nosotros que vivimos en pueblos mineros somos los que sufrimos las consecuencias. Pueden decir que

tenemos mayores beneficios en términos económicos, pero tampoco, las grandes consecuencias las sufrimos nosotros” (Gloria).

Cuando se responsabiliza al Estado y su centralismo, lo que hay detrás es una crítica a la relación imbricada entre el poder político y económico en Chile que toma lugar en la ciudad de Santiago. Se asume que las principales decisiones en relación a las grandes inversiones mineras son tomadas por una elite política y económica desinteresada por los efectos que estas generan a nivel local y en función de sus intereses por conservar dicho poder. Esta relación va a generar una constante sospecha respecto al poder que tiene la minera más allá de toda oposición por parte de comunidades y organizaciones. Un poder que supone aliar sus intereses con importantes instituciones políticas, judiciales, e incluso de conocimiento, cuyos dueños o autoridades suelen tener algún tipo de relación con los principales grupos económicos del país, entre ellos el de la Familia Luksic, uno de los propietarios de Minera Los Pelambres. Así, por ejemplo, se sospecha de la veracidad de las investigaciones y estudios de impacto y de calidad del agua que levantan instituciones de investigación o universidades, independientes a la minera. Por ejemplo, se plantea entre los habitantes que los estudios que se han realizado sobre el agua de la zona no son válidos, pues todos ellos los han realizado empresas cuyos dueños están relacionados de alguna forma con el grupo Luksic, perdiendo con ello validez.

6.4. Idealizaciones y pesimismo

La idealización de la agricultura tradicional

El Valle del Choapa se caracteriza porque en él se ha desarrollado tradicionalmente la agricultura y la minería. Sin embargo, la agricultura siempre tuvo mayor predominancia, siendo la principal fuente de trabajos en la zona y la actividad productiva más estable. Lo habitual era la coexistencia y articulación de ambas actividades, existiendo una agricultura tradicional que producía diversificadamente y que lograba convivir con una minería pequeña y mediana, la que funcionaba como demandante de los alimentos que producía el sector agrícola. Sin embargo, con las transformaciones productivas que se han vivido, sobre todo en los últimos 20 años, esta relación se va a transformar y con ello va a cambiar el rol de la agricultura y la minería en las identidades, la organización social y cultural del valle.

El Valle del Choapa destaca por encontrarse en una zona aislada y de difícil acceso. Sin embargo, su riqueza agrícola lo transforma en un territorio atractivo para vivir y eje central de la reproducción social y cultural de las comunidades que en él se forman. De hecho, la historia de colonización de la zona se relaciona con un uso del territorio que se dio para comenzar un trabajo y una vida agraria que permitió el sustento y la reproducción de la comunidad local. En segundo lugar, el imaginario sobre la agricultura va a estar muy determinado por la historia más reciente, especialmente por el proceso de reforma agraria que se vivió en los años 60 y 70 en el país. Hasta los años 60 el Valle del Choapa estaba organizado por el sistema latifundista heredado por el reparto de tierras implementado durante la colonia. Sin embargo, con la reforma agraria se da una transformación radical en las relaciones sociales del campo. La reforma agraria supuso un fortalecimiento de las identidades campesinas, donde la agricultura ya no sólo es importante porque así lo fue para padres y abuelos, sino que se posiciona como fuente de trabajo, sobre todo a partir de los procesos de asalarización del trabajador agrícola (Arteaga, 2000: 120). Con la contrareforma y la apertura comercial del campo se generó una empresarización de la agricultura que generó éxito económico entre medianos y grandes empresarios agrícolas. Sin embargo, no logró el mismo resultado entre los pequeños agricultores. Esto fue generando un aumento de los trabajos no agrícolas en el campo como estrategia para diversificar las fuentes de ingreso.

La valorización de la agricultura entre los habitantes del valle se relaciona con un imaginario donde esta cumple un rol de subsistencia, que provee de los productos básicos para la vida de modo autosuficiente. Sin embargo, con la globalización del valle comenzó a disminuir la diversidad de cultivos, concentrándose la producción en los productos más rentables para la exportación. Por lo tanto, el mismo valle ya no es capaz de producir la diversidad de productos necesaria para la subsistencia. Esta transformación aparece repetida en los discursos con cierto tono nostálgico respecto a un pasado en el que la comunidad del valle lograba abastecerse a partir de la agricultura de modo autosuficiente.

“Acá antes habían cultivos tradicionales, el trigo, los porotos, las lentejas y el asunto de verduras, había mucho, ahora no hay nada” (Carlos). “Se destruyó el pequeño agricultor de cultivos anuales como es el trigo, el poroto y el ají, desaparecieron del Choapa, hoy día ya no se cultiva eso” (Ángel). “La gente ya no trabaja como antes el campo, antes se producía, ahora hasta el perejil te lo traen de Calera, cuando antes todo eso se producía en la zona. Ahora no

se produce nada, si van todos los camiones completos a buscar las cosas para Calera, traen la verdura toda de Calera” (Cristina).

También se relaciona la agricultura con una actividad familiar, en la que se participa de modo colaborativo. Sin embargo, esto era propio de la agricultura tradicional en la zona. Hoy, si bien existe la agricultura por cuenta propia de trabajo familiar, esta es marginal, existiendo un mayor porcentaje de agricultores asalariados. Esta transformación también genera una mirada nostálgica hacia el pasado donde la agricultura constituyente de la identidad del valle era una actividad familiar:

“Yo me acuerdo cuando chico, ahí en Chillepín, cosechábamos tunas, toda la familia, una vez al año. Era una faena de dos o tres días. Todo se repartía para las casas y lo que sobraba se vendía. La trilla, ya no existe trilla acá, porque el productor ha ido migrando también su forma de producir. Porque está concentrado en los más rentable, nogales, parras” (Ángel).

Resulta interesante observar que pese a que la agricultura ya no se dedica a la producción para el consumo local, su valorización como actividad ligada a la identidad del valle siga ligada a esa imagen. Si bien en algunos contextos estas transformaciones han generado pérdidas en las identidades campesinas ligadas al trabajo agrícola y la formación de nuevas identidades, en el caso del Valle del Choapa esto no se ha dado. Por ejemplo, uno de los entrevistados plantea:

“Yo tengo harta familia de campesinos, de agricultores, que han ido mutando y diversificando sus fuentes de ingresos. Yo aunque trabaje sentado en un escritorio no dejo de ser campesino, yo soy campesino si soy del campo, he vivido toda mi vida aquí. Y me imagino que el profesor sigue siendo campesino lo que pasa es que no se dan cuenta tal vez” (Ángel).

A partir de la construcción de embalses en los años 90 y 2000, se generó un cambio decisivo en la actividad agrícola, ya que permitió contar con la tecnología de riego suficiente para darle potencialidad hídrica a la zona. Esto ha fomentado la instalación y el éxito de diversas empresas ligadas a la exportación de frutales y a la producción de pisco. De esta forma, la identidad como campesinos está basada en la rememoración de una agricultura tradicional que hoy en día es marginal. Además, se basa en la nostalgia y el pesimismo respecto al futuro de esta actividad ideal que ya prácticamente ha desaparecido.

En un contexto donde la agricultura juega un rol central en la cultura e identidad local, la Gran Minería se sitúa como una actividad que tensiona esta identidad dado los impactos que

genera sobre la agricultura. La minería disputa con la agricultura recursos productivos básicos para cada actividad: el agua, la tierra y la mano de obra. En un contexto donde la magnitud de una inversión minera supera con creces a la actividad agrícola, esta disputa es desigual. Los conflictos por el agua se relacionan al uso extensivo y a la contaminación de este recurso que hace la minera, situación especialmente compleja dado el fuerte periodo de sequía por el que cruza la zona hace más de 10 años. Por la mano de obra, la disputa se relaciona con las dificultades que el mercado del trabajo agrícola tiene para competir con los salarios más altos que ofrece la minería. En este contexto, las posibilidades de trabajar dando servicios a la minera, a través del comercio, los hoteles, o empresas asociadas al trabajo minero, suponen mayores ventajas que seguir dedicándose a la agricultura. Esto afecta sobre todo la decisión de los jóvenes, quienes con menos motivaciones por trabajar en la agricultura buscan empleos ligados a la minera. La mayor rentabilidad de la minería respecto a la agricultura, genera, además, un aumento en los usos de suelo no agrícolas, sino que habitacionales. Cada vez más se subdividen los predios agrícolas y se convierte el uso de suelo a habitacional, perdiendo terreno para el cultivo y ganando espacio las empresas destinadas a hotelerías y servicios.

Por otra parte, las transformaciones que ha vivido la agricultura tradicional en el valle, que la ponen en un lugar cada vez más lejano al ideal de agricultura que reafirma la identidad de los habitantes, se le tienden a adjudicar casi exclusivamente a la minería y no se observan los efectos que han generado sobre ella, por ejemplo, la llegada de grandes agroindustrias frutícolas y ligadas al pisco ni el proceso propio de globalización del agro. Según Gómez (2011), este tipo de procesos de globalización neoliberal en el campo, intensifican las presiones competitivas sobre la agricultura, lo que, entre otras cosas, empeora las condiciones del empleo rural, pues disminuyen las oportunidades de empleo y se reducen los costos de la mano de obra al sustituir a trabajadores estables por una fuerza de trabajo temporal y flexible. La pérdida de diversidad de los cultivos en el valle, tiene que ver con las estrategias de los pequeños productores, quienes se cambian hacia cultivos más rentables y seguros, en función de las posibilidades de compra de las agroindustrias (Cf. Giarraca y Teubal, 2010: 115). Sobre esto uno de los entrevistados plantea:

“En los últimos años se han ido desarrollando otros productos como son las nueces por ejemplo, el damasco ha tendido a desaparecer y ha ido aumentando las plantaciones de nogales y de frutales de nuez en general, y ha sido bastante rentable para los agricultores. Es cosa de ver los agricultores ahora están en mucho mejor posición” (Roberto).

Según Dubroeuq y Livenais (2003) la especialización es un elemento de seguridad para los campesinos ya que la compra de las cosechas está garantizada y su valor se paga mes a mes durante el año. Sin embargo, genera también inconvenientes, ya que el proceso de cultivo y los precios están totalmente controlados por las empresas.

En definitiva, si bien la agroindustria genera profundas transformaciones sociales, paisajísticas y efectos en la vida de los habitantes del valle, se mantienen en un plano mucho más desapercibido en relación a la Gran Minería. Esto se puede explicar, en parte, por las distintas magnitudes de ambas formas de producción, siendo la industria minera mucho menos violenta y radical en las rupturas que genera en la vida social y en el medioambiente. Además, la agroexportación mantiene a los pequeños y medianos productores cumpliendo un rol central, pues a partir del sistema de cooperativas son ellos quienes en sus propios predios producen parte importante de la producción destinada a la exportación. De esta forma, se mantienen intrínsecamente vinculados al proceso productivo, a diferencia de lo que ocurre con la minería.

En el Valle del Choapa la agricultura de exportación no se constituye como un actor relevante en las disputas por los recursos naturales ni tampoco en los imaginarios de quienes defienden la agricultura de la zona. Por lo general los grupos que han movilizad los principales conflictos han sido las asociaciones de pequeños productores y los grupos medioambientalistas, donde la agricultura tradicional así como el medioambiente han estado en el centro de la defensa respecto a los efectos de la minería. Sin embargo, a diferencia de otros contextos donde coexisten grandes inversiones mineras con agroindustrias, como ocurre con el caso de Tambogrande en Perú (De Echave et al 2009: 18), medianos y grandes agricultores no han participado activamente en estos conflictos. No existe, como en el caso peruano, un discurso de desarrollo del territorio vinculado a este tipo de agricultura, sino más bien una idealización de la agricultura tradicional de pequeña escala. De esta forma, este tipo de agricultura, pese a que es la más relevante, desaparece del imaginario y de la idealización de los habitantes y por lo tanto no se constituye como un objeto de defensa.

El rol de esta idealización no puede analizarse al margen de las transformaciones que ha vivido el valle en las últimas décadas, sobre todo con la instalación de la Gran Minería. La agricultura de subsistencia, en contraste con el modelo minero, se entiende como una forma de producción llena de sentido, donde los habitantes juegan un rol central en el proceso

productivo, el cual es sustentable con el medioambiente y donde los productos del trabajo son bienes alimentarios, de valor central para la reproducción de la misma comunidad. Desde esta perspectiva, la idealización de la agricultura tradicional se puede comprender como una forma de respuesta ante las enormes transformaciones que ha generado la rápida instalación de capitales mineros y la sensación de alienación y extrañeza que ha despertado.

La destrucción del medioambiente

Una de las imágenes que se repite en el discurso cotidiano de los habitantes del valle cuando hacen referencia al devenir de su territorio hace referencia a Calama, como una ciudad en la que no quieren convertirse pero respecto a la cual, con pesimismo, creen estar cada vez más cerca. “Vamos a terminar como Calama”. Con esta frase se sintetiza una frustración hacia el futuro y la percepción que se tiene sobre esta ciudad del Norte Grande del país, típicamente minera.

En un estudio reciente, Meller (2013:154) llama la atención respecto al alto nivel de opiniones negativas que tenemos en Chile sobre la ciudad de Calama, como un contexto poco atractivo para vivir, lo cual es atribuido al efecto de la actividad minera en la zona. Esta idea está presente entre los habitantes del valle, lo que se relaciona, por una parte, con la sensación de que la zona se ha ido secando cada vez más. Salamanca se ubica a 1000 kilómetros de distancia de Calama, en un contexto climático semi árido, no desértico como el que se vive en la ciudad del Norte Grande, pero el cual se ha ido transformando en las últimas décadas profundamente, acercándose cada vez más a la desertificación por la falta de agua.

No existe claridad sobre en qué medida este cambio ha sido responsabilidad de la actividad minera, por la contaminación y uso extensivo que hace del agua de la zona, y en qué medida se relaciona con un proceso independiente de cambio climático por el que están pasando diversos valles centrales en el país. Entre los habitantes del valle tampoco hay consenso respecto a esto, sin embargo, sí le adjudican a la minera una forma de hacer uso del agua que, por lo menos, está apurando el proceso de desertificación.

La principal y más generalizada crítica hacia la minera por parte de los habitantes del valle, tiene que ver con los daños medioambientales que ésta ha generado. Se critica a la Gran

Minería en su forma de hacer uso de los recursos naturales del territorio, que no toma en consideración el valor productivo y cultural que estos tienen para los habitantes de los territorios que se ven afectados por el uso intensivo que hace de ellos la industria minera (Cf. Giarracca y Teubal, 2010: 115).

Que el factor medioambiental sea el más recurrente a la hora de criticar la minería en el valle, no necesariamente quiere decir que los habitantes comparten una sensibilidad ecologista. Esto los distingue, en gran medida, de los discursos de varios activistas medioambientales que han llegado a la zona a raíz de los efectos de la minería, algunos de los cuales van a centrar su crítica en el valor en sí mismo de los recursos naturales, más allá de toda relación productiva. En palabras de Martínez Alier (2011: 202):

“Cuando la gente pobre del campo y sobre todo las mujeres, ven que su propia subsistencia está amenazada por un proyecto minero o una represa o una plantación forestal o una gran área industrial, a menudo protestan no porque sean ecologistas sino porque necesitan inmediatamente los servicios de la naturaleza para su propia vida”.

Cuando los habitantes del valle recuerdan el valor patrimonial y cultural del medioambiente, suelen relacionarlo a una identidad productiva ligada a los recursos naturales. “Somos un territorio tradicionalmente agrícola”, repiten, con lo que dan cuenta de lo imbricado que están los recursos naturales en su forma de reproducción económica y social. Algo similar ocurre en el caso de Tambogrande en Perú (De Echave, 2009: 279).

Por otra parte, el valor del medioambiente aparece resaltando una forma de vida familiar en la que se disfrutaba del paisaje y los recursos naturales que brindaba:

“Nosotros cuando estábamos chicos nos metíamos acá adentro, a pescar, eran unos riachuelos así como que los cruzábamos de un salto y así unos pescados. Y era como el paseo de toda la familia ir para allá, era increíble. Eso ya desapareció” (Rodrigo).

Este discurso tiene que ver con una relación cotidiana y familiar con los recursos naturales y opera como una forma de mostrar cómo la naturaleza se imbrica estrechamente con las relaciones de copresencialidad en el valle. En él se reivindica el valor de uso de los recursos naturales en contraposición al valor de cambio que le adjudica la minera y sus trabajadores. Lo importante es que conectan el valor de uso a las identidades productivas tradicionales del valle así como a un sentido de comunidad o forma de vida local en el que la relación cotidiana con la naturaleza juega un rol fundamental. Por lo tanto, se define el valor de uso

de los recursos naturales según cómo se supone que tradicionalmente se ha reproducido la comunidad del valle. En contraposición, critican el valor de cambio que le da la minera a los recursos naturales como una amenaza a dicha forma de reproducción de la vida tradicional.

El valor del medioambiente entre los habitantes del valle se transforma y se explicita de una forma particular como reacción ante las transformaciones sociales y ambientales que la minera genera. No se puede separar el significado que estos le dan al medioambiente de los conflictos que han vivido con la minera. Sin la emergencia de estos conflictos, los discursos de los habitantes en relación a la importancia que en sus vidas tiene el agua, por ejemplo, seguramente serían diferentes. Lo que no quiere decir que sus discursos sean una construcción contingente de pura resistencia, pues es difícil imaginar que en un territorio relativamente pequeño y tradicionalmente agrícola como el Valle del Choapa, los recursos naturales no jueguen un rol fundamental en la historia, la tradición e identidades de sus habitantes.

Sin embargo, la forma como esta importancia se explicita y el contenido de los imaginarios, idealizaciones y resistencias que genera, están fuertemente determinados por los efectos de la minera y la historia de conflictos que se han desatado. Como plantea Santos, las nuevas realidades productivas implican “un verdadero redescubrimiento de la Naturaleza o por lo menos una revalorización total, en la cual, cada parte, es decir, cada lugar, recibe un nuevo rol, gana un nuevo valor” (Santos, 1995: 27).

Diferenciación y comunidad

Cuando los habitantes hacen referencia a la imagen de Calama como el futuro al que no quieren llegar pero al cual creen acercarse cada vez más, no sólo es al paisaje físico de esta ciudad minera al que hacen referencia, sino también al paisaje social. Calama destaca por ser una ciudad desértica y también por presentar características sociales que la han convertido en una ciudad poco atractiva para vivir. Es habitual que ciudades mineras destaquen por tener altos niveles de delincuencia, prostitución y marginalidad. Según el estudio de Barrientos et al (2009), en ciudades mineras como Antofagasta y Calama se da una lógica de habitar el espacio marcado por la presencia de trabajadores de la minería, hombres en su mayoría, quienes alejados de sus familias desarrollan su “masculinidad”, como elemento clave de su identidad como trabajadores mineros, a través de prácticas vinculadas a la prostitución y el alcohol.

Los trabajadores mineros destacan por recibir altos salarios en comparación a otros sectores. Además, suelen ser hombres provenientes de distintas ciudades del país, desde donde se desplazan en función del trabajo en la mina. La minería en Chile siempre ha estado ligada a una cultura de trabajo masculina y de derroche, donde las grandes cantidades de dinero que reciben se gastan de forma conspicua, sobre todo en alcohol y en el comercio sexual. Por lo mismo, las ciudades mineras se transforman en un polo de atracción para el comercio sexual y locales nocturnos. Los trabajadores ligados a la minería, especialmente aquellos que se desplazan entre las ciudades de Chile en función de los altos salarios que esta actividad les ofrece, llevan a cabo un constante cálculo racional en función de prever los beneficios económicos de sus extenuantes turnos y sus largos viajes. Por ejemplo, en los buses que conectan a la retirada Salamanca de la ciudad central de Santiago, es común escuchar entre sus pasajeros, casi exclusivamente hombres, hablar de montos, cantidades, divisiones y cálculos. Comparan entre ellos opciones y oportunidades. En esto se puede observar la reproducción de una cultura individualista vinculada al capitalismo, que se basa en el cálculo individual del interés personal y la orientación al logro (Petras & Veltmeyer, 2010: 440).

Los habitantes del valle, conscientes de esta cultura minera, reprochan una forma de vida que nombran como individualista, para hacer referencia a que los intereses de cada trabajador no se relacionan con los intereses colectivos de la comunidad del valle, sino con intereses individuales de personas cuyas vidas están arraigadas en otros territorios. El consumo conspicuo con el que se relaciona al trabajador minero sería reflejo de esto. Esto no quiere decir que estas formas de diferenciación basadas en el lujo no estén siendo reproducidas por los propios habitantes. Los lujos y derroches dan cuenta de dinámicas sociales que se reconocen como símbolos de la necesidad de status que están penetrando cada vez más en las formas de vida del valle. A esto se refieren con la imagen recurrente del “aspiracionalista”:

“Aquí se produce un fenómeno, la gente no le interesa ganar más plata porque el autóctono de Salamanca no tiene la mentalidad del empresario. Por ejemplo una familia de cuatro, cinco miembros, los papás más los hijos pequeños, con ganar un millón de pesos tienen para la casa, para que los niños estudien, una cuestión muy familiar. Pero la gente foránea que ha llegado y los jóvenes que se han ido formando en el área de la empresa tienen entre comilla la ambición o la aspiración de ser comerciantes, de llegar a prosperar, empresarios. Son modos de ver el mundo un poco distintos” (Ángel).

Con esta figura idealizada se resaltan los valores comunitarios, que validan como propios, respecto a los individualistas que se asocian a los trabajadores mineros y a los habitantes más jóvenes. Sin embargo, es habitual escuchar a habitantes de la zona hablar de los lujos en los que cada vez más incurren sus vecinos; los autos caros y las casas remodeladas. El mayor consumo en el valle queda claramente graficados con el aumento del parque automotriz, sobre todo de automóviles de alto valor, lo cual no sólo se aprecia con facilidad en el paisaje, sino que también es tema de conversación recurrente.

Por lo tanto, el exaltamiento de los valores comunitarios, no sólo es una respuesta a formas de vida foráneas que rechazan como espectadores, sino también a un cambio en las propias dinámicas e identidades. Ante este contexto, la referencia a estos valores permite dar una respuesta coherente ante cambios que son propios de una escala de territorialización diferente a la propia. Hay una resistencia a pensar que la identidad del habitante del valle puede mantenerse pese a la introducción de estas formas de consumo y de vida que se le adjudican a la minería, pues aparecen como contradictorias a la sustentabilidad de la reproducción económica y social del territorio y a la copresencialidad que todavía permanece.

7. Reflexiones finales

Los desafíos de lo agrominero en el Chile actual

El Valle del Choapa, con las transformaciones y conflictos que ha vivido desde los años 2000, representa un interesante ejemplo de los crecientes desafíos que tendrán que afrontar diversos territorios de Chile, tradicionalmente agrícolas, en la medida en que la industria minera a gran escala continúe su expansión. En este sentido, lo agrominero como realidad territorial cobra relevancia pública y como objeto de estudio. Algo similar está ocurriendo en distintos países de América Latina que están experimentando la expansión de la actividad minera en su territorio (Cf. Perreault, 2014: 18).

La principal novedad que nos muestra el caso del Choapa es el encuentro entre la Gran Minería con una agricultura de exportación y alto desarrollo, algo que hasta hace años era poco habitual, pues la actividad minera a gran escala se ha concentrado principalmente en el extremo norte, árido y poco poblado del país. Si bien en los valles agromineros la pequeña y mediana minería se ha desarrollado tradicionalmente, siempre fue una actividad secundaria respecto a la agricultura. Además, eran actividades que no sólo convivían sino que además se articulaban, ya que la agricultura actuaba como proveedora de alimentos para los campamentos mineros, por lo que se veía profundamente afectada cuando se daban caídas en la producción minera.

Hoy en día la Gran Minería desafía a la agricultura de la zona. Compiten por los recursos naturales, –agua y tierra, principalmente–, y por la mano de obra. Esto último no se da porque la industria minera genere una gran cantidad de empleos directos, sino por todos los empleos secundarios relacionados a los servicios y al comercio.

En este nuevo contexto va tomando fuerza el conflicto entre la lógica productiva que supone la Gran Minería del cobre con aquella propia del modelo agrícola que prima en los valles centrales de Chile, de manera similar a lo ocurrido desde hace ya algunos años en algunas zonas del norte de Perú (De Echave, 2009). Es el encuentro entre dos actividades productivas que desde la apertura comercial de los años 80 están dirigidas al mercado exterior, pese a lo cual muestran lógicas muy distintas a nivel de las dinámicas económicas, ambientales y culturales que despliegan territorialmente. En el Valle del Choapa se desarrolla una minería altamente intensiva en capital y no en mano de obra, pero con una

gran capacidad de dinamizar la economía local a través de la generación de servicios y comercio. Además, funciona como una actividad extractiva que supone fuertes impactos negativos sobre el medioambiente y el paisaje físico de la zona, afectando sobre todo la calidad y disponibilidad de agua.

La agricultura, en cambio, se articula con mayor fuerza con el trabajo de pequeños y medianos productores. Sin embargo, el dinamismo económico que genera al interior del valle es bajo y los impactos en la disponibilidad de agua altos. Representan actividades que operan a escalas muy distintas. El nivel de capital que moviliza la agricultura de exportación en la zona es mucho menor. Si bien la actividad agrícola también supone impactos medioambientales, estos se presentan de manera más gradual y no son tan percibidos por la comunidad. El gran contraste que supone la presencia de una empresa del tamaño de la minera Los Pelambres facilita el hecho de que la agricultura globalizada y de exportación pase desapercibida en sus efectos negativos.

Cuando analizamos los datos disponibles sobre los cambios socioeconómicos vividos en las últimas décadas, el caso del Valle del Choapa nos mostró cómo varios de las transformaciones más rápidas y profundas que vive un país que participa de la economía global a través de la exportación de materias primas, se pueden observar en territorios no metropolitanos, como los agromineros, proveedores de los recursos naturales o articulados a la logística para la exportación de éstos. Buen ejemplo de cómo la globalización desde América Latina puede mostrar su radicalidad al observar las transformaciones que se viven en los territorios no metropolitanos (Cf. Canales, 2005). En el Valle del Choapa, el funcionamiento de la minera Los Pelambres ha implicado grandes y rápidas transformaciones económicas que lo hacen destacar entre los territorios del país. Específicamente, esto se observa en los niveles de disminución de las tasas de pobreza e indigencia, la mayor diversificación de los empleos y el aumento del dinamismo económico.

Por otra parte, si bien la minería es fundamental por las transformaciones radicales en la macroeconomía, el paisaje y las relaciones sociales que genera, es la agricultura la que provee la mayor cantidad de empleos y es la actividad más significativa en la reafirmación de la identidad de las comunidades. Esta última, incluso en sus nuevas dinámicas de producción de exportación a mayor escala, generadora de importantes impactos negativos, es vivida como una forma de producción propia, a diferencia de la minería, que genera

fuertes tensiones sociales, medioambientales y culturales que ponen en cuestión la coherencia del territorio (Cf. Harvey, 2006: 245)

Ante territorios agromineros como el Valle del Choapa, resulta esclarecedor estudiar los cambios estructurales en estrecha relación a las identidades productivas relacionadas a la actividad minera y agrícola. Sus identidades productivas, ligadas a las materias primas, son centrales para entender sus imaginarios, pues la vida cotidiana está fuertemente marcada por estas industrias. Esto los conecta con la realidad del mundo rural, en el que se da una mayor relación de cercanía productiva con las materias primas, aunque intermediada por una dinámica de producción moderna, tecnológica y globalizada. La relación con lo global entre los habitantes del valle se desarrolla desde la escala local que define su geografía física (delimitada por los cerros que rodean al valle y la dificultad de acceso a los principales poblados) y social (basada en relaciones de copresencialidad que aún predominan en una localidad con población, si bien en crecimiento, aún pequeña).

Desde esta perspectiva es interesante la construcción y el fortalecimiento de imaginarios e idealizaciones como respuesta ante los profundos cambios que han vivido con el proceso de globalización que toma fuerza en los años noventa y dos mil. Categorías como “tranquilidad”, “comunidad”, “tradicional” y “autoconsumo” asumen un rol especial en sus discursos. De esta forma se va a vivir la paradoja de querer mostrarse como rurales y tradicionales desde sus imaginarios pero a la vez orgullosos de la mayor modernización y los mejores servicios de infraestructura que los acerca a formas de vidas típicamente urbanas y metropolitanas.

Estas formas de conciencia territorial, “de valle”, se han desarrollado vinculadas a los conflictos que se han desatado, lo que nos muestra cómo los territorios no pueden comprenderse de manera independiente a la escala económica, política y social en la que están inmersos, relación que va a tener un rol significativo en los procesos sociales a través de los cuales éstos se van constituyendo como tal (Bebbington et al, 2008: 2902).

Extractivismo, malestar y conflicto

Analizar los cambios que ha vivido el Valle del Choapa desde el punto de vista de las subjetividades, los imaginarios y las identidades de sus habitantes, nos permitió entender

cómo se ha construido una sensación de malestar cuando se hace referencia a la vida cotidiana y al futuro del territorio. Disconformidad que emerge como aparente paradoja en un contexto que destaca por presentar indicadores de fuerte dinamismo económico, disminución de la pobreza y generación de empleo a partir de los años 2000, con el inicio de las operaciones de Minera Los Pelambres. A través del relato de los habitantes del valle se intentó redibujar la configuración de este malestar.

Este concepto de malestar como una sensación entrampada ante procesos de crecimiento económico, resuena desde la publicación en 1998 del Informe de Desarrollo Humano elaborado por el PNUD, en el cual se mostraba cómo el buen desempeño de los indicadores macroeconómicos y sociales en Chile se condecían con una profunda sensación de malestar (PNUD, 1998). El modelo minero ejemplifica con claridad esta tensión. Las grandes inversiones mineras generan importantes impactos en los territorios donde se ubican los yacimientos así como en algunos aledaños o relacionados al circuito de explotación y distribución de los minerales. Si bien en muchos casos se generan transformaciones económicas positivas, sobre todo con una disminución en los niveles de pobreza, a la vez suelen producirse impactos medioambientales, económicos y sociales que suponen un desafío para la calidad de vida.

La minera ha generado una relación de enclave con el territorio, pues la mayoría de las rentas, tributos y empleos que crea no son para sus habitantes. Sin embargo, la magnitud del capital que moviliza logra generar dinamismo económico a nivel local, transformando radicalmente el mercado laboral y, con ello, la vida cotidiana. En este análisis el concepto de extrañeza cobró una relevancia central. La Gran Minería, de vocación exportadora y en manos de capitales multinacionales, generó una dinámica de territorialización que no facilita formas de identificación por parte de los habitantes del territorio, quienes por lo general viven como extraños y alienantes varias de las transformaciones que se han generado así como el fin que persigue esta empresa.

Lo que el malestar pone en duda es la sustentabilidad del dinamismo económico generado. Los nuevos empleos y empresas destinadas a darle servicios a la minera han permitido un incremento de los ingresos y estándares de vida de la mayoría de los habitantes del valle, existiendo incluso algunos que han logrado generar mayores riquezas. Sin embargo, esto ha ocurrido desde una lógica de dependencia económica y laboral con una empresa ajena a sus formas de vida. Dependencia que no está sujeta a contratos laborales que aseguren

estabilidad ante bruscas caídas en el precio del cobre, ni tampoco, a más largo plazo, respecto al término de operaciones de la minera en la zona.

Esta poca sustentabilidad temporal tiene que ver con la lógica misma del extractivismo (Bebbington and Bury, 2012). La lógica extractiva es insostenible en el tiempo porque le es inherente la destrucción de los recursos que explota. Su actividad se basa en la extracción y el agotamiento de los recursos, para luego retirarse a nuevos territorios donde aún no se ha iniciado este proceso (Giarracca y Teubal, 2010: 126).

Por otra parte, se genera un crecimiento en el número de delitos por lo que el malestar también está aparejado a una mayor sensación de peligrosidad. Habitualmente en Chile, las ciudades mineras suelen vincularse a una cultura relacionada con los altos salarios que reciben los trabajadores mineros, hombres y foráneos en su enorme mayoría, que han logrado reproducir una tradición de consumo muchas veces destinado al alcohol y la prostitución.

Las grandes inversiones mineras contribuyen en la generación de bruscas e importantes formas de diferenciación social dentro de los territorios del país y con ello aumenta el nivel de conflictividad interno de las comunidades (Petras & Veltmeyer, 2010: 440). Pudimos analizar cómo el malestar en el Valle del Choapa se construye como respuesta a la rápida instalación de una forma de capitalización individual, donde algunas familias son más beneficiadas con la actividad minera que otras y las dinámicas de diferenciación social basadas en el lujo cobran fuerza.

Este escenario es especialmente complejo en la medida en que debe convivir la riqueza con la alienación que genera la fuente de dicha riqueza. Como respuestas al enriquecimiento producto de la actividad minera se han generado divisiones internas y fuertes enjuiciamientos hacia aquellos que obtienen mayores beneficios económicos. Se despliega una tensión entre una lógica minera que genera importantes riquezas individuales versus los impactos negativos a nivel de la comunidad.

En este contexto, el malestar se configura como una respuesta ante el creciente riesgo aparejado a la actividad minera. Además de la inestabilidad laboral y el riesgo de ser víctima de delitos, los que han aumentado notablemente en los últimos años, especialmente importante es el riesgo de vivir desastres medioambientales, con la contaminación de las aguas y la pérdida de los recursos naturales sobre los cuales se constituyen los medios de

vida local (Bebbington and Bury, 2012: 67). Las dinámicas de ocupación del espacio que supone la Gran Minería en Chile, introducen de manera inusualmente rápida, estas formas de inseguridad en la vida cotidiana de sus habitantes.

Finalmente, un factor central en el malestar que viven los habitantes viene dado por la desconfianza. En un territorio como el Choapa, donde la principal actividad económica supone la movilización de grandes cantidades de riqueza y capital, a la vez que genera enormes impactos negativos en el territorio, la desconfianza adquiere un lugar central. En este territorio observamos relaciones sociales marcadas profundamente por la desconfianza: hacia la empresa minera, hacia los grupos medioambientalistas y opositores, hacia el Estado, hacia las autoridades locales y entre los mismos habitantes.

Esta compleja trama de desconfianza surge como respuesta a la paradoja que supone la Gran Minería en territorios como el Choapa, actividad a partir de la cual se generan importantes réditos económicos para ciertos grupos sociales, la mayoría externos al territorio, donde si bien algunos habitantes también reciben parte del “derrame” de la riqueza minera, y a la vez se generan dinámicas de sinergia económica (Cf. Bebbington et al 2008: 2902), lo que más marca el sentir compartido en el valle son los quiebres sociales y los impactos medioambientales que se generan así como la injusticia que supone una distribución desproporcionada de los beneficios mineros (Cf. Perreault, 2014; 29; Bebbington and Bury, 2012: 56).

Por otra parte, la desconfianza respecto a los actores políticos, fuertemente basada en el historial de cooptaciones que han marcado la relación entre la empresa y las comunidades, ha generado un importante desinterés por participar que dificulta en estos contextos la acción colectiva. Pudimos observar cómo este importante nivel de ruptura interna así como de conflicto con actores externos al territorio, no toma por lo general formas explícitas de movilización y conflicto, sino que se mantiene en los discursos pesimistas y el sentir de malestar. En este contexto, los principales momentos de explicitación del conflicto se han desatado luego de la aparición pública de informes técnicos que aseguran la existencia de importantes daños medioambientales o los eminentes riesgos de que este tipo de desastres ocurran. Los daños medioambientales, por su mayor capacidad de cuantificación y objetivación que van más allá de las ambigüedades en el lenguaje propio de la desconfianza, se han establecido como la principal bandera de lucha a través de la cual es posible explicitar el conflicto con movilizaciones sociales con mayor legitimación y participación de las

comunidades. En cambio, los impactos sociales y la sensación de injusticia que se reclama respecto a la distribución de beneficios de la minería, no se ha constituido como un motivo que facilite la movilización y desate el conflicto explícito.

Si bien en el valle las ONGs medioambientalistas juegan un rol muy relevante en este intento por explicitar el conflicto, suelen ser posturas más moderadas las que prevalecen en la mayoría de los habitantes, donde el objetivo final no es eliminar la actividad minera sino que lograr avanzar hacia una minería cuya escala sea más sustentable con la realidad del territorio (Bebbington, 2007: 19). Sin embargo, la sensación más claramente compartida por parte de los habitantes del valle es la del pesimismo ante la posibilidad de generar cambios profundos en el modelo de minería que está impactando sus vidas, lo que desmotiva y dificulta aún más la participación. Esto se ha entrecruzado con la creciente despolitización, en la medida en que se asume que cualquier representante o partido político, mantendrá una posición similar respecto a las grandes inversiones mineras (Cf. Gudynas, 2009), por lo que no existe una expectativa positiva respecto a la posibilidad real de cambio en la medida en que este no venga dado por transformaciones profundas en el modelo institucional y político que promueve a las grandes inversiones mineras en Chile.

Bibliografía

Abramo, L., Montero, C., & Reinecke, G., 1997. Cambio tecnológico, encadenamientos productivos y calificaciones del trabajo en Chile: un balance. En: M. Novick y M. Gallart (Comps.) Competitividad, redes productivas y competencias laborales: homogeneidad o segmentación. Cinterfor/OIT, Montevideo, pp. 145-191.

Abramovay, R. 2006., Para una teoría de los estudios territoriales. En: Manzanal, M., Neiman, G., Lattuada, M. (Eds.) Desarrollo rural. Organizaciones, instituciones y territorios. CICCUS, Buenos Aires, pp. 51-70.

Abramovay, R., Bengoa, J., Berdegué, J., Escobal, J., Ranaboldo, C., Ravnborg, H. M., & Schejtman, A., 2007. En: Territorios Rurales: Movimiento Sociales y Desarrollo Territorial Rural en América Latina, Rimisp - Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, Santiago de Chile.

Agacino, R., González, C., Rojas, J., 1998. Capital transnacional y trabajo: el desarrollo minero en Chile. Lom Ediciones, Santiago de Chile.

Agnew, J., 1999. Regions on the mind does not equal regions of the mind, *Progress in Human Geography*, 23 (1), 91-96.

Agosín, M., Bravo-Ortega, C., 2007. The emergence of new successful export activities in Chile. Latin American Research Network, Inter-American Development Bank, Washington, DC.

Aguilera, I., 2009. El vértigo de la globalización y su invasión en la geografía del Choapa. Valle del Chaliga. Universidad Arcis, Área de Investigación Etnohistoria, Santiago de Chile.

Álvarez, P., 2003. Agua y sociedad chilena. Antecedentes del contexto histórico y jurídico. En: Livenais, P., Aranda, X. (Eds.) Dinámicas de los sistemas agrarios en Chile Árido: La Región de Coquimbo. Universidad de Chile, Santiago de Chile.

Appadurai, A., 2001. La modernidad desbordada. Dimensiones culturales de la globalización. Ediciones Trilce, FCE, Buenos Aires.

- Aranda, X., 2003. Presentación. En: Livenais, P., Aranda, X. (Eds.) *Dinámicas de los sistemas agrarios en Chile Árido: La Región de Coquimbo*. Universidad de Chile, Santiago de Chile..
- Arellano-Yanguas, J., 2011. Aggravating the Resource Curse: Decentralisation, Mining and Conflict in Peru. *The Journal of Development Studies*, 47 (4), 617-638.
- Aroca, P., 2002. Impacto de la minería en la II Región. En: Meller, P., *Dilemas y debates en torno al cobre*. Dolmen/Centro de Economía Aplicada, Santiago de Chile.
- Arteaga, C., 2000. *Modernización agraria y construcción de identidades: identidad social, identidad laboral y proyectos de vida de temporeras/os frutícolas en Chile: El Palqui, 1969-1997*. FLACSO, México.
- Asún, R., Zúñiga, C., 2013. ¿Por qué se participa? Explicando la protesta social regionalista a partir de dos modelos psicosociales. *Psicoperspectivas*, 12 (2), 38-50.
- Ballard, C., Banks, G., 2003. Resource wars: the anthropology of mining. *Ann. Rev. Anthropol.* 32, 297-313.
- Barrientos, J., Salinas, P., Rojas, P., Meza, P., 2009. Minería, Género y Cultura. Una aproximación etnográfica a espacios de esparcimiento y diversión masculina en el norte de Chile. *Revista de Antropología Iberoamericana*, 4 (3), 385-408.
- Bebbington, A., 2007. La sostenibilidad social de los recursos rurales: apreciaciones a partir de los conflictos mineros en Latinoamérica. *Debate agrario*, 42, 31-78.
- Bebbington, A., Bebbington, D., Bury, J., Langan, J., Muñoz, J., Scurrah, M., 2008. Mining and social movements: struggles over livelihood and rural territorial development in the Andes. *World Development*, 36 (12), 2888-2905.
- Bebbington, A., 2010. Extractive Industries and Stunted States: Conflict, Responsibility and Institutional Change in the Andes. En: *Corporate Social Responsibility: Discourses, Practices and Perspectives*, ed. R. Raman, 97-115. Londres: Palgrave MacMillan.
- Bebbington, A., 2011. Minería, movimientos sociales y respuestas campesinas. Una ecología política de transformaciones territoriales. IEP, Lima.
- Bebbington, A., Bury, J., 2012. Minería, instituciones y sostenibilidad: desencuentros y desafíos. *Anthropologica*, 28 (28), 53-84.

- Berdegú, J., Rojas, F., 2014. La agricultura familiar en Chile. En: La Agricultura Familiar en América Latina. FIDA-Rimisp, Santiago de Chile.
- Berdegú, J., Jara, B., Fuentealba, R., Tohá, J., Modrego, F., Schejtman, A., Bro, N., 2011. Territorios funcionales en Chile. Documento de Trabajo N° 102. Programa Dinámicas Territoriales Rurales. Rimisp, Santiago de Chile.
- Borja, J y Castells, M. 1997. Local y global. La gestión de las ciudades en la era de la información. Taurus, Madrid.
- Brown, D., Cromartie, J., Kulcsar, L. 2004. Micropolitan areas and the measurement of American urbanization. *Population Research and Policy Review*, 23 (4), 399-418.
- Bowen, S., Medel, R., 2011. Movimientos sociales, territorio y conflicto ambiental. *Revista Kutral*, 3 (2), 85-101.
- Budds, J., Hinojosa, L., 2012. Restructuring and rescaling water governance in mining contexts: The co-production of waterscapes in Peru. *Water Alternatives* 5 (1), 119-137.
- Bury, J. 2007. Mining, migration and livelihood transformations in Cajamarca, Peru. In A. Bebbington (ed.) *Minería, movimientos sociales y respuestas campesinas. Una ecología política de transformaciones territoriales*. Instituto de Estudios Peruanos, Lima: pp. 231-277.
- Cademartori, J., Paéz, C., Soto, J., 2014. Tasas óptimas para el impuesto a la minería del cobre en Chile, *Revista Polis*, 13 (37), 299-316.
- Castro, M., Bahamondes, M., 1986. Surgimiento y transformación del sistema comunitario: las comunidades agrícolas, IV Región, Chile. *Revista Ambiente y Desarrollas*, 1(1), 111-26.
- Castillo, J., Sánchez, J., Kunze, V., Araya, R., 2003. Cuando el tamaño sí importa. Estudios de Caso de Chile. En: McMahon y Félix Remy, (Ed.) (2003) *Grandes minas y la comunidad. Efectos socioeconómicos y ambientales en Latinoamérica, Canadá y España*, Bogotá: Banco Mundial, IDRC, Alfaomega.
- Cereceda, L., Barría, L., 1984. Comportamiento económico y racionalidad del campesino, ICECOOP, Santiago de Chile.

Camus, P., 2004. Los bosques y la minería del norte chico, S. XIX. Un mito en la representación del paisaje chileno. *Historia (Santiago)*, 37(2), 289-310.

Canales, M., 2005. La nueva ruralidad en Chile: apuntes sobre subjetividad y territorios vividos. *Seminario Chile rural: Un Desafío para el Desarrollo Humano. Temas de Desarrollo Humano Sustentable*, (12), 33-39.

Canales, A., Canales, M., 2013. De la metropolización a las agrópolis: El nuevo poblamiento urbano en el Chile actual. *Polis*, 12(34), 31-56.

Canales, M., Hernández, M., 2011. Del fundo al mundo. Cachapoal, un caso de globalización agropolitana. *Espacio Abierto*, 20 (4), 579-605.

Carrión, F., 2013. Ciudades intermedias: entre una pirámide trunca y una red urbana. En: Canziani, J., Schejtman, A. (Eds.) *Ciudades intermedias y desarrollo territorial*. Fondo Editorial Pontificia Universidad Católica del Perú.

Clerc, J., 2013. Impacto regional del cobre. En: Meller, P. *La Viga Maestra y El Sueldo de Chile. Mirando el futuro con los ojos del cobre*. Uqbar Editores, Santiago de Chile.

Composto, C., 2012. Minería a gran escala y control social. Apuntes de investigación sobre el caso argentino. *A contra corriente*, 9 (3), 254-29.

Cortés, H., 2003. Evolución de la propiedad agraria en el Norte Chico (siglos XVI–XIX). *Dinámicas de los sistemas agrarios en Chile Árido: la región de Coquimbo*. Santiago.

Cresswell, T., 2004. *Place: a short introduction*. Blackwell Publishing, United Kingdom.

Damonte, G., 2012. Dinámicas rentistas: transformaciones institucionales en contextos de proyectos de gran minería. En: Grade (Eds.) *Desarrollo rural y recursos naturales*, Lima, pp: 95-122.

Delamaza, G., Thayer, E., 2013. ¿Qué piensan las regiones, cómo se comportan los territorios? Delimitando territorios para la gobernanza a través del análisis comparado de percepciones y prácticas en tres regiones del sur de Chile. Ponencia presentada al XXIX Congreso Latinoamericano de Sociología. Santiago de Chile.

Delamaza, G., 2009. *Tan lejos tan cerca: políticas públicas y sociedad civil en Chile*. Lom Ediciones, Santiago de Chile.

Dirven, M., 2002. Los encadenamientos de la agricultura chilena: acercamiento a una medición. Unidad de Desarrollo Agrícola CEPAL, 25 de marzo, Santiago de Chile.

Dubroeuq, D. y Livenais, P., 2003. Cambios sociales e implicaciones ambientales en el Alto Valle del Choapa. En: Livenais, P., Aranda, X. (Eds.) Dinámicas de los sistemas agrarios en Chile Árido: La Región de Coquimbo. Universidad de Chile, Santiago de Chile.

De Echave, J., Diez, A., Huber, L., Revesz, B., Ricard, X., Tanaka, M., 2009. Minería y conflicto social. IEP / CIPCA / CBC / CIES, Lima.

Ffrench-Davis, R., 2003. La inversión extranjera directa en Chile. Hacia un Chile competitivo: Instituciones y políticas, 1a ed., Santiago, Editorial Universitaria, 287-324.

Forsberg, T., 2003. The Ground without foundation: territory as a social construct. *Geopolitics*, 8 (2), 7-24.

García, J., 2006. Geografía Regional. En: Hiernaux, D. y A. Lindón (Eds.). Tratado de geografía humana. Anthropos. Universidad Autónoma Metropolitana. México.

Gay, C., 2009. Historia física y política de Chile. Agricultura I. Biblioteca fundamentos de la construcción de Chile.

Gil, V., 2009. Aterrizaje minero: cultura, conflicto, negociaciones y lecciones para el desarrollo desde la minería en Ancash, Perú. Instituto de Estudios Peruanos, Lima.

Giarracca, N., Teubal, M., 2010. Disputas por los territorios y recursos naturales: el modelo extractivo. *Revista Alasru (Nueva Época)*, 5, 113-134.

Goicovic, I., 2000. Conflictividad social y violencia colectiva en Chile tradicional. El levantamiento indígena y popular de Chalinga (1818). *Revista de Historia Social y de las Mentalidades*, (1) 4, 51-86.

Goicovic, I. 2009. Estructura agraria y composición familiar en el Valle del Choapa. Illapel, Chile, 1854. En: Celton, D., Ghirardi, M. y Carbonetti, A. (Coord.), Poblaciones históricas. Fuentes, métodos y líneas de investigación, ALAP Editor, Río de Janeiro, pp. 439-453.

Gómez, S. 2011. Reflexiones sobre la nueva ruralidad en América Latina. *Revista Paraguaya de Sociología*, 48 (138).

Guajardo, J. 2007. La agenda minera en Chile: revisión y perspectivas. CEPAL, Santiago de Chile.

Guydnas, E., 2010. El nuevo extractivismo progresista. Boletín de seguimiento a políticas de recursos naturales, Año IV, Número 8. Centro de estudios para el desarrollo laboral y agrario.

Gudynas, E., 2011. Alcances y contenidos de las transiciones al post-extractivismo. Ecuador Debate, 82, 60-79.

Haesbaert, R., 1997. Des-territorialização e identidade: A rede "gaúcha" no Nordeste. Niterói: EDUFF.

Haesbaert, R. 2007. O mito da desterritorialização: Do fim dos territórios à multiterritorialidade. 2. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2006.

Harvey, D., 2006. The sociological and geographical imaginations. International Journal of Politics, Culture, and Society, 18(3-4), 211-255.

Hiernaux, D., Lindón, A., 2006. Tratado de geografía humana. Anthropos. Universidad Autónoma Metropolitana. México.

Horowitz, L., 2011. Interpreting industry's impacts: Micropolitical ecologies of divergent community responses. Development and Change, 42(6), 1379-1391.

Laderach, J., 2003. The Little Book of Conflict Transformation. Intercourse: Good Books.

Llános-Hernández, L. 2010. El concepto del territorio y la investigación en las ciencias sociales. Agricultura, sociedad y desarrollo, 7(3), 207-220.

Larraín, S., Poo, P., 2010. Conflictos por el agua en Chile. Santiago: Andes.

Larraín, S., 2012. Naturaleza y mercado: la privatización y transnacionalización del patrimonio ambiental de Chile contradice sus 200 años de independencia. En: Bazile, D. (Ed.) Aún Creemos en los Sueños, Collection Le monde diplomatique, Chile.

Livenais, P., Janssen, E., Reyes, H. 2003. Las transformaciones territoriales contemporáneas de la pequeña agricultura del alto valle del Choapa. En: Aranda, Dinámicas de los sistemas agrarios en Chile Árido: La región de Coquimbo. Santiago de Chile, pp. 361-396.

Livenais, P., Aranda, X., 2003. Dinámicas de los sistemas agrarios en Chile Arido: La Región de Coquimbo. Santiago de Chile.

Machado, H., 2011. El auge de la Minería transnacional en América Latina. De la ecología política del neoliberalismo a la anatomía política del colonialismo. En: La Naturaleza Colonizada. Ecología política y minería en América Latina. Buenos Aires. Ediciones CICCUS. CLACSO, Colección Grupos de Trabajo.

Machado, H., 2013. Crisis ecológica, conflictos socioambientales y orden neocolonial: Las paradojas de NuestrAmérica en las fronteras del extractivismo. REBELA-Revista Brasileira de Estudos Latino-Americanos, 3(1).

Martinez Alier, J., 2011. Hacia una economía sostenible: dilemas del ecologismo actual. Revista de economía crítica, (11), 186-204.

McMahon, G., Remy, F., 2003. Grandes minas y la comunidad. Efectos socioeconómicos y ambientales en Latinoamérica, Canadá y España, Bogotá: Banco Mundial, IDRC, Alfaomega.

Meller, P., 1998. Un siglo de economía de política chilena (1890-1990), Cieplan, Santiago de Chile.

Meller, P., 2002. Dilemas y debates en torno al cobre. Dolmen-CEA. Santiago de Chile.

Meller, P., 2013. La Viga Maestra y El Sueldo de Chile. Mirando el futuro con los ojos del cobre. Uqbar Editores, Santiago de Chile.

Meller, P., Zenteno, I., 2013. América Latina & la bendición de los recursos naturales. En: Meller (Ed.) Recursos naturales y diversificación exportadora. Una mirada de futuro para América Latina, Cieplan, Santiago de Chile.

Meller, P., Zenteno, I., 2013. Diversificación de exportaciones en América Latina: experiencias y lecciones para políticas públicas. En: Meller (Ed.), Recursos naturales y diversificación exportadora. Una mirada de futuro para América Latina, Cieplan, Santiago de Chile.

Milet, P., 2010. La responsabilidad empresarial en la Gran Minería en Chile: Los casos de Los Pelambres y Los Bronces. Revista de Negocios Internacionales, 3 (3), 19-50.

Obando, L., Chavarría, A., Jure, A., 2008. Conflictos socioambientales como oportunidad de cambio para los territorios. Revista Criterios. Centro de investigaciones y publicaciones Universidad Mariana.

Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales – OLCA, 2004. Estrategias de gestión de las diferentes etapas del conflicto Compañía Minera los Pelambres vs. Pescadores de Los Vilos y Agricultores de los Valles del Choapa y Pupío en la cuarta región de Chile: informe técnico final.

ODEPA, 2011. Agricultura chilena. Información social y productiva según tamaño del productor y localización geográfica.

Ortega, L., 2010. La minería del cobre del norte chico (tradicional) y los medianos y pequeños productores en perspectiva histórica. Si somos americanos. Revista de estudios transfronterizos. 10 (2), 37-59.

Ortega, L., 2012. La crisis de la minería del cobre en el norte tradicional (Norte Chico, Chile) en la primera mitad del siglo XX y la decadencia de la región de Coquimbo. Tiempo Histórico, 4, 43-66.

Painter, J., 2010. Rethinking territory. Antipode, 42(5), 1090-1118.

Paasi, A., 2003. Territory. In: Agnew, J., Mitchell, K., Toal, G. (Eds.) A Companion to Political Geography, pp 109–122. Oxford: Blackwell

Peet, R., Robbins, P., Watts, M., 2010. Global political ecology. Routledge.

Petras, J., & Veltmeyer, H., 2010. A Class Perspective on Social Ecology and the Indigenous Movement. Critical Sociology, 36(3), 437-452.

Perreault, T. 2014. Minería, Agua y Justicia Social en los Andes: Experiencias Comparativas de Perú y Bolivia. Centro Bartolomé de las Casas, Cusco.

PNUD, 1998. Informe de desarrollo humano en Chile: Las paradojas de la modernización. Santiago, Chile.

Raczynski, D., Serrano, C., 2001. Descentralización. Nudos críticos. Corporación de investigaciones económicas para Latinoamérica, Santiago de Chile.

- Razeto, J., Suckel, H., 2011. Territorios en transformación. Trayectorias agrarias en el valle del Aconcagua. *Revista Paraguaya de Sociología*, 48 (138), 249-262
- Rivera, C., Navarro, R., Rauque, M. De la Maza, G., 2013. Evaluación ambiental, ciudadanía y Estado en Chile: ¿Es posible avanzar hacia una democracia ambiental?, En: Monje-Reyes, P., Guilherme, F., (Eds.) *Ciudadanía, territorio y políticas públicas*. Universidad Arcis, Santiago de Chile.
- Rivera, N., Aroca, P., 2014. Escalas de producción en economías mineras. El caso de Chile en su dimensión regional. *Revista EURE - Revista De Estudios Urbano Regionales*, 40(121), 247-270.
- Rolando, N., 2003. Diagnóstico y perspectivas de la situación agropecuaria de la región de Coquimbo. Livenais, P., Aranda, X. (Eds). *Dinámicas de los sistemas agrarios en Chile Arido: La Región de Coquimbo*. Santiago de Chile.
- Romero, H., 2002. El territorio como espacio de integración local y global. En *Revista ambiente y desarrollo*. 18 (2-3-4), 177-181.
- Ruiz, C., 2000. Comunidades y cacicazgos de Choapa. *Estudios coloniales*, (1), 79-128.
- Saade, M., 2013. Desarrollo minero y conflictos socioambientales: los casos de Colombia, México y el Perú. *Cepal, Serie Macroeconomía del Desarrollo No.137*.
- Sachs, J., Warner, A., 1995. *Natural Resource Abundance and Economic Growth*. National Bureau of Economic Research working paper 5398. Cambridge, MA.
- Santos, M., 1995. *Metamorfosis del espacio habitado*. Oikos-tau, Barcelona.
- Sassen, S., 1994. *Cities in a world economy*. Thousand Oaks, CA.: Pine Forge Press.
- Schejtman, A., 2013. Desarrollo territorial rural y ciudades intermedias. En: Canziani, A., Schejtman, A., (Eds.) *Ciudades intermedias y desarrollo territorial*. Fondo Editorial Universidad Católica del Perú.
- Schejtman, A., Berdegué, J., 2003. *Desarrollo territorial rural. Aspectos destacados de experiencias en proceso en América*. Rimisp-Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural. Santiago, Chile.

Strauss, A., Corbin, J., 1994. Grounded Theory Methodology: An Overview. En: Denzin, H., Lincoln, Y., Handbook of Qualitative Research, 273-285. Thousand Oaks: SAGE.

Svampa, M., 2011. Modelos de desarrollo, cuestión ambiental y giro eco-territorial. En: La Naturaleza Colonizada. Ecología política y minería en América Latina. Buenos Aires. Ediciones CICCUS. CLACSO, Colección Grupos de Trabajo.

Tarrow, S., 1997. El poder en movimiento. Los movimientos sociales, la acción colectiva y la política. España: Alanza Editorial.

Universidad Católica del Norte, 2007. Evolución del desarrollo productivo de la región de Coquimbo. Informe de avance n°1

Urkidi, L., 2008. Movimientos anti-mineros: el caso de Pascua-Lama en Chile. In Revibec: revista de la Red Iberoamericana de Economía Ecológica, (8), 063-77.

Vélez-Torres, I., 2014. Governmental extractivism in Colombia: Legislation, securitization and the local settings of mining control. Political Geography, 38, 68-78.

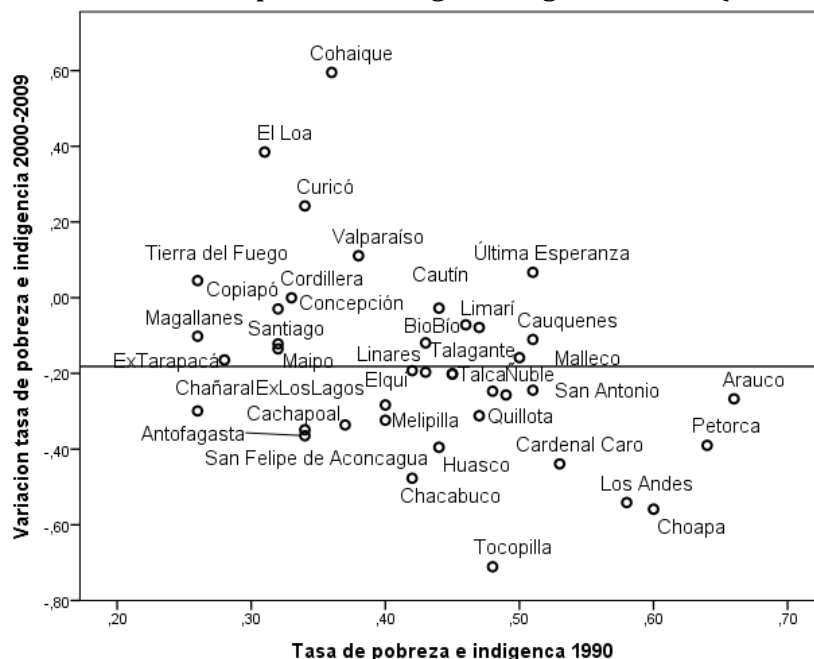
Watts, M., 2000. Political Ecology. In: Sheppard, E., Barnes, T. (Eds.) A Companion to Economic Geography, pp. 257-74. Oxford and Malden, MA: Blackwell.

Yañez, N., Molina, R., 2008. La gran minería y los derechos indígenas en el norte de Chile. Lom Ediciones. Santiago de Chile.

Apéndice

Gráfico 4.

Evolución de la tasa de pobreza e indigencia según Provincia (2000-1990)



Fuente: elaboración propia según datos de la encuesta Casen

Cuadro 5.

Tasa de pobreza e indigencia en las comunas de la provincia del Choapa

	Posición de mayor a menor porcentaje de población pobre e indigente		Variación en el porcentaje de población pobre e indigente 2009-2011
	2009	2011	
Salamanca	133° (17,6%)	184° (14,0%)	-3,6%
Los Vilos	172° (16%)	68° (22,0%)	6,5%
Canela	189 (14,6%)	100° (19,4%)	4,8%
Illapel	193 (14,3%)	261° (8,9%)	-5,4%

Fuente: Elaboración propia a partir de Casen 2009 y 2011
Se considera un total de 323 comunas.

Cuadro 6.
Tasas de desocupación provincia del Choapa

Posición respecto al total (de menor a mayor %)	Tasa de desocupación			Porcentaje de aumento de la tasa de desocupación		
	1990	2000	2011	1990-2000	2000-2011	1990-2011
1°	Linares (2,3%)	C. Caro (2,8%)	Limarí (2,2%)	Los Andes (-8,7%)	Copiapó (-3,2%)	Los Andes (-9,2%)
2°	Petorca (2,4%)	T. del Fuego (2,8%)	C. Caro (2,3%)	C. Caro (-4,4%)	Ex. Región de Tarapacá (-3,2%)	C. Caro (-4,8%)
3°	Biobío (2,6%)	Ú. Esperanza (2,8%)	Cauquenes (2,4%)	Ú. Esperanza (0,9%)	San Antonio (-3%)	Maipo (-3,0%)
38°	Maipo (6,3%)	Los Andes (6,8%)	Los Andes (6,2%)	Copiapó (3,1%)	Magallanes (1,2%)	Biobío (2,4%)
39°	C. Caro (7,2%)	Copiapó (6,9%)	Concepción (7,1%)	Choapa (3,3%)	Arauco (2,9%)	Cautín (2,7%)
40°	Los Andes (15,4%)	San Antonio (7,8%)	Arauco (8,4%)	San Antonio (4,4%)	T. Del Fuego (3,1%)	Arauco (4,5%)
	5° Choapa (3,1%)	33° Choapa (6,4%)	26° Choapa (4,4%)		12° Choapa (-2,0%)	33° Choapa (1,4%)
Fuente: elaboración propia a partir de encuesta Casen 1990, 2000 y 2011. Total de provincias consideradas: 40						

Cuadro 7
Tasa de contratación

Posición respecto al total (de menor a mayor %)	Tasa de contratación			Porcentaje de aumento de la tasa de contratación		
	1990	2000	2011	1990-2000	2000-2011	1990-2011
1°	Cauquenes (28,5%)	Petorca (37,9%)	Cauquenes (44,0%)	San Felipe (-15,6%)	Cauquenes (0,0%)	Maipo (-6,6%)
2°	C. Caro (34,2%)	Choapa (41,5%)	Cautín (51,7%)	Malleco (-14,5%)	El Loa (0,8%)	Aconcagua (-5,0%)
3°	Ñuble (34,2%)	Cauquenes (44,0%)	Ñuble (55,9%)	Arauco (-14,3%)	Copiapó (2,0%)	Valparaíso (-3,1%)
38°	Magallanes (69,1%)	Chañaral (65,7%)	Antofagasta (73,2%)	C. Caro (13,0%)	Malleco (17,4%)	Linares (22,9%)
39°	San Felipe (69,6%)	Copiapó (66,2%)	Los Andes (74,3%)	Cauquenes (15,4%)	Choapa (19,9%)	Curicó (25,0%)
40°	Antofagasta (72,1%)	El Loa (70,9%)	Chañaral (74,6%)	Ñuble (15,6%)	Petorca (23,3%)	C. Caro (26,4%)
	7° Choapa (43,0%)		13° Choapa (61,4%)	21° Choapa (-1,5%)		34° Choapa (18,4%)
Fuente: elaboración propia a partir de encuesta Casen 1990, 2000 y 2011. Total de provincias consideradas: 40						

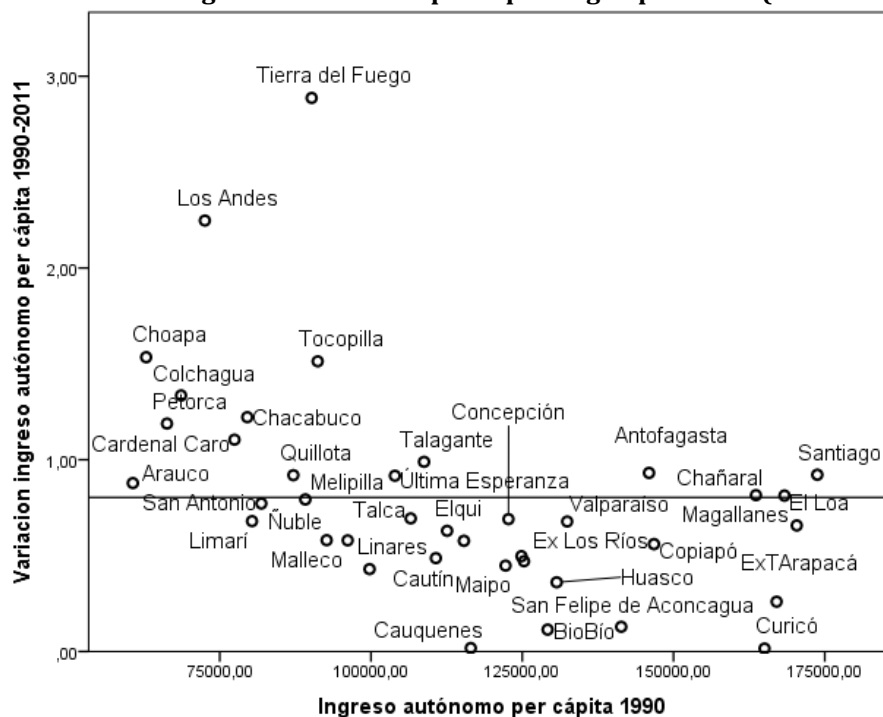
Cuadro 8
Porcentaje de ocupados afiliados a algún sistema previsional

Posición respecto al total (de menor a mayor %)	Porcentaje de ocupados afiliados			Aumento del porcentaje de ocupados afiliados		
	1990	2000	2011	1990-2000	2000-2011	1990-2011
1°	C. Caro (30,6%)	Malleco (47,1%)	Choapa (17,3%)	Arauco (-21,3%)	Los Andes (-46,1%)	Los Andes (-54,0%)
2°	Cauquenes (37,6%)	Petorca (47,5%)	C. Caro (18,0%)	Tocopilla (-17,4%)	Antofagasta (-37,4%)	Cordillera (-44,1%)
3°	Petorca (41,5%)	Choapa (49,5%)	Chacabuco (22,9%)	Malleco (-15,6%)	Coyhaique (-36,5%)	Biobío (-39,3%)
38°	Los Andes (77,1%)	El Loa (78,2%)	Petorca (64,6%)	Ñuble (11,4%)	Malleco (4,4%)	Chañaral (7,8%)
39°	T. del Fuego (77,3%)	Magallanes (77,8%)	Arauco (62,7%)	Cauquenes (14,3%)	Arauco (15,7%)	Cauquenes (9,3%)
40°	Tocopilla (80,0%)	T. del Fuego (76,0%)	Chañaral (74,6%)	C. Caro (23,8%)	Petorca (17,1%)	Petorca (21,1%)
	8° Choapa (48,0%)			24° Choapa (1,5%)	7° Choapa (-32,2%)	7° Choapa (-31,5%)
Fuente: elaboración propia a partir de encuesta Casen 1990, 2000 y 2011. Total de provincias consideradas: 40						

Cuadro 9
Cambio en el número de empresas, según tamaño (2005-2012)

		Salamanca	Illapel	Los Vilos	Canela
Pequeñas empresas	2005	1.416	1.512	875	297
	2012	1.674	1.624	973	335
	Variación 2005-2012	18,2%	7,4%	11,2%	12,8%
Medianas empresas	2005	11	15	4	0
	2012	26	27	13	0
	Variación 2005-2012	136,4%	80%	225,0%	0%
Grandes empresas	2005	1	3	1	0
	2012	7	7	4	1
	Variación 2005-2012	600,0%	133,3%	300,0%	0%
Total	2005	1.595	1.785	1.037	334
	2012	1.869	1.904	1.093	370
	Variación 2005-2012	17,2%	6,7%	5,4%	7,9%
Número de habitantes por empresa	2005	15,9 (64°)	17,5 (94°)	17,7 (101°)	26,4 (259°)
	2012	13,74 (53°)	16,4 (109°)	17,3 (137°)	22,6 (247°)
	Variación 2005-2012	-13,8% (276°)	-6,1% (232°)	-2,2% (113°)	-14,2 (106°)
Fuente: elaboración propia a partir de datos del SII e INE Número de comunas consideradas: 345. Posición en orden de menor a mayor porcentaje					

Gráfico 5
Variación de los ingresos autónomos per cápita según provincia (1990-2011)



Fuente: elaboración propia. Línea horizontal corresponde a la media nacional

Cuadro 10
Desviación estándar de los ingresos autónomos per cápita según provincia

Posición respecto al total (de menor a mayor valor)	1990	2000	2011
1°	Tierra del Fuego (48.311)	Cardenal Caro (84.892)	Cauquenes (134.120)
2°	Choapa (53.185)	Huasco (100.813)	Arauco (138.192)
3°	Arauco (62.737)	Choapa (112.894)	San Antonio (163.280)
37°	Biobío (409.329)	Biobío (638.562)	Ex Región de Tarapacá (410.345)
38°	Curicó (585.112)	Cordillera (639.978)	Santiago (614.244)
39°	Cauquenes (632.489)	Limarí (1.475.830)	T. del Fuego (766.448)
			24° Choapa (271.731)

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta Casen 1990, 2001 y 2009
 Total de provincias consideradas: 39

Cuadro 11.**Desviación estándar de los ingresos autónomos per cápita según provincia**

Posición respecto al total (de menor a mayor valor)	1990	2000	2011
1°	Tierra del Fuego (48.311)	Cardenal Caro (84.892)	Cauquenes (134.120)
2°	Choapa (53.185)	Huasco (100.813)	Arauco (138.192)
3°	Arauco (62.737)	Choapa (112.894)	San Antonio (163.280)
37°	Biobío (409.329)	Biobío (638.562)	Ex Región de Tarapacá (410.345)
38°	Curicó (585.112)	Cordillera (639.978)	Santiago (614.244)
39°	Cauquenes (632.489)	Limarí (1.475.830)	T. del Fuego (766.448)
			24° Choapa (271.731)
Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta Casen 1990, 2001 y 2009			
Total de provincias consideradas: 39			